

JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA EN MATERIA DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y PRIVADO *

(1985)

José Antonio CORRIENTE CÓRDOBA

ÍNDICE DE MATERIAS

A

ARRENDAMIENTOS URBANOS:

aplicación beneficios LAU:19

ASILO: 2

AVERIAS: de mercancía en transporte terrestre: 13.

C

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES:

— en divorcio de españoles residentes en España, 12.

CONTRATOS DE TRABAJO:

— celebrados en España para trabajar en el extranjero:3.

CONVENIOS:

— Europea de Derechos Humanos: 16.

— Cultural hispano-argentino 23.3.71: 1,15,18,21.

— Ginebra 28.7.51 Estatuto Refugiados: 2,6,9.

— Europeo de extradición: 5.

— Int. Unificación métodos análisis vinos: 7.

— Paris 20.3.1883 Propiedad Industrial:10.

— Ginebra 19.5.56 Transporte Terrestre:13.

* Esta Sección se compone de:

— *Índice de materias*: por orden alfabético, una clasificación de las principales cuestiones a que se refieren las decisiones judiciales, con indicación del número que (situado en su cabecera) tiene cada una de ellas en la recopilación.

— *Índice cronológico y numérico de sentencias y autos*: Se recogen ordenados por su fechas, las sentencias y autos pronunciados por el Tribunal Supremo y el Constitucional durante 1985, en relación con materias de Derecho Internacional.

— *Recopilación de sentencias y autos*: Al pie de cada uno de ellos se indica la fuente de que se ha obtenido: *Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi (RJA)*, *Boletín de Jurisprudencia Constitucional (BJC)*.

- N.U. Estupefacientes:23.
- hispano-alemán Seguridad Social: 24.
- Transporte Internac. Mercancías por Carretera: 30.
- Varsovia 12 10.1929 Transporte Aéreo: 31.

D

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE-
RECHOS HUMANOS: 6,16.
DERECHO DE ASILO: Vid. ASILO.
DERECHOS FUNDAMENTALES:
relación con extradición: 17.
DIVORCIO:12.
DROGAS:Tráfico:23.

E

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EX-
TRANJERAS: Vid SENTEN-
CIAS EXTRANJERAS.
ESPAÑOLES: contratados para tra-
bajar en extranjero:3.
ESTATUTO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL:10.
ESTATUTO DE LOS REFUGIA-
DOS: Vid. CONVENIOS, RE-
FUGIADOS.
EXTRADICIÓN:
— pasiva:5,17.
— Convenio con EEUU:17.
— Convenio Europeo:5.
— Convenio con Italia:5.
EXTRANJEROS:
— convalidación y reconocimiento
títulos:1,15,18,28.
— permisos residencia y trabajo:
8,11,14,22,25.
— aplicación beneficios LAU:19.
— expulsión:26.

F

FLETES DE CARGA: transporte
aéreo:31.
FRAUDE DE LEY:12.

I

INOCENCIA: presunción:16.
INVALIDEZ: Conv. Seguridad So-
cial hispano-alemán:24.

L

LEY:
— 5/1984, 26 marzo, Refugiados y
derecho de asilo:2,6,9.
— 30 diciembre 1969 Trabajadores
hispanoamericanos:11,14.
LITISPENDENCIA INTERNACIO-
NAL: excepción:29.
LUGAR DE CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES:29.

M

MARCAS:10,20.
MONEDA EXTRANJERA: Pago de
salarios: 4.

O

OBLIGACIONES: lugar de cum-
plimiento:29.
ODONTÓLOGOS: 1,15,18,21,28.

P

PERMISOS DE RESIDENCIA Y

TRABAJO: vid. EXTRANJEROS.

PORTEADORES: responsabilidad: 30.

PRESCRIPCIÓN: Interrupción y suspensión transporte terrestre: 13.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:16.

PROPIEDAD INDUSTRIAL,10,20.

R

REBUS SIC STANTIBUS: fluctuación cambio moneda:4.

RECIPROCIDAD: arrendamientos urbanos:19.

REFUGIADOS:2,6,9,27.

RESPONSABILIDAD: del porteador en transporte mercancías por carretera:30.

S

SEGURIDAD SOCIAL: Convenio hispano-alemán:24.

SENTENCIAS EXTRANJERAS:

Ejecución:12.

T

TÍTULOS PROFESIONALES: convalidación y reconocimiento de los obtenidos en extranjero: 1, 15,18,21,28.

TRÁFICO DE DROGAS:23.

TRATADOS INTERNACIONALES:

— vid. CONVENIOS.

— No aplicabilidad a falta de ratificación-publicación:7.

TRANSPORTE:

— internac. mercancías carretera: 30.

— aéreo:31.

U

UNIÓN PARIS PROPIEDAD INDUSTRIAL: 20.

V

VINOS: métodos análisis apreciación: 7.

ÍNDICE CRONOLÓGICO Y NUMÉRICO DE SENTENCIAS Y AUTOS

1. Sent. 16 enero (T.S., Sala 3ª).
2. Sent. 22 febrero (T.S., Sala 3ª)
3. Sent. 23 enero (T.S., Sala 6ª)
4. Sent. 30 enero (T.S., Sala 6ª)
5. Sent. 30 enero (T. Constitucional, Sala 1ª)
6. Sent. 8 febrero (T.S., Sala 3ª)
7. Sent. 12 marzo (T.S., Sala 4ª)
8. Sent. 25 abril (T.S., Sala 4ª)
9. Sent. 9 mayo (T.S., Sala 3ª)
10. Sent. 15 mayo (T.S., Sala 1ª)
11. Sent. 25 mayo (T.S., Sala 3ª)
12. Auto 27 mayo (T.S., Sala 1ª)
13. Sent. 10 junio (T.S., Sala 1ª)
14. Sent. 10 junio (T.S., Sala 3ª)
15. Sent. 26 junio (T.S., Sala 3ª)
16. Sent. 27 junio (T.S., Sala 3ª)
17. Sent. 27 junio (T.S., Sala 3ª)
18. Sent. 29 junio (T.S., Sala 3ª)
19. Sent. 11 julio (T.S., Sala 1ª)
20. Sent. 27 sept. (T.S., Sala 3ª)
21. Sent. 7 octubre (T.S., Sala 3ª)
22. Sent. 30 octubre (T.S., Sala 6ª)
23. Sent. 7 nov. (T.S., Sala 2ª)
24. Sent. 11 noviembre (T.S., Sala 6ª)
25. Sent. 15 noviembre (T.S., Sala 3ª)
26. Sent. 25 noviembre (T.S., Sala 3ª)
27. Sent. 10 diciembre (T.S., Sala 4ª)
28. Sent. 18 diciembre (T.S., Sala 3ª)
29. Sent. 19 diciembre (T.S., Sala 1ª)
30. Sent. 20 diciembre (T.S., Sala 1ª)
31. Sent. 31 diciembre (T.S., Sala 1ª).

RECOPILACIÓN DE SENTENCIAS Y AUTOS.

AÑO 1985

1

TÍTULOS EXTRANJEROS. Convalidación. Odontólogos. Convenio Cultural hispano-argentino de 23 de marzo de 1971.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-Admº): SENTENCIA DE 16 DE ENERO DE 1985. Ponente: D. Diego Espín Cánovas.

La Audiencia de Valencia dictó sentencia en 16 de noviembre de 1984, en recurso seguido al amparo de la Ley 62/78, estimando en parte el recurso interpuesto por Dª Nilda E. A. y D. Juan Carlos C., contra resolución de 11 de abril de 1984, del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Tercera Región, por la que se deniega a los actores de la colegiación, condicionándola a un examen de aptitud y contra resolución del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos que implantó un examen de aptitud para extranjeros. El fallo de dicha Sala desestima el recurso en cuanto a la impugnación directa del acuerdo de dicho Consejo General, estimándolo en el sentido de declarar no ajustado a derecho y por tanto nulo el acuerdo mencionado del Colegio Oficial de la Tercera Región y declarando en su lugar el derecho de los recurrentes a obtener su colegiación como tienen solicitada y sin condicionamiento alguno.

Interpuestos recursos de apelación por el Abogado del Estado y por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Tercera Región, el T. S., lo desestima, confirmando la sentencia apelada.

CONSIDERANDO que la litis versa sobre la posibilidad de incorporación a los Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de los extranjeros de nacionalidad argentina que careciendo del Título de Médicos y habiendo obtenido el de Odontólogos en Facultad de Odontología argentina, en virtud del Convenio Cultural firmado entre España y Argentina, ratificado el veintisiete de Febrero de mil novecientos setenta y tres y Orden Ministerial de Educación de veinticinco de Febrero de mil novecientos ochenta tema en el que han de tenerse en

cuenta, entre otros, los siguientes extremos: 1º, por Orden del Ministerio de Educación de veinticinco de Febrero de mil novecientos cuarenta y ocho, se dispuso el cambio de denominación de la Escuela de Odontología por la de Escuela de Estomatología que expediría a los Doctores y Licenciados en Medicina que hubieran cursado la enseñanza de dicha Escuela los títulos de Doctor o Licenciado Médico Estomatólogo, añadiendo que los Odontólogos que no hubieran obtenido el Título de Licenciado en Medicina conservarían la denominación que en ese momento ostentaban; 2º, la Orden del mismo Ministerio de veinte de Julio de mil novecientos cuarenta y nueve («Boletín Oficial del Estado», 20 Agosto siguiente), regula los estudios que han de cursar los Licenciados en Medicina que deseen obtener el Título de Licenciado Médico Estomatólogo, en la Escuela de Estomatología, que comprende dos años; 3º, la Ley de veinte de Julio de mil novecientos cincuenta y cinco sobre enseñanza de la Medicina en su art. 13 dicta normas para continuar estudios de especialización los extranjeros Licenciados en Facultades españolas o Centros extranjeros que se acrediten, pudiendo obtener el Título de Especialista médico correspondiente «con sujeción por lo que al ejercicio profesional se refiere a la legislación general sobre la materia»;

CONSIDERANDO que los demandantes-apelados alegan discriminación respecto a los Odontólogos españoles al exigírseles una prueba por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Tercera Región para su incorporación al mismo, que lesiona su derecho a la igualdad conforme a los arts. 13 y 14 de la Constitución Española al no exigirse esa prueba de aptitud a odontólogos españoles, estimando también carecer de competencia el Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos para ordenar la práctica de una prueba para los extranjeros en virtud de Acuerdo de veinticuatro de Septiembre de mil novecientos ochenta y tres, por carecer de atribuciones, oponiéndose por el representante de la Administración, así como por el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia la inadmisibilidad del recurso al no existir acto administrativo y en cuanto al fondo o existir discriminación alguna al no poderse incorporar al citado Colegio los españoles que carezcan del título de Licenciado en Medicina y el de la especialidad al haberse dispuesto así a partir del año mil novecientos cuarenta y ocho.

CONSIDERANDO que en cuanto a la causa de inadmisibilidad alegada en la primera instancia y reiterada ante esta Sala, por el Abogado del Estado, se basa en inexistencia de acto administrativo pues la mera información solicitada de un empleado del Colegio y constatada en acta notarial no constituye acto administrativo por lo que los interesados no llegaron a provocar acto administrativo alguno que pudiera ser impugnado, ni cabe impugnar un acto colegial cuya voluntad no puede entenderse emitida por la mera manifestación informativa de un funcionario del mismo, inexistencia de acto administrativo que según el defensor de la Administración es de mayor relieve en el proceso de la Ley 62/78 al permitir la interposición del recurso jurisdiccional sin la previa vía administrativa, insistiendo en esta apelación el Colegio apelante en que la información de un empleado no constituye definitiva decisión, como lo evidencia que más tarde el quince de Octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, los interesados presentaron su instancia reglamentaria, provocando la denegación de colegiación con fecha veinticinco del

mismo mes, según resulta de las fotocopias de las instancias y acuerdos denegatorios acompañados por el propio Colegio a su escrito de interposición del Recurso de apelación y mandados unir por la providencia que admitió dicha apelación, por lo que si bien no cabe aceptar que con anterioridad a estas instancias y su denegación existiera acto administrativo recurrible, ya que lo recurrido es esencialmente la no colegiación, subsanada la falta de decisión denegatoria según demuestran fotocopias compulsadas presentadas por el Colegio, debe desestimarse la inadmisibilidad alegada en esta instancia por el Abogado del Estado para conceder a los recurrentes una mayor efectividad de la tutela judicial garantizada por el art. 24.1 de nuestra Constitución.

CONSIDERANDO que entrando a conocer del fondo de la litis debe tenerse presente que el Convenio Cultural hispano-argentino de veintitrés de Marzo de mil novecientos setenta y uno, ratificado el veintisiete de Febrero de mil novecientos setenta y tres, permite convalidar títulos académicos conforme al Decreto 1.676/1969 de veinticuatro de Julio y Orden Ministerial de veinticinco de Agosto de mil novecientos sesenta y nueve, habiéndose probado que en aplicación de esta normativa y del citado Convenio el Ministerio de Educación y Ciencia por Ordenes de veinte de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro convalidó en España los Títulos Odontológicos obtenidos por los interesados en Buenos Aires, a los efectos académicos que tiene el título de Odontólogo en España, Ordenes ministeriales que asimismo resuelven «conceder validez profesional para el ejercicio en España a que capacita el título español de odontólogo», por lo que debe decidirse si esta convalidación obliga al Colegio Profesional apelante a admitir la incorporación de odontólogos argentinos, desde el punto de vista de su derecho fundamental a la igualdad reconocida a los españoles por el art. 14 constitucional.

CONSIDERANDO que desde el punto de vista del derecho a la igualdad invocado por los recurrentes apelados debe decidirse que existe lesión del mismo ya que los españoles no han de superar la prueba que para los extranjeros tiene acordado el Consejo General y si bien es cierto como alega el Colegio apelante que los españoles no pueden inscribirse en los Colegios sin estar en posesión del título de Licenciado o Doctor, también de modo transitorio se permite el ejercicio profesional de los que ostentasen el antiguo título de especialidad de Odontólogo ya suprimido en mil novecientos cuarenta y ocho y aplicando el principio de igualdad, esta posibilidad no podrá negarse a los Odontólogos argentinos que no posean el título de Médicos, por lo que en definitiva hay que reconocerles igual posibilidad que a los españoles que ejerzan la odontología si bien sea para éstos una situación a extinguir mientras dicha posibilidad exista pues según el art. 13 de la Constitución Española, los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título en los términos que establezcan los Tratados y la ley, reconocimiento que conforme al Convenio Cultural vigente ya citado implica el necesario reconocimiento del derecho al colegiarse en idénticas condiciones que los españoles.

REFUGIADOS. DERECHO DE ASILO. Requisitos. Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre Estatuto de los Refugiados. Ley 5/1984, de 26 de marzo.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo). SENTENCIA DE 22 DE ENERO DE 1985. Ponente: D. Fernando Rolán Martínez.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional dictó sentencia en 22 de septiembre de 1984, desestimando el recurso interpuesto por D. Said H. H., contra resolución del Ministerio del Interior de 27 de marzo de 1984, que le denegó el reconocimiento de la condición de refugiado en España.

Interpuesto recurso de apelación por el mismo actor, el T. S. lo desestima con imposición de costas al tratarse de un procedimiento seguido al amparo de la Ley 62/78.

Considerando de la sentencia apelada que se acepta:

«CQNSIDERANDO: Que sin poner en dudas las circunstancias generales de inseguridad que, según los informes aportados, existen en el país de origen del recurrente, es lo cierto que éste no ha acreditado, ni siquiera de la forma indiciariamente suficiente que establece el artículo 8 de la Ley citada y podría bastar según el artículo 1-A-2 de la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 28 de Julio de 1.951, que tales circunstancias le afectan a él personalmente, ya que no ha aportado, en efecto, en relación con ello prueba alguna y las que se deducen del expediente son contradictorias al respecto, puesto que consta su falta de presentación inmediata al entrar en España, la demora en solicitar el asilo, la dilatada incomparecencia al ser citado, la tenencia del pasaporte legal de su país y, por último, por propia declaración, su deseo de eludir la prestación allí del servicio militar como causa que le indujo a abandonarlo. De ahí que deba reputarse ajustada a derecho la decisión que se recurre, que se limitó a resolver según el artículo 22 de la Ley citada y el asimismo invocado de la convención de Ginebra e indicando incluso en la propuesta de resolución la posibilidad de continuar en nuestro país sometido al régimen general de extranjería».

Considerandos del Tribunal Supremo:

CONSIDERANDO: Que las cuestiones suscitadas en la primera instancia del recurso del que la presente apelación deviene, han sido acertadamente tratadas y resueltas por el Tribunal «a quo» en los fundamentos de la sentencia apelada que aprecia correctamente los hechos y aplica debidamente la normativa vigente sobre el reconocimientos de la condición de refugiado, pues, aun siendo cierto que la Ley 5/84 de 26 de Marzo, reguladora del derecho de Asilo y de la condición de refugiado, admite en su artículo 8º para que se resuelva favorablemente la petición de Asilo la prueba de «indicios suficientes», esto no quiere decir que, en todo caso se tenga que reconocer a un extranjero que lo solicite,

aunque no exista prueba alguna que lo justifique, sino que deberán existir, como mínimo, para estimar el recurso «indicios suficientes», es decir, que no puede basarse el reconocimiento de la condición de refugiado en simples sospechas ni en meras conjeturas más o menos verosímiles, aun cuando pudieran ser acertadas, ya que no debe confundirse el indicio con la sospecha, pues el primero necesita siempre de un hecho que con arreglo a la sana crítica lleve al convencimiento del juzgador, reglas que, aunque no han sido enumeradas en ningún texto legal, cabe apoyarlas en lo que la doctrina llama «la crítica experimental» que aconseja tener en cuenta la materia sobre la que versa el procedimiento, el momento en que fue instada, no siendo válido utilizar este medio de prueba en cadena, como muy bien se razona en la sentencia apelada para que, partiendo de un hecho cierto, como son las circunstancias generales de inseguridad que existen en el actual régimen político-religioso del Irán, país de origen del apelante, sentar un segundo indicio y dar por acreditada su condición de refugiado sin estar acreditada alguna otra circunstancia que le afectaran a personalmente, y, por otra parte, ser contradictorias las que se deducen del expediente, que se precisan en el segundo. Considerando de la sentencia apelada transcrito anteriormente, que llevan primero al Ministro del Interior en la resolución impugnada a denegar el reconocimiento de la condición de refugiado y a la posterior desestimación del recurso que la Sala de Primera Instancia sentencia que debe ser confirmada, pues, en materia administrativa, no sancionadora, no es de aplicación el principio in dubio pro-reo, ni procede estimar el recurso cuando no exista convicción o certidumbre sobre todo cuando el contenido de algunas de las declaraciones del peticionario son contradictorias respecto a las que se deducen del expediente, y, además, el artículo 8º de la Ley 5/84 permite reiterar el reconocimiento de la condición de refugiado sobre la base de nuevos hechos o documentos, procediendo por todo lo expuesto la desestimación del presente recurso de apelación.

(RJA, 1985, nº 240, pag. 242)

3

TRABAJADORES ESPAÑOLES CONTRATADOS EN ESPAÑA PARA PRESTAR SERVICIOS EN PAÍS EXTRANJERO. Legislación aplicable.

Tribunal Supremo (Sala 6ª, de lo Social): SENTENCIA DE 23 DE ENERO DE 1985. Ponente: D. Enrique Ruiz Vadillo.

El T. S. desestima el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Jesús Antonio S. F. contra la sentencia de la Mag. Trab., que desestimó la demanda promovida por el recurrente contra Anglo Naval e Industrial, S. A. y F. G. S., sobre reclamación de cantidad.

CONSIDERANDO: Que el primer motivo del recurso se apoya en el número 5 del artículo 167 de la Ley Procesal Laboral al entender que la sentencia impugnada incide en error de hecho en la apreciación de las pruebas documentales obrantes en autos a los folios 26, 39 y 40, pretendiendo la adición de un nuevo ordinal que diga «que el actor fue obligado a fijar su residencia en Veracruz, distante del centro de trabajo, sito en la central nuclear Laguna Verde, a donde debía desplazarse diariamente, invirtiendo entre la ida y la vuelta al trabajo, al menos, dos horas y medio de cada día laborable» pretensión que tiene como objetivo exigir la correspondiente compensación económica por el mayor número de horas dedicadas a la actividad laboral en sus desplazamientos, motivo que no puede tener favorable acogida porque en primer lugar de los documentos señalados no se obtienen las conclusiones que el recurrente desea, teniendo en cuenta que la cláusula 1ª del contrato dice que el lugar de trabajo será Veracruz (México), así como la misma obra, ubicada en el recinto de la Central Nuclear de Laguna Verde, lo que demuestra que la actividad se prestaba —no se sabe con qué frecuencia—, en uno y otro lugar, sin que la existencia de unas «rutas para la trasportación del personal técnico» demuestren lo contrario de lo que queda afirmado y finalmente porque, como más adelante se verá, la agregación postulada sería, en todo caso, intrascendente, es decir ineficaz en el sentido de que ninguna repercusión tendría en el fallo o parte dispositiva, por lo que procede la desestimación del motivo, como ya se anticipó.

CONSIDERANDO: Que en el segundo motivo con el mismo apoyo procesal se alega también, error de hecho en la apreciación de las pruebas documentales obrantes en autos, a los folios 30, 37 y 49 interesándose la supresión de la frase referida a la circunstancia de no haberse acreditado la realización de horas extraordinarias y la sustitución por otro párrafo que diga que «el actor y la demandada pactaron en contrato suscrito en Barcelona el 12 de Enero de 1981 que la jornada de trabajo se ajustaría a las disposiciones legales, habiendo realizado el actor una jornada semanal de 48 horas de trabajo» pero como en el caso anterior el motivo es inviable, porque el folio 30 contiene una declaración genérica de la Comisión Federal de Electricidad en la que se dice que la semana normal de trabajo será de 48 horas a cubrir de lunes a sábado y una cuantificación de su valor económico o patrimonial, el 37 una referencia al «control horario en tomaduría de tiempo» y el 49 el contrato suscrito entre la empresa y el trabajador en cuyo pacto cuarto se concreta que la jornada de trabajo y los descansos diario y semanal se ajustarán a las disposiciones legales y se regirán por el cuadro horario aprobado por la Inspección de Trabajo, pero de tales documentos no pueden deducirse con la claridad y precisión exigibles los hechos que el recurrente pretende, pues la sentencia afirma y nada se ha probado en contra, que no se ha acreditado la realización de horas extraordinarias, lo que hubiera exigido para su eficacia probar el número de horas efectivamente trabajadas, con independencia de las consideraciones jurídicas que a continuación se formularán, lo que conduce, como ya se indicó, a la desestimación del motivo.

CONSIDERANDO: Que el tercero, al amparo procesal del número 1 del citado artículo 167 de la Ley Procesal Laboral denuncia infracción por violación del artículo 1,4 del Estatuto de los Trabajadores (R. 1980,

607) en relación con el 34.2 del mismo texto, alegando que dado que la jornada ordinaria de trabajo estaba pactada que fuera «la ajustada a las disposiciones legales» éstas no podían ser otras que las existentes en el Estado español, dado que en el número 4 del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores se establece que el contrato celebrado en España por empresa española para trabajar en el extranjero se regirá por la legislación laboral española, pero frente a esta argumentación, en parte cierta, del recurrente hay que señalar que, de acuerdo con el resultado histórico, no modificado, no consta acreditado que se realizaran horas extraordinarias, ni su cuantía, ni los días en que su actividad laboral se realizó en Veracruz o en Laguna Verde, como ya se señaló, por lo que no puede decirse que se hayan vulnerado los plurales preceptos invocados, que aun cuando perfectamente autónomos, e individualizables guardan entre sí una cierta relación, porque el artículo 4.1 del Estatuto de los Trabajadores ha sido tenido en cuenta por el Magistrado «a quo» puesto que aun sin su cita pormenorizada se contempla y aplica en la sentencia el ordenamiento jurídico español y dentro de él, la jurisprudencia existente en relación con los principios que inspiran la interpretación contractual, y en cuanto al artículo 34.2 del mismo Estatuto que establece la duración máxima de la jornada de trabajo, la resolución impugnada razona también su posicionamiento teniendo en cuenta la legislación española, como se verá más extensamente en la siguiente y última fundamentación jurídica.

CONSIDERANDO: Que el cuarto motivo con fundamento en el artículo 167.1 de la Ley Procesal Laboral denuncia infracción por violación del artículo 1.283 del Código Civil estimando que además de la regla contenida en el artículo 1.282, debió utilizar la del anteriormente citado 1.283, según el cual no deberán entenderse comprendidos en el contrato, cualquiera que sea la generalidad de los términos del mismo, cosas distintas y casos diferentes de aquéllos sobre los que los interesados se propusieron contratar, concretándose su postura en el sentido de que no está claro que las partes incluyeran en el contrato la retribución por una concreta y superior jornada, que desde España y antes de iniciar el trabajo en Méjico era imposible de conocer, motivo que, como los anteriores tiene igualmente que decaer: 1º) Porque el razonamiento del recurrente lo que pretende en suma es corregir la interpretación hecha por el Magistrado «a quo» y sustituirla por la suya personal y subjetiva y por tanto interesada, posición tantas veces contemplada en los recursos de casación y reiteradamente rechazada por esta Sala; y 2º) Porque la complejidad de la prestación dineraria del empresario, consecuencia de la agregación y diversidad de conceptos salariales concurrentes, es perfectamente lícito superarla a través del llamado salario global, simplificado o profesional que unifica todas las partidas y facilita su efectiva realización, con las lógicas limitaciones que de dicho salario único sea, al menos, igual a la suma de las partidas que en él se integran porque en otro caso constituirá un verdadero fraude de Ley, y de que no esté expresamente prohibido por la Ley, en razón de las circunstancias especiales que en él concurren, pero como ni uno ni otro supuestos limitativos se dan en este caso, procede la desestimación del motivo y la del recurso, de acuerdo con el preceptivo informe del Ministerio fiscal.

MONEDA EXTRANJERA. Pago de salarios en moneda extranjera. Principios «rebus sic stantibus» en fluctuaciones de cambios.

Tribunal Supremo (Sala 6ª, de lo Social): SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 1985. Ponente: D. José Lorca García.

El T. S. desestima los recursos de casación por infracción de ley interpuestos por Cándido G.A. e Ingeniería del Atlántico, S. A. contra la sentencia de la Mag. Trab., que estimó en parte la demanda promovida por el primero contra la segunda, en reclamación de cantidad.

CONSIDERANDO: Que la parte actora formula el primer motivo del recurso al amparo del artículo 167.5 de la Ley Procesal Laboral, distinguiendo en el mismo dos apartados: en el primero de ellos interesa la revisión del hecho séptimo de los probados, pues el documento que obra al folio 49 de los autos es de fecha 15 de Noviembre de 1.983, posterior, por consiguiente, a la reclamación del actor, 30 de Septiembre de 1.983, por lo que solicita se elimine del citado hecho la última frase que dice «y 6.459 bolívares en el mes de Noviembre de 1.983, por el concepto de utilidades»; y en el apartado segundo pide se complete la relación fáctica con un nuevo hecho, que llevaría al número 13, y ello en base al documento que obra al folio 122, en el que se establece la relación de cambio entre dólares y pesetas, ofreciendo para ello el texto del mismo, en relación a la paridad dólar-pesetas en las fechas que señala; motivos que deben decaer, supuesto que el primero alude a un documento que recoge la cantidad abonada por utilidades con cargo al período que es objeto de la reclamación y que finalizaba, efectivamente, el 30 de Septiembre de 1.983, pero que por razones contables se giró con fecha posterior a ella, y el segundo, no tiene transcendencia alguna para la fundamentación del fallo, supuesto que, en su caso, ello sería un punto a resolver fácilmente en ejecución de sentencia.

CONSIDERANDO: Que el actor-recurrente formula el segundo motivo al amparo del artículo 167.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, pues a su juicio la sentencia incide en error de derecho en la apreciación de la prueba, al interpretar erróneamente las cláusulas 3, 4, 5 y 7 del contrato suscrito entre las partes, por cuanto debía percibir 3.000 dólares U.S.A. mensuales en concepto de salario 1.250 dólares mensuales en concepto de vivienda, y por el contrario ha percibido otras distintas cantidades; motivo que debe rechazarse ya que no cita como vulnerado ningún precepto valorativo de prueba conforme exige la doctrina de esta Sala, reflejada en las Sentencias de 3 de Julio y 15 de Diciembre de 1982, entre otras.

CONSIDERANDO: Que el actor-recurrente apoya el tercer motivo del recurso en el artículo 167.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, por infracción del artículo 92 de la aludida Ley y los artículos 359 y 360 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; motivo que debe decaer, supuesto que el

fallo de la sentencia condena al pago de una cantidad «resultante en pesetas, al cambio oficial de España, en la fecha de la Sentencia, correspondiente a la cantidad de ciento setenta y ocho mil ochocientas treinta y dos bolívares» lo que acredita que la cantidad que expresa la condena es líquida, clara, precisa y congruente con las peticiones de las partes; por lo que al haber sido desestimado este tercer motivo del actor-recurrente, procede de acuerdo con el dictamen del Ministerio Fiscal, el rechazo del recurso por el mismo formalizado contra la sentencia de instancia.

CONSIDERANDO: Que la parte demandada formaliza igualmente recurso de casación por infracción de Ley contra la sentencia de instancia, y basa el primer motivo en el artículo 167.1 de la Ley Procesal Laboral, «por violación de las leyes o doctrina legal» (sic), argumentando que la sentencia recurrida infringe el principio jurídico «*rebus sic stantibus*», de aplicación en los casos en que por no haberse destruido la relación de equivalencia de las prestaciones resultan excesivamente onerosas para una de las partes, como sucede en el presente caso en que el cambio del dólar ha subido vertiginosamente en perjuicio de empresa demandada, cuyo contrato de asistencia con «Tecno Consult» ha permanecido invariable, por lo que, a su juicio, ha existido un enriquecimiento injusto por parte del demandante. Motivo que aunque planteado de una forma un tanto difusa, es lo cierto que no puede estimarse aun aplicando la doctrina reiterada de esta Sala de la necesidad de atenuar en lo posible el rigor formal, supuesto que no encaja en el presente caso el principio jurídico invocado «*rebus sic stantibus*», ya que las partes tuvieron presente en el momento de firmar el contrato las posibles fluctuaciones de la cotización del dólar, y, con ello, el riesgo de pérdida o de ganancia, y máxime teniendo en cuenta que no ha excedido en su duración del año; y en lo que respecta al enriquecimiento injusto denunciado, es doctrina jurisprudencial que la falta de causa o de justificación entre el enriquecimiento de una parte y el empobrecimiento de otra da lugar al mismo, pero al no darse la citada hipótesis en el presente caso, ya que las partes contemplaron en el momento oportuno el riesgo de una pérdida o de una ganancia, no es de apreciar su existencia —así, entre otras Sentencias de 3 y 10 de mayo de 1.983.

CONSIDERANDO: Que el demandado-recurrente formula el segundo motivo al amparo del artículo 167.5 de la Ley de Procedimiento Laboral, sin citar documento alguno, ni aportar nuevo texto; sin que tampoco por la argumentación que en defensa de su tesis hace, venga a conocerse cuál sea su propósito, pues se limita a impugnar la cláusula tercera del contrato, pues a su juicio no es aplicable abonar los salarios en moneda que no sea de curso legal en el país donde se está trabajando, así como tampoco debe abonar la cantidad que para vivienda se le condena en la sentencia recurrida. De esta forma, plantea dos cuestiones nuevas, al no haber sido alegadas ni objeto de debate en el juicio, por lo que procede repeler el motivo y, de acuerdo con lo solicitado en su preceptivo dictamen por el Ministerio Fiscal, rechazar el recurso del demandado, dándosele el destino legal a la cantidad consignada, con pérdida de las cinco mil pesetas depositadas, así como debiendo satisfacer los honorarios del Letrado del trabajador.

EXTRADICIÓN PASIVA. Constitución Española. Convenio Europeo de Extradición.

Tribunal Constitucional. SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 1.985. Recurso de amparo constitucional nº 596/1983. Ponente: D. Angel Latorre Segura.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Manuel García-Pelayo y Alonso, Presidente, y don Angel Latorre Segura, don Manuel Díez de Velasco Vallejo, doña Gloria Begué Cantón, don Rafael Gómez-Ferrer Morant y don Angel Escudero del Corral, Magistrados, ha pronunciado.

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo número 596/1983, promovido por don Maurizio Falessi, representado por el Procurador de los Tribunales don Juan M. Sánchez Masa, y bajo la dirección del Letrado con Joan E. Garcés, contra el auto de fecha 14 de julio de 1983 el Juzgado Central de Instrucción número 2, dictado en procedimiento de extradición pasiva número 31/1983, y contra todo lo actuado administrativa y judicialmente en dicho procedimiento, en especial el auto de 27 de junio y las providencias de 27 de julio y 9 de agosto del mismo año. Ha comparecido el Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad y ha sido ponente el Magistrado don Angel Latorre Segura, quien expresa el parecer de la Sala.

I. ANTECEDENTES

Primero.- El 10 de agosto de 1983, el Procurador de los Tribunales don Juan M. Sánchez Masa, en nombre y representación de don Maurizio Falessi, presentó escrito en este Tribunal Constitucional, por el que interponía recurso de amparo contra el auto de fecha 14 de julio del mismo año, dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 2 y contra otras resoluciones judiciales del mismo Juzgado, relativas al procedimiento de extradición pasiva número 31/1983. De la demanda y documentos que se acompañan resulta, en substancia, lo siguiente:

A) El recurrente, de nacionalidad italiana, fue detenido el 25 de junio de 1983 en el aeropuerto de Barajas a requerimiento directo de las autoridades italianas cursado por medio de la Interpol, por estar acusado de varios delitos que, según afirma el mismo recurrente, son de carácter político.

B) Por auto de 27 de junio de 1983, el Juzgado Central de Instrucción número 2 inició el correspondiente procedimiento de extradición, elevó a prisión la detención efectuada, y considerando de aplicación preferente el convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957, ratificado por España sobre la normativa establecida por la Ley

española de 26 de diciembre de 1958, fijó el plazo máximo de cuarenta días para que el estado reclamante formulase la solicitud definitiva de extradición y documentación precisa. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan cumplido estos trámites, procederá declarar la libertad del reclamado. El mismo auto fija otro plazo también de cuarenta días, a contar desde la presentación de la petición formal de extradición, dentro del cual el Ministerio de Justicia deberá comunicar al Juzgado si el Gobierno ha acordado continuar o no el procedimiento de extradición. A falta de tal comunicación, el reclamado será puesto en libertad pasado el citado plazo. La concesión de este segundo plazo de cuarenta días se basa, en el auto referido, en el artículo 528 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual todas las autoridades que intervengan en un proceso estarán obligadas a dilatar lo menos posible la detención, y la prisión provisional de los inculcados o procesados.

Conjugando esta prevención con los plazos establecidos en el artículo 12 de la Ley de 26 de diciembre de 1958, más los que prudencialmente deben otorgarse para la práctica racional de las diligencias establecidas en dicho artículo 12, el Juzgado se consideró obligado a fijar este segundo plazo. Contra este auto de 27 de junio de 1983 el solicitante del amparo interpuso recurso de reforma, alegando fundamentalmente que eran de aplicación los plazos establecidos en la Ley española, que son de diez días para que el Estado interesado haga saber que se propone pedir la extradición y de quince para la presentación de la solicitud definitiva para los países europeos (arts. 13 y 14 de la Ley citada). El recurso fue desestimado por auto de 14 de julio de 1983. El recurrente solicitó de nuevo la libertad el 26 de julio, siendo rechazada su petición por providencia de fecha 27 del mismo mes.

C) El recurrente, entendiendo que había pasado incluso el plazo de cuarenta días fijado en el auto de 27 de junio, y en el artículo 16.4 del convenio Europeo de Extradición sin haberse recibido la solicitud definitiva de extradición en los términos fijados por dicho artículo del Convenio en relación con el 12 del mismo y los 10 y 11 de la Ley española, solicitó de nuevo la libertad. El Juzgado rechazó la petición por providencia de 9 de agosto.

D) El solicitante del amparo entiende que las actuaciones judiciales indicadas infringen los artículos 17.1 y 2 y 24.1 y 2 de la Constitución. El artículo 17.1 y 2 había sido infringido en cuanto se le ha privado de la libertad en los casos y forma prevista en la Ley 26 de diciembre de 1958, cuyos plazos serían de aplicación, invocándose a favor de esta tesis la consulta de la Fiscalía General del Estado de 19 de noviembre de 1982, número 2/1982. Tampoco se habría cumplido lo dispuesto en el Convenio Europeo de Extradición por las razones antes citadas. El 24.1 quedaría vulnerado en cuanto el solicitante del amparo no está obteniendo la tutela judicial efectiva, y el 24.2 en cuanto no se ha observado, en su caso, el derecho al debido proceso, ya que los plazos establecidos por el auto de 27 de junio de 1983 no son conforme a lo dispuesto en la citada Ley de 26 de diciembre de 1958, e incluso se inventa un procedimiento no previsto en la legislación vigente.

E) El recurrente concluye solicitando de este Tribunal Constitucional que dicte sentencia anulando el auto de 14 de julio de 1983, que denegó el recurso de reforma interpuesto contra el del 27 de junio del mismo año, ordenando que se siga el debido proceso y que se respete el derecho a la libertad, a no ser privado de la misma sino en los casos y en la

forma previstos en la Ley, y a que la detención preventiva no pueda durar más del tiempo estrictamente necesario, todo ello de acuerdo con los artículos 17.1 y 2 de la Constitución, y ordenando su inmediata puesta en libertad.

Segundo.- Por providencia de 12 de agosto de 1983, la Sección de Vacaciones del Tribunal Constitucional acordó abrir un trámite de inadmisión y, a este fin, poner de manifiesto al recurrente y al Ministerio Fiscal por un plazo común de diez días la posible existencia de las siguientes causas de inadmisión: a), no haber presentado copia, traslado o certificado de la providencia del Juzgado Central número 2 de 9 de agosto de 1983; b), falta de precisión en el amparo que se solicita y en su fundamentación.

Tercero.- En el plazo otorgado el Ministerio Fiscal dijo que concurrían las causas de inadmisión señaladas en la providencia antes citada y solicitó que se dictase auto acordando la inadmisión de la demanda, de acuerdo con el artículo 50.1.b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTIC), aunque sin perjuicio de lo que pueda resultar de la posterior actuación del recurrente. También en el mismo plazo el solicitante del amparo formuló alegaciones diciendo que acompañaba copia de la providencia solicitada, como efectivamente hizo. Insistió en que las resoluciones recurridas infringían la Ley de 26 de diciembre de 1958, así como los artículos 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, referentes al carácter excepcional de la prisión preventiva, y el 6.2 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, relativa a la presunción de inocencia. Advierte que no procede su extradición porque se ha extinguido la eventual responsabilidad criminal de hechos cubiertos por la Ley española de Amnistía de 15 de octubre de 1977, y en tal supuesto no procede la extradición en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio Europeo de Extradición y en el artículo 6.6º de la Ley de 26 de diciembre de 1958, en relación con el artículo 112.3 del Código Penal, y porque, además los delitos que se le imputan son de carácter político-ideológico (art. 13.3 de la Constitución Española, 10 y 26 de la Constitución Italiana, 3.1 y 3.2 y 10 del citado convenio, art. 6.1 de la Ley española también citada y 2.2, 23.3 y 16.2 del Convenio Judicial Europeo en materia penal). Señala también que ha sido condenado en rebeldía, lo que también impide la extradición. En síntesis, afirma el recurrente que no se han observado las garantías del procedimiento de extradición pasiva, como son las secuencias temporales, las exigencias documentales y los requisitos político-administrativos establecidos en la Ley. Concluye solicitando la admisión a trámite del recurso y que el Tribunal Constitucional acceda a lo solicitado. La providencia cuya copia se acompañaba a este escrito deniega la petición de libertad por haber entrado con fecha 2 de agosto de 1983 en el Ministerio de Asuntos Exteriores español la documentación relativa a la extradición solicitada.

Cuarto.- Por auto de 8 de noviembre de 1983, la Sección Primera de este Tribunal Constitucional entendido que el recurrente había subsanado los defectos señalados en la providencia de 12 de agosto y acordó la admisión a trámite del recurso, sin perjuicio de lo que resulte de los antecedentes. Requirió el envío de testimonio de las actuaciones del Juzgado de Instrucción número 2 y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento para que pudiesen comparecer en el proceso constitucional, otorgando para ello el plazo de diez días. En este plazo se recibió el testimonio de las actuaciones sin que se personase alguna. Por provi-

dencia de la Sección Primera del Tribunal Constitucional de fecha 21 de diciembre de 1983 se acordó condenar al Ministerio Fiscal y al recurrente a un plazo común de veinte días para que presentasen las alegaciones que estimasen procedentes.

Quinto.- En el plazo concedido el Ministerio Fiscal alegó en síntesis lo siguiente:

A) Las cuestiones planteadas en el recurso de amparo deben limitarse a las suscitadas en la llamada fase gubernativa de la extradición, que no ha dejado de tener ese carácter porque de acuerdo con la Constitución haya de ser necesaria la intervención judicial para conceder la detención preventiva prevista en la Ley española de 26 de diciembre de 1958 y en el Convenio Europeo de Extradición. Ello impide entrar en consideraciones sobre los presupuestos sustanciales de la extradición, sobre los que se decidirá en todo en la fase judicial del procedimiento de extradición.

B) De los derechos fundamentales que se pretende vulnerados es el derecho a la libertad (art. 17 de la Constitución) el que merece especial examen. Prescindiendo del apartado segundo de dicho artículo 17 en lo que se refiere al plazo máximo de detención ha sido evidentemente cumplido y en lo que respecta a que su duración no podrá exceder del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos no es aplicable al procedimiento de extradición, pues en él no hay que averiguar hecho alguno, hay que centrarse en lo dispuesto en el apartado primero, es decir, al que garantiza que nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y en la forma prevista en la Ley.

C) Entiende el Ministerio Fiscal que no ha existido vulneración de ese precepto, pues la Ley española de 26 de diciembre de 1958 limita su vigencia a lo no previsto en los tratados internacionales, por lo que ha de darse preferencia como lo hacen las resoluciones judiciales impugnadas a lo previsto en el Convenio Europeo de Extradición, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.2 y 96.1 de la Constitución no puede tacharse de ilegal en manera alguna la decisión judicial de la concesión del plazo de cuarenta días para que se presentara la solicitud de extradición y los documentos correspondientes. Dentro de ese plazo, la Embajada de Italia cursó la solicitud mediante nota verbal y presentó los documentos exigidos por el Convenio de Asistencia Judicial y Extradición vigentes entre España e Italia, por lo que la detención del recurrente seguía ajustándose a lo establecido por la Ley.

D) En cuanto al segundo plazo de cuarenta días fijado por el auto de 27 de junio para que le fuese comunicado al Juzgado el acuerdo del Gobierno sobre la continuación del procedimiento de extradición, dice el Ministerio Fiscal que si bien es cierto que la fijación del nuevo plazo supone una dosis de creatividad por parte del Juzgado, por él lo que se hace es limitar la duración de la fase gubernativa de la extradición que en la legislación vigente no está sometida a término alguno, por lo que no sólo se produce una ampliación ilegal del período de que dispone el Gobierno.

E) Rechaza a continuación el Ministerio Fiscal que se hayan vulnerado los apartados primero y segundo del artículo 24 de la Constitución. Respecto al apartado primero, el derecho a la tutela judicial efectiva no se ha visto desconocido ni en abstracto, porque el demandante haya dejado de hacer valer sus pretensiones o no hayan recibido sus deman-

das respuestas razonadas en derecho, ni en concreto, porque el derecho para el que interesa la tutela judicial —el de libertad— haya sufrido restricción que la Ley no autorice. Y respecto a lo que denomina el demandante derecho al «debido proceso», ni le son imputables al Juez dilaciones indebidas, ni la invocación que supuso la concesión por el Juez de un segundo plazo redujo las garantías procesales del demandante.

F) Concluye el Ministerio Fiscal solicitando que se deniegue el amparo solicitado.

Sexto.- También en el plazo otorgado por la providencia de 21 de diciembre de 1983 el recurrente formuló sus alegaciones. Se ratifica en lo expuesto en sus escritos anteriores y amplía los antecedentes con la aportación de los autos del testimonio del Tribunal de Apelación de Roma, de fecha 13 de octubre de 1983, como prueba documental documental de que el recurrente ha sido juzgado y condenado estando ausente del proceso, por los mismos hechos que son objeto de demanda de extradición. Mas concretamente el recurrente dijo, en síntesis, lo siguiente:

A) Se ha violado la garantía constitucional proclamada en el artículo 17.1 de la Constitución. Dispone este precepto que la privatización de libertad no puede producirse más que en los casos y en la forma establecidos en la Ley. El recurrente insiste en que la Ley aplicable al caso es la española de 26 de diciembre de 1958, ya que el Convenio Europeo de 1957 remite el procedimiento de extradición y el de detención preventiva a la Ley de la parte requerida, salvo disposición expresa del mismo Convenio (art. 22). Pero éste no dispone nada en contra de la Ley española, ya que en su artículo 16 prevé que será posible en cualquier momento la puesta en libertad provisional y que en un plazo de dieciocho días la detención preventiva podrá concluir si la parte requerida no hubiese interesado la solicitud de extradición. De estos preceptos deduce el recurrente que es de aplicación el artículo 14 de la Ley española, que fija un plazo de quince días para países europeos al cabo de los cuales el reclamado debe ser puesto en libertad incondicional, y aún antes puede serlo en cualquier momento con medidas cautelares. No hay oposición, según el recurrente, entre el Convenio y la Ley española porque el Convenio en su artículo 16.4 establece una disposición abierta y flexible, mientras que el artículo 14 de la Ley española tiene un carácter imperativo, de forma de aquel precepto absorbe a éste.

B) Se han violado asimismo las garantías constitucionales establecidas en el artículo 24.1 y 2 de la Constitución. Aparte de las razones expuestas en escritos anteriores, hay que señalar que tanto la legislación española como la italiana sobre extradición pasiva contemplan un procedimiento judicial contradictorio, siendo de aplicación en lo que a España se refiere, las garantías establecidas en el artículo 24. Entiende el recurrente que en el caso objeto del recurso los dos párrafos del artículo 24 han sido vulnerados, contemplados e interpretados en su conjunto y de modo integrados e interpenetrados en la dimensión del «debido proceso». Estas garantías son las secuencias temporales, las exigencias documentales y los requisitos político-administrativos.

C) La legislación sobre extradición pasiva atribuye al Juez que instruye el proceso, primero, y a la Audiencia Nacional el control de la demanda de extradición en sus diversos aspectos, como son las condiciones de fondo exigidas por el Estado requiriente, las relativas a la personalidad del individuo reclamado, la calificación de los hechos y la

gravedad de la pena y su conformidad de la demanda con el orden público nacional. Según el recurrente, en este caso no se habría procedido a ese control. El Juez no ha podido verificar si la documentación recibida del Estado requirente reúne las condiciones legales porque sólo dispuso de un telegrama del Ministerio de Justicia antes de expirar el primer plazo en prisión preventiva. Por otra parte y habiendo continuado su curso el procedimiento de extradición, el conocimiento del expediente por recurrente permite a éste reforzar las razones formuladas en la demanda. Del expediente resulta, siempre según el recurrente, que la demanda de extradición es incompatible con las garantías del artículo 24.1 y 2 de la Constitución, ya que no es posible acceder a extradiciones para cumplir sentencias penales dictadas en rebeldía, como fue la que recayó sobre el recurrente. En el proceso celebrado en Italia se produjo indefensión y se desconoció la presunción de inocencia al ser juzgado en ausencia y servir de único medio de prueba declaraciones de «arrepentidos». Señala seguidamente el recurrente que la Constitución y la Ley italianas impiden que el recurrente pueda ser juzgado de nuevo por los mismos hechos. Tras un examen de la legislación procesal penal italiana el recurrente afirma que, aunque el proceso contra él está en Italia en fase de apelación, la condena en primera instancia, dictada en su ausencia, le causa un perjuicio que no puede ser reparable mediante los recursos de apelación o casación ni tampoco mediante un eventual acuerdo con un Estado extranjero. Alega asimismo el recurrente que los hechos, por los que ha sido condenado son de naturaleza política y los delitos de este carácter están excluidos en la extradición por el artículo 13.3 de la Constitución, por el Convenio Bilateral de Extradición entre España e Italia de 6 de junio de 1868 vigente al producirse los hechos (art. 111) por la Ley española (artículo 6) y por el Convenio Europeo (art. 3.1).

Advierte también el recurrente que, de acuerdo con el artículo 24.2 en relación con el 13.3 de la Constitución, el reclamado debe ser puesto en libertad porque se ha extinguido la responsabilidad criminal conforme a la legislación española (art. 6.6 de la Ley española en relación con el art. 10 del Convenio Europeo y 112.3 del Código Penal), y ello por razón de la amnistía concedida en España por Ley de 15 de octubre de 1977, número 46/1977.

D) Concluye el recurrente solicitando que este Tribunal Constitucional dicte sentencia reconociéndole los derechos constitucionales que le han sido negados, restableciéndole en la integridad de los mismos.

Séptimo.- Por providencia de 23 de enero de 1985 se fijó el día 30 de enero del mismo año para deliberación y fallo.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- El presente recurso se plantea con ocasión de un procedimiento de extradición pasiva seguido contra el recurrente, súbdito italiano, a petición del Gobierno de la República de Italia, por diversos delitos supuestamente cometidos en su país de origen. Para delimitar el objeto del recurso y dado que en los escritos del recurrente se encuentran alegaciones de muy diverso carácter, conviene recordar que, en nuestro Derecho, el procedimiento de extradición pasiva se divide sustancialmente y para lo que aquí interesa, en dos fases: una, que se suele

denominar gubernativa, aunque como veremos inmediatamente requiere una intervención judicial, que tiene por objeto el aseguramiento del reclamado y la decisión del Gobierno español sobre si ha lugar o no a continuar el procedimiento. La segunda fase de carácter judicial se sustancia, salvo asentimiento de la persona reclamada a la extradición, en un juicio contradictorio con la presencia del Fiscal, del interesado y de su defensor, debiendo resolver el Tribunal competente mediante auto motivado. La intervención judicial es necesaria en la primera fase para decretar la prisión del reclamado y para mantenerlo en esa situación cuando proceda legalmente. El Juez ejercita en este caso un control sobre la privación de libertad del reclamado que viene hoy impuesta por el artículo 17 de la Constitución. Pero no le compete conocer de la procedencia de ésta, conocimiento que está atribuido al Tribunal que ha de decidir en la segunda fase del procedimiento. Ahora bien, el recurrente impugna en el presente recurso de amparo el auto de 14 de julio del Juzgado Central número 2 y otras resoluciones del mismo Juzgado dictadas en la primera fase del procedimiento y relativas a su situación de prisión. Es evidente, por tanto, que caen fuera del presente recurso una serie de alegaciones del recurrente en que se invocan supuestos impedimentos para proceder a su extradición, ya que se trata de cuestiones que sólo se pueden decidir en la fase judicial. Tales son la supuesta naturaleza política de los hechos que le son imputados, el que haya sido juzgado en rebeldía por los Tribunales italianos, que se haya extinguido su responsabilidad criminal con arreglo a la legislación española y otras afirmaciones referidas a los supuestos sustanciales de la extradición. Por ello, debe prescindirse de todas esas cuestiones que sólo podrían ser objeto del recurso de amparo en su momento y si la decisión firme de los órganos judiciales españoles pudiera quebrantar derechos y libertades susceptibles de dicho recurso, ya que la normativa atinente al Instituto de la extradición queda en principio fuera del mismo por incluirse en el artículo 13.3 de la Constitución, respecto al cual no cabe el recurso de amparo (STC núm. 11/1983, de 27 de febrero, RA 373/1982).

Segundo.- Según el recurrente, las resoluciones judiciales impugnadas habrían vulnerado los artículos 17.1 y 4 y el 24.1 y 2 de la Constitución. Pero cabe desechar de entrada la supuesta vulneración del artículo 24 en sus dos apartados citados. Respecto al primero, en que se invoca la falta de tutela judicial efectiva, basta recordar que el recurrente tuvo acceso a la jurisdicción interponiendo recurso de reforma contra el auto de 27 de junio de 1983 por el que se decretó su prisión durante el tiempo y las condiciones por él fijadas, que obtuvo una respuesta motivada en el auto de 14 de julio, y en cuanto a su petición de libertad formulada al expirar el primer plazo fijado por el citado auto de 27 de junio, obtuvo también una respuesta razonada por resolución de 9 de agosto. Y el derecho a la tutela judicial efectiva supone básicamente, según reiteradísimas resoluciones de este Tribunal Constitucional, el acceso a la jurisdicción y la obtención de una resolución jurídicamente fundada, siempre que se hayan seguido los cauces procesales legalmente establecidos, con independencia de que la resolución sea o no conforme a las pretensiones deducidas. En cuanto al apartado segundo del artículo 24 no se aprecia en la actuación del Juzgado la menor vulneración de lo que el recurrente denomina el «debido proceso». Ni ha habido dilaciones indebidas en la tramitación de los recursos interpuestos, ni se ha infringido ninguna de las garantías reconocidas en dicho artículo

24.2 ni, en realidad, se ofrece indicio alguno de que hayan sido. Y si en las supuestas vulneraciones a las garantías procesales que integran lo que en la terminología anglosajona se suele denominar el «due process of law» han sido o no vulnerados por los Tribunales italianos, es cuestión, como se dijo, ajena al presente recurso.

Tercero.- Limitando nuestro examen a la supuesta violación del artículo 17.1 y 2 de la Constitución, también procede prescindir sin mayor examen del segundo de los apartados citados. Como bien dice el Fiscal, la detención preventiva en el procedimiento de extradición no tiene por objeto esclarecer hecho alguno, y por otra parte, la garantía fundamental del 17.2, que es la observancia del plazo máximo de setenta y dos horas para que el detenido sea puesto en libertad a disposición judicial, se cumplió en este caso sin lugar a dudas. En realidad, la cuestión se centra en la invocada vulneración del 17.1 y, en particular, en su segundo inciso: «Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley». Y lo que en último término alega el recurrente es que las resoluciones del Juzgado Central número 2 relativas a su expediente de extradición pasiva le privaron de su libertad contra lo dispuesto por la Ley.

Cuarto.- Para resolver la cuestión es necesario tener en cuenta la complejidad de las normas que rigen la extradición. Fundamentalmente la extradición está regulada en España por la Ley de 26 de diciembre de 1958, en cuyo artículo 1º se dispone taxativamente:

«Las condiciones, el procedimiento y los efectos de la extradición se regirán:

1º Por lo convenido en los Tratados.

2º Por la presente Ley, cuando no exista Tratado para suplir lo no previsto en él».

Es decir, la Ley española de extradición tiene un carácter supletorio respecto a los tratados internacionales que el Estado español haya suscrito y ratificado o a los que se haya adherido sobre la materia. Con independencia, incluso, de lo dispuesto en el artículo 96.1 de la Constitución, según el cual «los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados en España, formarán parte del ordenamiento interno», la citada Ley proclama la primacía de la norma convencional sobre la norma interna, de forma que ésta tiene carácter solamente supletorio.

En el presente caso, en que se plantea una extradición solicitada por la República de Italia, los tratados a considerar son el convenio de asistencia judicial penal y de extradición entre España e Italia, firmado el 22 de mayo de 1973, ratificado el 11 de octubre del mismo año, y el Convenio Europeo de Extradición de 13 de diciembre de 1957, ratificado por España el 21 de abril de 1982 y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio del mismo año, y, entre otros Estados, por la República de Italia el 6 de agosto de 1963, entrando en vigor el 4 de noviembre del mismo año. El Juzgado Central de Instancia entendió de manera expresa en su Auto de 27 de junio de 1983 que era de aplicación preferente el artículo 16.4 del referido Convenio Europeo, según el cual:

«La detención preventiva podrá concluir si dentro de los dieciocho días siguientes a la misma la parte requerida no hubiese recibido la

solicitud de extradición ni los documentos mencionados en el artículo 17. En ningún caso la detención excederá de cuarenta días, contados desde la fecha de la misma. Sin embargo, será posible en cualquier momento la puesta en libertad provisional, pero en tal caso la parte requerida habrá de tomar las medidas necesarias para evitar la fuga de la persona reclamada».

En consecuencia, en el Auto de 27 de junio, confirmado por el de 14 de julio, ambos de 1983, el Juzgado estableció un plazo máximo de cuarenta días de prisión, prisión equivalente a la detención preventiva de que habla el Convenio, para que el Estado reclamante formulase la solicitud definitiva de extradición y remitiese la documentación precisa, en defecto de lo cual procedería la libertad del reclamado. El recurrente alega, como ya lo hizo ante el Juzgado, que no es aplicable el plazo de cuarenta días sino los plazos más cortos establecidos en la Ley española, que prevé el de diez días en caso de requerimiento directo (que es el caso actual) para que el Gobierno interesado pueda pedir la extradición, y el de quince entre los países europeos para la presentación de la solicitud de extradición definitiva (arts. 14 y 13 de la Ley española). Pero es claro que el tantas veces recordado carácter subsidiario de la Ley española hace que el Juez, al considerar de aplicación el plazo más amplio previsto en el convenio no privó la libertad al recurrente por más tiempo del establecido en la ley o, en este caso, de una norma contenida en un tratado publicado en España y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, sino que se atuvo a la legalidad vigente. Téngase en cuenta, a este respecto, que un tratado internacional atribuye derechos y deberes a los Estados contratantes y, por tanto, el Juez debió de tener en cuenta también el interés del Estado requirente, a quien el plazo máximo fijado en el tratado podría ser necesario para formalizar la extradición. Por esta misma razón, es decir, porque un tratado se contrae para utilidad de todas las partes contratantes, no es atendible el argumento expuesto por el recurrente, especialmente en su escrito final de alegaciones, según el cual del hecho de que el Convenio Europeo (art. 16.4) diga que la detención podrá concluir dentro de los dieciocho días siguientes a la misma, si la parte requerida no hubiese recibido la solicitud de extradición ni los documentos correspondientes, o de que la libertad provisional «será posible» en cualquier momento, se desprende que deba aplicarse la Ley española. Se trata, en efecto, de posibilidades de la parte requerida, cuyo aprovechamiento queda a su prudente arbitrio, como lo muestra que, si las ejerce, habrá de tomar (con carácter imperativo) las medidas que estime necesarias para evitar la fuga de la persona reclamada y que, como prevé el artículo 16.5 del Convenio, la puesta en libertad no será obstáculo para una nueva detención si la solicitud de ésta se presentare nuevamente. Corresponde al Juez decidir si, dadas las circunstancias del caso, es oportuno adelantar la libertad del reclamado sin que esté obligado a hacerlo y sin que, por tanto, el hecho de mantener la prisión el plazo máximo de cuarenta días a la espera de que se reciba la solicitud de extradición constituya un acto ilegal. En cuanto al artículo 22 del Convenio, también invocado por el recurrente, se limita a la ley de la parte requerida, salvo disposición en contrario del presente convenio, el procedimiento de extradición, así como el de la detención preventiva y basta señalar que el Convenio contiene en sus tantas veces citado artículo 16.4 una norma expresa sobre la duración de la prisión del reclamado, norma que, conviene recordarlo una vez

más, viene establecida no sólo en garantía de la libertad del reclamado, sino también en utilidad de los Estados contratantes y, en particular, del Estado requiriente, a quien se le asegura un espacio de tiempo para formalizar la solicitud de extradición. A la Ley del Estado requerido quedan confiados otros extremos importantes del procedimiento relativo a la prisión preventiva, como es la existencia y, en su caso, las modalidades del control judicial de la misma, extremos que el Convenio no regula y para los que hay que remitirse en este caso a la Ley española, como supletoria. Por último, tampoco puede dársele en este punto el valor que pretende el recurrente a la consulta de la Fiscalía General del Estado de 19 de noviembre de 1982 (núm. 2/82), pues con toda evidencia esa consulta no puede condicionar la libertad de interpretación del ordenamiento jurídico por parte de los Jueces y Tribunales, que en su función jurisdiccional son soberanos y sólo están sometidos al imperio de la Ley (art. 117.1 de la Constitución).

Sexto (sic).- Alega asimismo el recurrente que tampoco se cumplió el plazo de cuarenta días previsto en el Convenio y considerado como aplicable por el Juez, porque ese plazo transcurrió sin que se recibiese petición formal de extradición, pese a lo cual no fue puesto en libertad. Dice el recurrente que lo único que recibió el Juez fue un telegrama del Ministerio de Justicia por el que se le comunicaba haberse recibido la solicitud.

Pero lo cierto es que habiendo recibido el Juez noticia oficial de haberse presentado la petición de extradición y la documentación correspondiente con antelación a que expirase el plazo de cuarenta días, tenía que dar por cumplida la condición impuesta en su auto de 27 de junio para mantener la prisión del reclamado, pues la verificación de que la documentación presentada sea la legalmente necesaria no corresponde en esta fase al Juez, sino al Ministerio de Justicia, a quien se transmitió del de Exteriores la solicitud de extradición para que las examinase y reclamase, si lo estimaba oportuno, los justificantes o aclaraciones que considerase necesarios (art. 12 de la Ley española), y ello es así porque, como se ha dicho, esta fase del procedimiento de extradición sigue teniendo carácter gubernativo, aunque sea necesaria la intervención judicial para mantener privado de libertad al reclamado más de setenta y dos horas, por imperativo del artículo 17.2 de la Constitución.

Séptimo.- El recurrente entiende también que el segundo plazo de cuarenta días establecido por el Juez para que el Ministerio de Justicia le comunique si el Gobierno ha acordado o no continuar el procedimiento carece de base legal. Rige en este punto la Ley española en defecto de normas convencionales. Pues bien, el mencionado artículo 12 de la Ley no fija un plazo determinado para el citado acuerdo. En efecto, dicho artículo establece que el Ministerio de Justicia, en un plazo máximo de ocho días, computados desde la siguiente a la recepción de la solicitud o de los justificantes o aclaraciones por él reclamados, elevará al Gobierno propuesta motivada sobre si ha lugar o no a continuar el procedimiento. El Gobierno deberá adoptar su decisión en el plazo de quince días, transcurrido el cual sin que el Gobierno haya adoptado resolución, el Ministerio de Justicia lo hará en su nombre. Hay, pues, un margen de indeterminación en el primer momento, si el Ministro de Justicia decide solicitar justificantes o aclaraciones, pues el plazo de ocho días en que debe elevar su propuesta al Gobierno se cuenta a partir de la recepción de estos datos solicitados por la no siem-

pre rápida vía diplomática. Tampoco existe un plazo taxativo para que el Ministro de Justicia tome la decisión si no lo ha hecho el Gobierno. En esas circunstancias el Juez se consideró facultado, en aras de lo dispuesto en el artículo 528 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual todas las Autoridades que intervengan en un proceso criminal estarán obligadas a dilatar lo menos posible la detención y la prisión provisional de los inculcados o procesados, para establecer un plazo máximo a favor del preso, hoy recurrente, con el objeto de evitar una dilación excesiva en la tramitación gubernativa de la extradición. Desde el punto de vista del derecho constitucional a la libertad, único que aquí interesa, no puede decirse que la fijación de un plazo máximo de prisión cuando la Ley no lo fija suponga un ataque a aquel derecho. Mas bien es todo lo contrario: una medida dirigida a su protección.

Octavo.- De todo lo expuesto resulta que no se han vulnerado en las resoluciones judiciales impugnadas los derechos fundamentales invocados por el recurrente, por lo que procede desestimar el amparo solicitado.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido:

Denegar el amparo solicitado.

Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid a 30 de enero de 1985.—Manuel García-Pelayo y Alonso.—Ángel Latorre Segura.—Manuel Díez de Velasco Vallejo.—Gloria Begué Cantón.—Rafael Gómez-Ferrer Morant.—Ángel Escudero del Corral.—Firmados y rubricados.

6

REFUGIADOS. Requisitos para la calificación como tales. Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre Estatuto de los Refugiados y Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967. Ley española 5/1984, de 26 de marzo.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso.): SENTENCIA DE 8 DE FEBRERO DE 1985. Ponente: D. Matías Malpica González-Elipse.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, dictó sentencia, desestimando el recurso interpuesto por Salam A. A., contra la resolución del Ministerio del Interior de 5 de junio de 1984, que denegaba al recurrente el reconocimiento de la condición de refugiado. El fallo de dicha Sala declara que la resolución impugnada es ajustada a derecho.

Interpuesto recurso de apelación por el mismo actor, el T. S., confirmando la sentencia apelada, lo desestima, con expresa imposición de costas en ambas instancias al haberse tramitado el recurso al amparo de la Ley 62/78.

CONSIDERANDO: Que, en primer lugar, ha de ponerse de relieve que la presente litis, afectando como afecta a la legalidad intrínseca del acto administrativo denegatorio de la concesión de la condición de refugiado al recurrente y concretamente con relación a la normativa contenida en la Ley 5/1984, de 26 de marzo (R. 843) y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, suscrito en Ginebra, cuya fiscalización compete a esta jurisdicción, ha de ser sustanciada por los trámites de la ley 62/78, de 28 de diciembre, sin que para ello sea precisa la invocación o fundamentación razonable de ningún precepto específico de la Constitución, por prevenirlo así el artículo 24 y Disposición Transitoria 1ª de la Ley 5/84.

CONSIDERANDO: Que, en primer lugar, ha de ponerse de relieve que la presente litis, afectando como afecta a la legalidad intrínseca del acto administrativo denegatorio de la concesión de la condición de refugiado al recurrente y concretamente con relación a la normativa contenida en la Ley 5/1984, de 26 de marzo (R. 843) y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 suscrito en Ginebra, cuya fiscalización compete a esta jurisdicción, ha de ser sustanciada por los trámites de la ley 62/78, de 28 de diciembre, sin que para ello sea precisa la invocación o fundamentación razonable de ningún precepto específico de la Constitución, por prevenirlo así el artículo 24 y Disposición Transitoria 1ª de la Ley 5/84.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo, con lo señalado en el artículo 1-A) 2 de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo sobre el mismo tema firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967, a los que se adhirió España en 22 de junio de 1978 y que como dice el apartado 4-III de la Exposición de motivos de la Ley 5/84 repetidamente citada, forman parte del Ordenamiento jurídico español —artículos 10.2 de la Constitución y 1º-5 del Código Civil—, el derecho reconocido a los extranjeros para solicitar y obtener la condición jurídica de refugiado ha de basarse, según los artículos 8 y 22-1 de la Ley de 26 de marzo de 1984, por lo menos en la existencia de unos datos objetivos, de los que puedan interferirse esos indicios suficientes de la concurrencia en el sujeto recurrente extranjero, de padecer persecución o temor fundado de padecerla por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a grupo social determinado, u opiniones o actividades políticas, por cuya razón encontrándose fuera del país de su nacionalidad, no quiere o no puede acogerse a la protección de su país, (coincidente sustancialmente con el artículo 3º de la Ley 5/84 tan reiteradamente citada). Es decir, es una secuela de la Declaración Universal de Derechos Humanos, —explícitamente referenciada en el artículo 10.2 de la Constitución— adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948, que en su artículo 15, condena las privaciones arbitrarias del derecho a una nacionalidad y del derecho a cambiar de ella, con lo que se consagra ese derecho a obtener una protección de carácter internacional de sus derechos individuales bajo los auspicios de una bandera determinada evitándose con ello situaciones acontecidas pretéritamente, en que

por unas u otras razones de las anteriormente especificadas, podía quedar el individuo, como sujeto de valores humanos, sin esa protección como era el caso del apátrida, que quedaba por tal motivo reducido a sus propias fuerzas sin ningún «Status» jurídico que lo garantizara del ejercicio y reconocimiento de sus derechos naturales como tal hombre. Pues bien, en el caso presente sin que haya sido ni acreditado ni alegado ninguno de los supuestos obstaculizadores para la concesión del carácter de refugiado pormenorizados en el artículo 3-4 de la Ley 5/84, incluso sin que haya objeción obstativa del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo cierto es que en toda la documentación presentada por el recurrente-apelante, no parece ningún dato revelador de esa situación prevista en el ordenamiento jurídico que le afecte a él personalmente, ni aún en el grado de indicio, sospecha o conjetura. Precisamente el detallado análisis hecho en el Considerando tercero de la sentencia recurrida, que esta Sala reitera y da por reproducida —lo que haría superflua su transcripción—, conduce en forma clara, a la interpretación de que esos documentos no transparentan, ni indiciariamente, una situación conflictiva del recurrente con el país de su nacionalidad de las previstas en el Ordenamiento Jurídico, que ha sido precedentemente invocado.

CONSIDERANDO: Que estando, por lo expuesto, acorde en Derecho, la sentencia impugnada, procede desestimar el recurso con expresa imposición de costas al recurrente, artículo 10.3 de la Ley 62/78.

(RJA, 1985, nº 800, pag. 634)

7

TRATADOS INTERNACIONALES. NO APLICABILIDAD A FALTA DE RATIFICACIÓN (EN SU CASO) Y PUBLICACIÓN EN EL B.O.E. Convención Internacional para la Unificación de los Métodos de Análisis y Apreciación de los Vinos.

Tribunal Supremo (Sala 4ª, de lo Contencioso-Admº). SENTENCIA DE 12 DE MARZO DE 1985. Ponente: D. Manuel Gordillo García.

El Consejo de Ministros, en su reunión del 24 de abril de 1981, tomó, entre otros, el acuerdo de sancionar a «V. L., S. A.», de Catarroja (Valencia), con multa de 964.880 ptas., y la obligación de abonar el importe de la mercancía inspeccionada al no haberse podido llevar a término su decomiso, por causas imputables a la interesada, que se eleva a 4.824.401 ptas., con independencia del pago de los gastos y tasas devengados por gestión técnico-facultativa; e interpuesto recurso de reposición fue desestimado por otro acuerdo del propio Consejo de Ministros de fecha 12 de febrero de 1982.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por «V. L., S. A.», el T. S., lo estima en parte, anulando las resoluciones impugnadas por no ser conformes a Derecho.

CONSIDERANDO: Que el presente recurso contencioso-administrativo

se interpone por «V. L., S. A.», contra la Resolución del Consejo de Ministros de 24 de abril de 1981 —que impone a la referida Sociedad una multa de 964.880 pesetas, más el pago del importe de la mercancía que no pudo ser decomisada, cifrado en 4.824.401 pesetas, y de los gastos y tasas por gestión técnico facultativa que ascienden a 2.700 pesetas, por la comisión de una infracción prevista en el artículo 62-C 5 del Decreto de 23 de Marzo de 1972 —que aprueba el Reglamento para la ejecución del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes de 2 de diciembre de 1970— en relación con el Anexo C de la Convención Internacional para la unificación de los Métodos de Análisis y de Apreciación de los Vinos y Disposición Adicional 2ª del Decreto antedicho —y contra la Resolución del propio Consejo de Ministros de 12 de febrero de 1982, que desestima el recurso de reposición promovido frente a la anterior.

CONSIDERANDO: Que examinada en primer término, por imperativo del orden procesal a que ha de acomodarse el juzgador en la formación de la Sentencia, la alegación de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto que se formula por el Sr. Abogado del Estado, al amparo del artículo 82-f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción, consistente en que el escrito de interposición ha sido presentado después de transcurridos los dos meses que señala el artículo 58 de la propia Ley; ha de ser rechazada por la Sala la mencionada alegación, ya que el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de febrero de 1982, fue notificado el 21 de abril de ese mismo año a la Sociedad actora, que interpuso el recurso contencioso-administrativo de 7 de junio siguiente, dentro, en consecuencia, del plazo de dos meses legalmente establecido.

CONSIDERANDO: Que, en lo que se refiere al fondo del asunto, ha de significarse que impuesta la sanción a la Sociedad recurrente por exceder los vinos analizados la cantidad de 5 mg/l autorizada como límite máximo de flúor en el Anexo C de la Convención Internacional para la unificación de los Métodos de Análisis y de apreciación de los Vinos (aprobado, al parecer, en París, en septiembre de 1961), no consta que el mismo haya sido ratificado por España y publicado en el correspondiente periódico oficial —como lo fueron los Anexos A y B Boletín Oficial del Estado de 28 de abril y 11 de mayo de 1956— por lo que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957, no puede producir efectos jurídicos, ni tampoco, en consecuencia, determinar su incumplimiento la imposición de una sanción.

CONSIDERANDO: Que, por cuanto antes se expone, procede estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por «V. L., S. A.», y declarar que las resoluciones administrativas impugnadas no son conformes a derecho, por lo que se anulan y dejan sin valor ni efecto, desestimando las demás peticiones deducidas en la demanda; sin que, a tenor de lo prevenido en el artículo 131 de la Ley Jurisdiccional, sea de apreciar temeridad o mala fe para imposición de las costas causadas.

EXTRANJEROS. PERMISOS DE RESIDENCIA Y DE TRABAJO. Denegación por motivos de orden público.

Tribunal Supremo (Sala 4ª, de lo Contencioso-Admº): SENTENCIA DE 25 DE ABRIL DE 1985. Ponente: D. José Mª Sánchez-Andrade y Sal.

Por resolución del Gobierno Civil de Vizcaya de 25 de marzo de 1980 acordó al archivo de las actuaciones incoadas con motivo de la solicitud de permiso de trabajo y autorización de residencia formulada por D. Ignacio L. R.; que interpuesto recurso de reposición, fue ídóticamente desestimado.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por Ignacio L. R., la Sala de la Audiencia Territorial de Bilbao, en sentencia de 11 de febrero de 1983, lo estima, anulando el acto impugnado por no ser ajustado a Derecho.

Promovido recurso de apelación por el Abogado del Estado, el T. S., aceptando los considerandos 1º, 2º y 7º de la sentencia apelada, lo desestima, confirmando aquélla por estar ajustada a Derecho.

Considerandos de la sentencia apelada que se aceptan:

«PRIMERO: Que es objeto de impugnación a través del presente recurso contencioso-administrativo la denegación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra resolución del Gobierno Civil de Vizcaya de 25 de marzo de 1980 que acordaba el archivo de las actuaciones incoadas con motivo de la solicitud de permiso de trabajo y autorización de residencia formulada por el ahora recurrente Ignacio L. R.

SEGUNDO: Que son hechos de los que ha de partir la Sala por hallarse acreditados en el expediente administrativo incorporado a los autores y por el resultado de la prueba practicada en los mismos, los siguientes: a) D. Ignacio L. R. trabaja desde junio de 1976 en la empresa «A., S. A.», como ingeniero industrial con título de «Master of Science» en ingeniería mecánica expedido por la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos), habiéndose sido otorgado para ello los oportunos permisos por el Ministerio de Trabajo y por la Dirección General de Seguridad; b) durante el tiempo de su permanencia en España ha estado domiciliado en Bilbao Gran Vía 56; la empresa en que trabaja ha cotizado por él en la Seguridad Social; el expresado ha presentado declaración por impuesto sobre la renta de las personas físicas, y ha observado buena conducta según acredita la Jefatura Superior de Policía de Bilbao; c) la Dirección General de Empleo informa que en la especialidad de Ingeniero Jefe de Exportación que tiene el ahora recurrente no hay ningún parado si bien son 176 los ingenieros industriales inscritos en el paro.

SEPTIMO: Que no procede un especial pronunciamiento en cuanto a las costas».

Considerandos del Tribunal Supremo.

CONSIDERANDO que acreditado en el expediente administrativo en que recayó la Resolución del Gobernador Civil de Vizcaya de 25 de marzo de 1980, que la sentencia objeto del recurso de apelación que se enjuicia anula, Resolución que acordaba el archivo de las actuaciones iniciadas con motivo de la solicitud de permiso de trabajo y autorización de residencia formulada por D. Ignacio L. R., que el Sr. L. R., de nacionalidad mejicana, se encontraba en España en la fecha 4 de Enero de 1980 en que tuvo su entrada en la Delegación del Trabajo de Bilbao la solicitud de renovación de permiso de trabajo y autorización de residencia, hallándose en posesión de permiso de trabajo vigente hasta el 18 de mayo de 1980, siendo D. Ignacio L. R. persona que careciendo de antecedentes penales observa buena conducta, según informa el Jefe Superior de Policía de Bilbao, en cuya ciudad trabaja en la Empresa «A., S. A.» dedicada a la construcción de escotillas de buque, como Ingeniero ayudante Jefe de exportación, amparado por el contrato de trabajo de fecha 12 de mayo de 1976, poseyendo según se hace constar por el apoderado de la referida Empresa, «una alta especialización en el trabajo que desempeña, en esta Empresa en la que ha formado un equipo técnico, fruto del cual ha sido la construcción de una Rampa de Popa articulada primera proyectada y construida en España», siendo su sustitución altamente costosa para la Empresa en que trabaja, no existiendo, según informe de la Oficina de Empleo de la Delegación Provincial de Trabajo de Bilbao de fecha 13 de febrero de 1980, ningún parado en la especialidad y puesto de trabajo desempeñado por el Sr. L. R., resultaba improcedente el archivo de las actuaciones originadas por la solicitud de permiso de trabajo y autorización de residencia por él mismo formuladas, acordada por el Sr. Gobernador Civil de Vizcaya, haciendo uso de las facultades al mismo conferidas por el art. 2º del Real Decreto 1874/78 de 2 de junio, dado que, como tiene declarado esta Sala, entre otras, en sus sentencias de 17 de octubre de 1983 y 19 de octubre de 1983 y 19 de noviembre de 1984, recaídas en aplicación del Real Decreto 1031 de 3 de mayo de 1980, normativa que sustituyó el Real Decreto 1874/78 que regulaba la concesión y renovación de permisos de trabajo a extranjeros, la referencia al orden público que dichas disposiciones contienen, encierra un concepto jurídico indeterminado que exige una prueba detallada y precisa de los presupuestos fácticos que la hacen aplicable, no bastando la invocación genérica de dicho término para archivar la solicitud de autorización de residencia y permiso de trabajo.

CONSIDERANDO que ante la inexistencia de razones de orden público que fundamenten el lícito ejercicio de la facultad conferida al Gobernador Civil de Vizcaya, en virtud de lo dispuesto en el art. 2º del Real Decreto 1874/78 de 2 de junio, para acordar sin más el archivo de las actuaciones iniciadas por la solicitud de permiso de trabajo y autorización de residencia formulada por D. Ignacio L. R., debió dicha Autoridad remitir la solicitud del permiso de trabajo de la Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo en Bilbao, para que de conformidad con lo ordenado en el párrafo 2º del precitado art. tramite el expediente a tenor de lo prescrito en el Decreto 1870/68 de 27 de julio, con los efectos que prevé el art. 3º del Real Decreto 1874/78.

CONSIDERANDO que las anteriores consideraciones conducen a

declarar la nulidad de la Resolución del Gobernador Civil de Vizcaya de fecha 25 de marzo de 1980, al no haberse ajustado a Derecho a la orden de archivo de las actuaciones incoadas con motivo de la solicitud de permiso de trabajo y autorización de residencia formulada por D. Ignacio L. R., todo ello sin que proceda hacer una especial condena en costas.

(RJA, 1985, nº 2878, pag. 2439)

9

REFUGIADOS. Requisitos para la calificación como tales. Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951. Ley española 5/1984, de 26 de marzo.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-Admº). SENTENCIA DE 9 DE MAYO DE 1985. Ponente: D. José Mª Ruiz-Jarabo Ferrán.

La Sección Primera de la Audiencia Nacional dictó sentencia en 19 de enero de 1985, en procedimiento seguido al amparo de la Ley 62/78, desestimado el recurso interpuesto por el súbdito iraní Ariang Ch., contra resoluciones del Ministerio del Interior de 23 de febrero de 1984, que le denegaron el reconocimiento de la condición de refugiado en España y la de 17 de julio del mismo año, que desestimó la reposición deducida contra la anterior.

Interpuesto recurso de apelación por el mismo actor el T. S. lo desestima con expresa imposición de costas en ambas instancias.

CONSIDERANDO: Que conforme a lo establecido en el artículo 1-A-2) de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de Julio de 1951, y del Protocolo sobre el mismo tema firmado en Nueva York el 31 de Enero de 1.967, a los que se adhirió España el 22 de Junio de 1.978, y que como expresamente se declara en el apartado 4-III de la Exposición de Motivos de la Ley 5/1.984, de 26 de Marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, forman parte del ordenamiento jurídico español, el derecho reconocido a los extranjeros para solicitar y obtener la condición jurídica de refugiado ha de venir fundado en la existencia de unos datos objetivos, de los que puedan deducirse de forma suficiente, la concurrencia en el extranjero peticionario del asilo, de alguna de las circunstancias determinadas en el artículo 3º de la precitada Ley de 26 de Marzo de 1.984, que se refieren, en concreto, a los que sufren persecución, o tienen temor fundado de padecerla, por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia o grupo social determinado, o por opiniones o actividades políticas, estableciéndose al respecto en el artículo 8º de la indicada Ley, la necesidad de que tales circunstancias o supuestos para solicitar asilo puedan deducirse por «indicios suficientes».

CONSIDERANDO: Que en el presente supuesto, que es prácticamente idéntico al resuelto en la sentencia de esta Sala de 22 de Enero del corriente año 1.985 (R. 240), la Sala de primera instancia en la sentencia ahora apelada, no estimó que se hubieran acreditado, ni siquiera de la forma indiciariamente suficiente que establece el ya citado artí-

culo 8º de la Ley 5/1.984, que en el súbdito de nacionalidad iraní solicitante de la condición de refugiado en España, concurrieran alguno de los supuestos previstos en los números 1 a 3 del artículo 3º de la referida Ley, ya que no ha aportado prueba que sea demostrativa de dicha concurrencia, no entendiendo por tal una serie de cartas cruzadas entre aquél, hoy apelante, y otras personas que se autotitulan miembros de un movimiento de resistencia nacional iraní, conclusión, por consiguiente, denegatoria de la pretensión de aquél y, por ello, confirmatoria de las resoluciones del Ministerio del Interior que denegaron al accionante el reconocimiento de la condición de refugiado en España, en la que debe insistirse, por cuanto, a tenor de los elementos de prueba aportados por el apelante, limitados a las cartas antes aludidas, no cabe estimar que ello suponga un indicio suficientemente acreditativo de la concurrencia en aquél de alguno de los supuestos del mencionado artículo 3º, pues en realidad la solicitud de asilo en el presente caso, aparece más fundada en sospechas o conjeturas del peticionario de refugio, lo que, como ya se ha establecido por esta Sala en la antes aludida Sentencia de 22 de Enero último, no es equivalente a «indicios suficientes», no pudiendo deducirse de las cartas aportadas a este proceso, la realidad de una situación de inseguridad personal en el hoy apelante, ni de persecución al mismo por alguno de los motivos señalados en los apartados a) y b) del número 2 del tantas veces aludido artículo 3, existiendo en el presente caso, igual, repetimos, en su planteamiento fáctico al resuelto en la sentencia de 22 de Enero de 1.985, una serie de circunstancias contradictorias, y que pueden llevar a una presunción contraria a lo interesado por el solicitante del refugio, como son la permanencia en su país durante un dilatado período bajo el actual régimen, su paso por otro país, al menos, también signatario de la Convención de Ginebra de 28 de Julio de 1.951, sin solicitar en este último asilo, y, por último, su dilación —más de nueve meses— en la presentación de la solicitud origen de las actuaciones administrativas dese su entrada en España, circunstancias contradictorias, en suma, que impiden llegar a la convicción de que en el hoy apelante se den, ni tan siquiera, esos indicios suficientes, a que repetidamente hemos aludido.

(RJA, 1985, nº 2340, pag. 1981)

10

PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCA EXTRANJERA. Contrato de «franchising». Convenio de Paris de 20 de marzo de 1883. Estatuto de la Propiedad Industrial.

Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil): SENTENCIA DE 15 DE MAYO DE 1985. Ponente: D. Jaime de Castro García.

Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Palma de Mallorca, fueron vistos los autos de juicio declarativo de mayor cuantía, instados por la Corporación «King-Seeley Thermo Co.», la Entidad Frimont, S. P. A. y la Entidad «M. Frau, S. A.», contra la Entidad «Friusa», sobre el derecho de uso de la marca denominada «Scotsman».

El Juez de Primera Instancia dictó sentencia, por la que, estimando la demanda interpuesta por la representación de los actores, conocida también contra Friusa conocida también como Friu, S. A., condenó a la demandada a cesar en el uso de la marca «Scotsman», debiendo abstenerse en lo sucesivo de cualquier acto de perturbación en la pacífica posesión de la expresada marca a los actores, desestimando íntegramente la reconvencción formulada por la demandada, sin hacer expresa imposición de costas a las partes. Apelada la sentencia por la representación de la parte demandada, la Audiencia, dictó sentencia estimando el recurso de apelación interpuesto y nombre y representación de la entidad Friusa, contra la sentencia de 28 de enero de 1982, dictada por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de los de Palma, en el juicio declarativo de mayor cuantía de que este rollo dimana, y la revocó íntegramente, y en su consecuencia desestimamos la demanda interpuesta en la instancia, y estimamos la reconvencción por el demandado formulada y consiguientemente, debemos declarar que la importación, distribución y venta por parte de Friusa de las máquinas fabricadoras de hielo, marca «Scotsman», siempre que se cumplan los trámites legalmente establecidos y previo abono de los derechos arancelarios correspondientes, es una actividad perfectamente legal contenida dentro de los fines fundacionales de la empresa y que, en consecuencia, Friusa puede ofrecer dichas máquinas y hacer publicidad de las mismas explicando sus características, procedencia identificándolas por su marca de fábrica «Scotsman» condenando a las entidades reconvenidas a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a no realizar actividad alguna que vengan a limitar o entorpecer el ejercicio de los referidos derechos, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de las costas causadas en esta instancia.

La representación de la parte actora, interpuso recurso de casación por infracción de ley.

CONSIDERANDO: Que para llegar a la desestimación de la demanda la Sala de instancia sienta como hecho capital de su tesis, no combatido en el recurso, el aserto de que los frigoríficos y máquinas productoras de hielo comercializados por la entidad demandada FRIU, S. A., tienen la auténtica marca en debate y han sido adquiridos lícitamente en el mercado internacional para su reventa en territorio español; premisas que sirven a su conclusión de que sin negar la realidad de la licencia para el uso de aquel signo distintivo concedida por KING-SEELY THERMOS CO en favor de la codemandante FRIMONT, S. P. A. así como la de la «suplicencia» otorgada por la segunda en beneficio de la también actora M. FRAU, S. A., la pretensión de tales entidades postulando la condena de la demandada «a cesar en el uso de la marca SCOTSMAN, absteniéndose en lo sucesivo de cualquier acto de perturbación en la pacífica posesión de la misma» a las accionantes, tiene que ser rechazada por cuanto que, según entiende, el contrato de licencia de uso de una marca, en cuya virtud se faculta a un tercero para su utilización (que en principio corresponde con carácter exclusivo al titular concedente), no puede impedir que quien ha adquirido, «prevaleciéndose de unos canales comerciales en modo alguno prohibidos», algunos productos con tal elemento diferenciador, use la marca inherente a las mercaderías y que no puede suprimir con arreglo a lo ordenado en el número cuarto del artículo ciento veintitrés del Estatuto sobre la Propiedad Industrial «anunciándola y exponiéndola al público mediante fotografías u otros medios de publicidad, no cabiendo convertir un problema sobre determinadas deficiencias de distribución comercial en otro distinto sobre derechos de propiedad industrial en modo alguno conculcados, a menos que se reconozca la creación de una situación monopolística que impida a los demás comerciantes ejercitar debidamente su actividad mercantil».

CONSIDERANDO: Que el motivo único del recurso interpuesto por

las entidades actoras se ampara en el ordinal primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil y denuncia la infracción por violación del artículo treinta y uno del referido Estatuto, argumentando que dicho precepto «permite impedir las llamadas importaciones paralelas por quienes son los titulares de la marca registrada y los licenciarios o sublicenciarios de uso de dicha marca, cuyos contratos hayan sido inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial», pues el acceso al mismo de un contrato o subcontrato de esa clase «le otorga eficacia frente a terceros y permite al sublicenciado (sic) de uso de una marca oponerse a la realización de importaciones de productos de dicha marca»; alegación que no puede prosperar, por las siguientes razones: Primera) Si, como reconocen las recurrentes, «la cuestión planteada es la de la eventual circulación de las mercancías marcadas lícitamente en el país de origen, aun cuando la marca pertenezca en el país de su destino a otro sujeto», claro está que no existe en la normativa estatutaria sobre tal signo un precepto específico prohibitivo de una actividad como la que se pretende impedir, y no cabe invocar al artículo diez del Estatuto, como el recurso sostiene, ya que tal disposición, concebida en términos de gran generalidad, se limita a enunciar el amparo dispensable, «en la forma y condiciones que se determinan», «a las patentes, marcas, modelos y dibujos de todas clases, nombres comerciales, rótulos de establecimiento y películas cinematográficas», cuando el registro fuere concedido. Segunda) El derecho a la exportación exclusiva que la marca otorga a su titular, distinguiendo el producto fabricado de los similares en el mercado (artículo primero del Estatuto), ninguna relación guarda con la situación creada por la reventa en el área geográfica a la que se extiende la licencia de uso de la marca de productos lícitamente distinguidos con ésta y adquiridos en el ejercicio de una procedente actividad comercial, aunque acudiendo a cauces distintos de los abiertos por el beneficiario de la concesión. Tercera) El artículo treinta y uno del Estatuto, única norma cuya infracción se aduce, se limita a disponer, en concordancia con el treinta y dos, que las transferencias de modalidades de la propiedad industrial no perjudican a tercero mientras no se acredite mediante el oportuno documento fehaciente en los libros del Registro la transmisión operada —sentencia de seis de octubre de mil novecientos setenta y dos y las que en ella se citan—, supuesto normativo en el que no cabe subsumir, por evidente diversidad, una situación como la debatida en el proceso y planteada en el recurso, y por otra parte entre las modalidades registrales susceptibles de derecho de propiedad industrial no están comprendidos los contratos de «licencia y sublicencia de uso» de una marca —artículos dos y tres del Estatuto y artículo dos del Convenio de París de veinte de Marzo de mil ochocientos ochenta y tres, con sus posteriores revisiones hasta el catorce de julio de mil novecientos sesenta y siete—, lo que significa que esos negocios, con los efectos vinculantes del caso entre los que se ligaron, no pueden constreñir en forma alguna las importaciones que del producto ya fabricado por el originario titular de la marca se hagan con destino a su venta en el mercado nacional, como acontece, mutatis mutandi, con las patentes de introducción. Cuarta) En definitiva, dichos convenios, que tanta analogía guardan con los de concesión o distribución en exclusiva, negocios atípicos y de naturaleza mixta, aludidos en repetidas ocasiones por la jurisprudencia —sentencias de veintinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, catorce de noviembre de

mil novecientos setenta, diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y tres, treinta de septiembre de mil novecientos setenta y ocho y uno de junio de mil novecientos setenta y nueve, entre otras— y práctica identidad con el contrato denominado de «Franchising», caracterizado por la autorización que el concedente da al concesionario para utilizar su marca, generalmente internacional, integrándolo en su red de comercialización, no pueden entrañar obstáculo para que un tercero ajeno al pacto pueda comerciar productos con la marca legítima y por lo tanto fabricados por el cedente, sin que a ello pueda oponerse la constancia registral o toma de razón de la licencia de uso de tal signo distintivo, aunque sí legitimarán a los concesionarios para combatir la fabricación en territorio nacional de los apartados y máquinas diferenciados con la marca.

CONSIDERANDO: Que por lo expuesto procede la desestimación del recurso, con el pronunciamiento preceptivo en cuanto a la imposición de costas, artículo mil setecientos cuarenta y ocho de la Ley Procesal, y sin que haya lugar a mención alguna en cuanto al depósito, no constituido por existir disconformidad entre las sentencias de uno y otro grado.

(RJA, 1985, n° 2393, pag. 2025)

11

EXTRANJEROS. PERMISO DE TRABAJO. Súbditos de países hispanoamericanos. Ley de 30 de diciembre de 1969.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo)): SENTENCIA DE 25 DE MAYO DE 1985. Ponente: D. Julio Fernández Santamaría.

La Sala Tercera de Madrid dictó sentencia en 21 de octubre de 1982, estimando el recurso interpuesto por don Sergio G. D. contra resolución de la Delegación Provincial de Trabajo de Madrid de 1 febrero 1980 por la que se le denegó el permiso de trabajo a dicho actor, ciudadano argentino. El fallo de dicha Sala anula la resolución impugnada declarando el derecho del Sr. G. B. para trabajar en España sin necesidad de permiso de trabajo.

Interpuesto recurso de apelación por el Abogado del Estado, el T. S. lo desestima.

CONSIDERANDO: Que el Abogado del Estado impugna la sentencia apelada en base al siguiente argumento: la Ley de 30 de Diciembre de 1.969 establece que los trabajadores iberoamericanos queden exentos de la obligación de proveerse del permiso de trabajo que exigía el Decreto de 27 de Julio de 1.968 y, por tanto, si con posterioridad a dicho Decreto, surge otra norma del mismo rango —Decreto de 2 de Junio de 1978— que vuelve a exigir para todos los trabajadores extranjeros la obtención del permiso de trabajo, es indudable que ha de hablarse de normas del mismo rango y considerar vigente a la posterior.

CONSIDERANDO: Que esas razones del Abogado del Estado no tiene fuerza jurídica para desvirtuar los acertados fundamentos de la

sentencia apelada, que asumimos; pero, además, esta Sala en sentencias de 5 y 2 de Noviembre de 1.982, 21 y 27 de Enero y 17 de Noviembre de 1.983, entre otras, ha sentado sobre la cuestión debatida los siguiente: a) en la Ley 118/69 de 30 de Diciembre, se pretendió el reconocimiento especial y pomenorizado de la igualdad de derechos en los trabajadores Hispanoamericanos, entre otros, residentes en nuestro país. b) como expresión de esta equiparación y cumpliendo lo mandado en la Disposición Adicional de la citada Ley 118/69, que faculta al Ministerio de Trabajo para dictar las disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecución, se publica la Orden Ministerial de 15 de Enero de 1.970, eximiendo, entre otros, a los súbditos hispanoamericanos que «trabajan en territorio español, o pretenden trabajar en él, por cuenta propia o ajena» «de la obligación de proveerse del permiso de trabajo que con carácter general y para todos los extranjeros que realizan una actividad laboral en España, preceptúa el artículo 4º del Decreto 1.870/68 de 27 de Julio...» c) a la vista de ello no ofrece duda que el Real Decreto 1874/78 de 2 de Junio, vigente a la fecha de la petición respecto a la concesión y renovación del permiso de trabajo a los extranjeros, no era aplicable al supuesto examinado, al tratarse de un extranjero hispanoamericano, que queda fuera de dicha Regulación general, ya que existe una específica contenida en la Ley y Orden citada; y no puede estimarse derogada esta Orden de 15 de Enero de 1.970, que desarrolla y ejecuta la Ley 119/69, por el Decreto 1874/1.978, en donde no figura ninguna disposición que la deje expresamente sin efecto, como ocurrió con el Decreto de 27 de Julio de 1.969 en relación con el Decreto de 16 de Abril de 1.948 —que en su artículo 1º equiparaba a efectos laborales— de los trabajadores de nacionalidad argentina a los españoles.

(RJA. 1985, nº 2623, pag. 2220)

12

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EXTRANJERAS. Improcedencia de la ejecución de una sentencia extranjera de divorcio de cónyuges españoles residentes en España. Competencia de los tribunales españoles. Fraude de ley.

Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil). AUTO DE 27 DE MAYO DE 1985. Ponente: D. Jaime Santos Briz.

Don Francisco F. R. solicitó de la Sala 1ª del T. S. la ejecución de sentencia de divorcio, dictada el 27 de diciembre de 1979, por el Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Bravos de Chihuahua (Méjico), en autos seguidos con su esposa Dª Elena C. C.

Se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal que dictaminó que no procedía acordar la ejecución solicitada, y se requirió a la Procuradora de la parte para que aportara certificación de residencia de los cónyuges en el Estado de Chihuahua durante el tiempo en que se produjo el divorcio, certificación ésta que no fue aportada.

El T. S. declara no haber lugar a la ejecución en España de la sentencia referida.

CONSIDERANDO: que de lo actuado resulta que los solicitantes de ejecución en España de la sentencia de divorcio entre ellos dictada por el Juzgado de 1ª Instancia de lo Civil del Distrito Bravos de Chihuahua (Méjico), en fecha veintisiete de diciembre de 1.979, son españoles, tanto en la actualidad como en la fecha en que se siguió dicho proceso, y además consta que ambos residen en España y son vecinos de Pozuelo del Rey (Madrid); datos fácticos que impiden reconocer por los Tribunales españoles la eficacia de la sentencia de divorcio a que se ha hecho referencia; toda vez que: a) el artículo 107 número primero del Código Civil, preceptúa, que la separación y el divorcio se regirán por la Ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda; respecto de lo que nada consta en contrario en cuanto a la común nacionalidad española de ambos solicitantes; b) las disposiciones adicionales segunda y tercera de la Ley de siete de julio de 1.981 señalan para casos como el presente, de forma inequívoca, la competencia de los órganos jurisdiccionales españoles; por tanto, como ya dictamina el Ministerio Fiscal, habían de solicitar el divorcio ante los Tribunales Españoles; c) por último, de accederse a la petición formulada se infringe el artículo sexto apartado cuarto, del Código Civil, en cuanto la conducta de los peticionarios implicaría un claro fraude de ley que no impedirá la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

(RJA., 1985, nº 2813, pag. 2354)

13

CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. AVERÍA DE MERCANCÍA. Convenio de Ginebra de 19 de mayo de 1956. Interrupción y no suspensión de la prescripción por presentación de la demanda aun sin acto de conciliación previo.

Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil). SENTENCIA DE 10 DE JUNIO DE 1985. Ponente: D. Jaime Santos Briz.

D. Antonio A. S. presentó por medio de su representación procesal, ante el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Barcelona, demanda de juicio declarativo de mayor cuantía contra la entidad «Transportes José C. B., S. A.», sobre reclamación de cantidad, como indemnización por perjuicios sufridos a consecuencia de una avería parcial de un cargamento de fruta, transportado a Francia, ocasionada por defectuoso funcionamiento del sistema de refrigeración del camión.

La demanda se opuso y el Juzgado estimó íntegramente la demanda, sin declaración expresa sobre costas; resolución que, también sin imposición de costas, fue confirmada por la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, que conoció del recurso de apelación interpuesto por la sociedad interpelada.

La demanda formalizó recurso de casación por infracción de ley.

El T. S. declara no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley.

El T. S. declara no haber lugar al recurso y condena a la recurrente al pago de las costas en él ocasionadas y a la pérdida del depósito constituido.

CONSIDERANDO: Que lo actuado se deduce como acreditado en la instancia y a tener en cuenta en este recurso de casación, por no ser impugnados por el cauce adecuado los hechos probados, que la entidad demandada ahora recurrente efectuó en el mes de junio de mil novecientos setenta y ocho un transporte encargado por la actora y recurrida, a instancia de la cual se descubrió a la llegada de la mercancía el deterioro de la misma mediante informe técnico acerca de la causa de ello, lo que motivó una carta de reclamación ya en octubre de mil novecientos setenta y ocho, y más tarde otra el siete de marzo de mil novecientos setenta y nueve, ambas enviadas por correo certificado y finalmente también la presentación de la demanda ante la Junta de Detasas con fecha uno de junio de mil novecientos setenta y nueve, petición que después de sus trámites correspondientes terminó por informe plenamente favorable de la Junta de fecha veinticuatro de octubre de mil novecientos setenta y nueve, por último la demanda originadora de este proceso se presentó el trece de noviembre de mil novecientos setenta y nueve (considerando primero de la sentencia recurrida); consta también (considerando tercero de la misma) que el deterioro de la mercancía se debió a defecto del aparato frigorífico del camión que la transportaba, así como el importe de la avería parcial de los géneros, hechos que no se impugnan en este recurso.

CONSIDERANDO: Que los motivos primero y tercero, por conducto del número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegan ambos la infracción del párrafo segundo del artículo treinta y dos del Convenio de Ginebra de diecinueve de mayo de mil novecientos cincuenta y seis, ratificado por España en doce de febrero de mil novecientos setenta y cuatro y publicado en el B. O. del Estado el siete de mayo del mismo año, uno de dichos motivos acusa la infracción por interpretación errónea y el otro por violación; fundamenta el recurso de esta impugnación en que a la reclamación escrita interruptora de la prescripción no se acompañaron documentos, que habrían de ser devueltos según el precepto invocado como infringido al responder por escrito; integrando esta circunstancia según la recurrente la infracción acusada; interpretación que ha de rechazarse, toda vez que: a) la norma en cuestión no establece como preceptivo al hacer la reclamación escrita que se acompañen documentos, siendo esencial y verdadera «ratio Legis» la reclamación extrajudicial por escrito, y no que se adjunte a la misma documento alguno, aunque en caso de acompañarlos han de devolverse al contestar; b) del texto literal de la norma no se deduce en modo alguno que sea eficaz la reclamación escrita a la que no se acompañan documentos, la que en el caso debatido ha de surtir plenos efectos, puesto que consta probado de el deudor, actual recurrente, recibió una carta de reclamación en octubre de mil novecientos setenta y ocho y otra el siete de marzo de mil novecientos setenta y nueve, y además se hizo la misma reclamación ante la Junta de Detasas en uno de junio de mil novecientos setenta y nueve, a las cuales no ha contestado en ninguna forma; todo lo que, sin más aditamentos, conduce a la desestimación de estos motivos; así como el segundo, que con el mismo amparo procesal acusa la infracción por violación del artículo tercero del Código Civil, en cuanto manda que la interpretación de las leyes ha de atenderse en primer lugar a su tenor literal, ni el espíritu de la norma que interpretó (artículo treinta y dos, párrafo dos, del citado Convenio de Ginebra de diecinueve de mayo de mil novecientos cincuenta y seis).

CONSIDERANDO: Que nuestra legislación sustantiva civil, apartándose de las precedentes patrias, no recoge la suspensión de la prescripción y aunque no en el Código Civil, en otros Cuerpos legales quedan vestigios de esos antecedentes (por ejemplo en el Código Penal al regular la prescripción de los delitos, artículo ciento catorce, párrafo dos, a diferencia de la prescripción de las penas, y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, al regular la caducidad de la instancia, artículo cuatrocientos doce); en cambio, algunas legislaciones extranjeras sí regulan la suspensión de la prescripción (así los Códigos Civiles de Francia —artículos dos mil ochocientos cincuenta y uno a dos mil doscientos cincuenta y nueve—, Austria —parágrafos mil cuatrocientos noventa y cuatro a mil cuatrocientos noventa y seis—, Alemania —parágrafos doscientos dos a doscientos siete—, suizo de obligaciones (artículo ciento treinta y cuatro) e Italia (artículos dos mil novecientos cuarenta y uno y siguientes); sin embargo, en nuestro Código Civil se consideran casos de «interrupción» los que en esas legislaciones se reconocen como de «suspensión» de la prescripción; concepto que solamente se aplica en el ordenamiento español cuando la ley de forma expresa se refiera a ella mandando que el plazo «se reanude» y no que «comience a correr de nuevo»; y dentro de esta regla general de interrupción y no de suspensión se ha declarado por esta Sala —sentencia de veintiséis de abril de mil novecientos sesenta y nueve— que la demanda que reúna los requisitos legales del artículo quinientos veinticuatro de la Ley de Enjuiciamiento Civil una vez presentada interrumpe la descripción, aunque no se haya celebrado acto de conciliación previo, circunstancias que no invalida las actuaciones procesales iniciadas con la demanda; según este razonamiento, ha de ser desestimado también el motivo cuarto de este recurso que alega con el mismo apoyo procesal la infracción por violación del artículo treinta y dos número tercero del Convenio de Ginebra repetidamente aludido, norma que deja a salvo lo dispuesto en el párrafo anterior (número segundo) y que se limita a determinar que tanto para la suspensión de la prescripción como para su interrupción se seguirá la Ley del Territorio en que se tramite el proceso, por lo tanto, en el caso de la legislación española la exclusión de causas de suspensión; por lo que cabe afirmar que en todo caso y dada la normativa comentada, de conformidad con los objetivos perseguidos por el recurso, es evidente que no había prescrito la acción ejercitada en la demanda y que fue correcta su estimación en la sentencia recurrida, que confirmó el fallo dictado en el primer grado jurisdiccional.

CONSIDERANDO: Que la desestimación de todos los motivos de recurso da lugar a la de éste en su totalidad, con imposición de las costas a la recurrente y pérdida del depósito constituido para recurrir, al que se dará el destino legal (artículo mil setecientos cuarenta y ocho, anterior redacción aplicable, de la Ley de Enjuiciamiento civil.

(RJA. 1985. nº 3103, pag. 2653) Civil).

de 21 de septiembre de 1863. Ley de 30 de diciembre de 1969. Decreto de 2 de junio de 1968.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-Admº). SENTENCIA DE 10 DE JUNIO DE 1985. Ponente: D. José Pérez Fernández.

La Sala Tercera de Madrid, dictó sentencia en 6 de diciembre de 1982, estimando el recurso interpuesto por Dª Noemí Graciela R. G., contra resolución de la Delegación de Trabajo de 1 de febrero de 1980, por la que se denegó el permiso de trabajo. El fallo de dicha Sala declara el derecho de la actora a trabajar en España sin necesidad de permiso de trabajo alguno.

Interpuesto recurso de apelación por el Abogado del Estado, el T. S., lo desestima.

CONSIDERANDO: Que denegado permiso de trabajo por la Delegación de Trabajo de Madrid solicitado por la súbdita Argentina Noemí Graciela R. G. en resolución de 1º de febrero de 1980 fue revocada por sentencia de la Sala Tercera de la Audiencia Territorial de Madrid de 7 de diciembre de 1982 la que se recurre y la que habrá de ser ratificada por la de esta Sala, consecuentemente con lo que se tiene declarado en reiteradas sentencias a las que cumple señalar por hacer expresa referencia a súbditos argentinos, las de 16 de septiembre de 1982 y 17 del mismo mes y año declarando la primera de las citadas que «El Decreto de 27 de julio de 1968 excluye del régimen general que establece sobre autorizaciones a trabajo con España las situaciones basadas en Tratados o Convenios Internacionales suscritos por España, y a su vez el artículo 96 de la Constitución Española dispone que «los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno» mientras conserven su vigencia con arreglo a las normas previstas en los propios tratados o de acuerdo con las generales del Derecho Internacional; por lo que al no estar denunciado el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad celebrado entre España y Argentina de 1863 que dispone que los súbditos de una y otra nación pueden ejercer libremente un oficio o profesión en los mismos términos de la cláusula de Nación, más favorecida y habida cuenta que el Tratado de España con la República Federal de Alemania de 1910 establece que los nacionales de una de las partes podrán ejercer actividades económicas y profesionales en el Territorio de la Parte en las mismas condiciones que los nacionales asimismo la Ley de 30 de diciembre de 1969 sobre Relaciones Laborales de la Comunidad Iberoamericana-Filipina autoriza a los súbditos Iberoamericanos que trabajen o pretendan trabajar en territorio nacional por cuenta propia o ajena quedan exentos de proveerse del permiso de trabajo que con carácter general, se exige a todos los extranjeros, es claro que esta normativa como también las Ordenes que en virtud de específica habilitación fueran dictadas para el desarrollo y ejecución de lo acordado establecen una equiparación a efectos laborales entre españoles y argentinos que debe ser respetada puesto que, no quebrantan la jerarquía normativa del posterior Decreto de 2 de junio de 1978 que ni expresa ni tácitamente derogó esa anterior normativa».

EXTRANJEROS. Convalidación y reconocimiento. Odontólogo. Convenio Cultural hispano-argentino de 23 de marzo de 1971. Ley de febrero de 1974 sobre Colegios Profesionales.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-Admº). SENTENCIA DE 26 DE JUNIO DE 1985. Ponente: D. José L. Ruiz Sánchez.

La Sala de Valencia dictó sentencia en 2 de abril de 1985 en procedimiento seguido al amparo de la Ley 62/78, estimando el recurso interpuesto por D. Héctor M. B., contra resolución de 25 de octubre de 1984, del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la III Región, por la que se deniega la colegiación al recurrente en base al art. 14 de la Constitución. El fallo de dicha Sala anula la resolución impugnada declarando el derecho del recurrente a obtener la colegiación.

Interpuesto recurso de apelación por el Colegio Oficial de Odontólogos mencionado, el T. S. aceptando los considerandos de la sentencia apelada que a continuación se transcriben, lo desestima, con expresa imposición de costas en ambas instancias al haberse tramitado el recurso al amparo de la Ley 62/78.

Considerandos de la sentencia apelada:

«PRIMERO.- Que en el presente recurso contencioso-administrativo de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales se impugna la resolución de veinticinco de Febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Tercera Región que deniega la colegiación a Don Héctor M. B.;

SEGUNDO.- Que la parte hoy actora en aplicación del Convenio Cultural suscrito entre España y Argentina, el veintitrés de Marzo de mil novecientos setenta y uno ha obtenido la habilitación para el ejercicio del a profesión en España a que capacita el título español de odontólogo por resolución del Ministerio de Educación y Ciencia de veintiocho de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro, y que no ha sido alegada por el Colegio Oficial demandado, ninguna de las causas establecidas en el artº 48 del Estatuto del Consejo General de los Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos para negar la colegiación;

TERCERO.- Que el artº 3 de la Ley de Colegios profesionales de trece de Febrero de mil novecientos setenta y cuatro, establece que quien ostente la titulación requerida y reúna las condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el colegio profesional que corresponda y que reuniendo ambos requisitos el Sr. M. B. no puede estimarse válida la vulneración del artº 14 de la Constitución como fundamento de la negativa de colegiación;

CUARTO.- Que la convalidación del título de Odontólogo obtenido en la República de Argentina está regulada por el Decreto 1676/1969, por la Orden de veinticinco de Agosto de mil novecientos sesenta y

nueve, y por el convenio cultural entre España y Argentina suscrito el veintitrés de Marzo de mil novecientos setenta y uno y ratificado el veintisiete de febrero de mil novecientos setenta y tres y que se ha reconocido individualmente a favor del actor por la Resolución del Ministerio de Educación y Ciencia de veintiocho de Septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro y que dicha resolución es inmediatamente ejecutiva en virtud del 33 de la Ley del Régimen Jurídico de la Administración del Estado,

QUINTO.- Que dicha resolución produce desde su notificación todos sus efectos pese a los posibles recursos administrativos que se puedan interponer contra la misma por no haber sido suspendidas en vía administrativa y que por lo tanto resulta de obligado cumplimiento por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto y anular la resolución del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Tercera Región».

(RJA. 1985. nº 3883, pag. 3250)

16

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Declaración Universal de Derechos Humanos. Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Arts. 24,10.2 y 96 de la Constitución.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-Admº). SENTENCIA DE 27 DE JUNIO DE 1985. Ponente: José L. Martín Herrero.

La Audiencia Nacional dictó sentencia en 15 de julio de 1983, rechazando las causas de inadmisibilidad alegadas por el Abogado del Estado y estimando el recurso deducido por D. José Luis y D. Jesús A. Ch., contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de Contrabando de 10 de abril de 1981, confirmatoria en apelación de acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Provincial de Madrid. El fallo de dicha Sala declara que ambas resoluciones no son conformes a derecho y en consecuencia las anula.

Interpuesto recurso de apelación por el Abogado del Estado, el T. S., confirmando la sentencia apelada, lo desestima.

CONSIDERANDO que para la resolución del presente recurso hay que partir, como premisa previa, que el artículo 24 de la Constitución en el párrafo final del apartado 2, establece como uno de los derechos Fundamentales de la Persona el de la presunción de inocencia, presunción que no es sino una consecuencia de lo que establecen el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de Diciembre de 1.948, la cual proclama, de forma aún más determinante que «toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, declaración con la que coincide el artículo 6 apartado 2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviem-

bre de 1.977 y posteriormente, el artículo 14-2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de Diciembre de 1.966, ratificado por España el 13 de Abril de 1.977, que literalmente proclama que «toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley», normas todas ellas que deben de ser aplicadas en su integridad, ya que el artículo 10 de la Constitución expresamente dice que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, todo lo cual se complementa con el artículo 96 de la propia Constitución, según el cual los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones solamente podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas del Derecho Internacional.

CONSIDERANDO que por lo tanto, habiendo sido acusados los dos condenados, de la comisión de una infracción de contrabando de mayor cuantía, la única cuestión que se plantea en este recurso es si, frente a la presunción de inocencia que la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales establecen, existen pruebas suficientes que destruyan esa presunción; no nos hallamos, por lo tanto, en el campo de la aplicación del principio «in dubio pro reo», sino en el de la destrucción de una presunción de inocencia, frente a la cual solamente han de prevalecer las pruebas que demuestren la culpabilidad de los imputados, ya que nos hallamos ante una presunción iuris tantum, que por lo tanto puede ser destruida, pero mediante una actividad probatoria, por lo que cuando ésta no exista o sea insuficiente, debe de prevalecer la presunción de inocencia, que no fue destruida.

CONSIDERANDO que en el caso contemplado en este recurso, no existe, a lo largo de las actuaciones administrativas, ninguna actividad probatoria, habiéndose dictado la Sentencia condenatoria con base en las actuaciones practicadas por el servicio de vigilancia Fiscal y por la mera circunstancia de haber sido los dos condenados, propietarios del coche en una de las ocho transmisiones de las que éste fue objeto, se les considera autores del delito de contrabando, presumiendo así que fueron ellos los que procedieron a falsificar los números del motor y del bastidor, y acudiendo, como se dice, a unas presunciones humanas, para destruir una presunción constitucional, lo que pugna con el principio de presunción de inocencia, frente al cual ya había declarado el Tribunal Supremo, incluso con anterioridad a la Constitución, que no podía prevalecer la prueba de presunciones —Sentencias de 21 de Marzo de 1.962 y 27 de Septiembre de 1.968, entre otras—, ya que si bien la apreciación de la prueba ha de ser apreciada en conciencia por el Tribunal, según el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ello será solamente cuando pueda valorarse la prueba practicada, pero no en los casos de ausencia de ella, como ocurre en el caso que se examina, en el cual la condena viene determinada por el hecho de que los condenados fueron propietarios del vehículo durante un período de tiempo de unos 26 meses; pero esa condena no tiene en cuenta las siguientes circunstancias: a) que el vehículo fue adquirido en subasta pública por D. Jesús G.

M. el 1 de Marzo de 1.974; b) que es dicho señor el que lo vende en el mes de Marzo de 1.975 a uno de los condenados D. José Luis A.; c) que éste lo regala a su hermano D. Jesús Antonio A., como regalo de boda, al contraer este último matrimonio en el mes de Junio del año 1.975; d) que este segundo hermano conserva en su poder el vehículo unos 16 meses y lo vende a D. Serafín F. M. —si bien parece haber sido también vendido a D. Mario S.—; e) que el Sr. F. M. tiene en su poder el vehículo unos 6 meses y lo vende el 26 de Marzo de 1.977 a D. Fernando Luis G. M., quien lo conserva en su poder unos 10 meses; f) que dicho señor vendió a su vez el vehículo el 10 de Septiembre de 1.977 a D. Antonio C. F.; g) que el Sr. C. vendió a su vez el vehículo el 21 de Septiembre de 1.977 a D. Angel P. V.; h) que el Sr. P. V. finalmente vendió el vehículo el 31 de diciembre de 1.977 a D. Mario S. M.; i) que, según manifiesta en el Resultando de hechos probados la Sentencia del Tribunal Provincial de Contrabando, en ninguno de los contratos privados de estas sucesivas transmisiones, se hizo constar el número del bastidor y del motor del vehículo; j) que de los mencionados adquirentes del vehículo, tienen taller de reparación de automóviles D. José Luis A. Ch. —uno de los condenados— D. Serafín F. M., D. Fernando Luis G. M. y D. Angel P. V.

CONSIDERANDO que la falta absoluta de toda actividad probatoria, las sucesivas transmisiones del vehículo, hasta un total de ocho, y las circunstancias de ser mecánicos, tener talleres de reparación de automóviles o garage cuatro de los ocho sucesivos propietarios del vehículo, e ignorándose si el último lo es, al no haber sido oído, impide elegir, de entre los ocho propietarios, a uno o dos de ellos, para atribuirles una culpabilidad, que pudiera ser cierta, pero que también pudiera corresponder a alguno de los seis restantes, en muchos de los cuales concurren las mismas circunstancias, y a los que también, y con la misma base, podría presumirse actores de las sustituciones de numeración realizadas en el vehículo; y como el Tribunal Sentenciador, con base únicamente en presunciones, ignoró la presunción de inocencia de los condenados, que no fue combatida mediante prueba alguna, es evidente que la Sentencia que anuló esa condena se limitó a restablecer el ordenamiento jurídico que había infringido los Acuerdos de la Jurisdicción de Contrabando, por lo que debe de ser confirmada, lo que produce como consecuencia la desestimación del recurso de apelación interpuesto contra ella.

(RJA. 1985, n° 3908, pag. 3281)

17

EXTRADICIÓN. Fase administrativa del procedimiento de extradición y protección de derechos fundamentales y libertades públicas.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-Admº). SENTENCIA DE 27 DE JUNIO DE 1985. Ponente: D. Fernando Roldán Martínez.

Es recurso interpuesto por D. Gilberto R. O., contra acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de enero de 1985, sobre continuación del procedimiento de extradición del recurrente.

El T. S. lo desestima, con imposición de costas al haberse deducido el recurso al amparo de la Ley 62/78.

CONSIDERANDO: Que el acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de Enero de 1.985, objeto del presente recurso jurisdiccional de Protección de los Derechos Fundamentales de la Persona, ordenando que el procedimiento de extradición que se tramitaba contra el súbdito colombiano D. Gilberto R. O., pasase de su fase administrativa a la fase judicial, conforme al procedimiento establecido en la Ley de 26 de Diciembre de 1.958 entonces vigente, aun no siendo un acto administrativo definitivo, sino de trámite, pues la Ley 62/78 ha creado este procedimiento sumario y urgente para proteger los Derechos Fundamentales contra toda clase de actos de la Administración Pública sujetos a Derecho Administrativo, no sólo los actos administrativos estricto sensu, los definitivos, sino también los actos de trámite que, algunos aún infringen más gravemente, determinados derechos fundamentales de la Persona, lo que la Ley 62/78 pretendió fue obtener una protección inmediata de esos derechos constitucionales que, en ocasiones pueden resultar más perjudicados incluso por un acto de trámite, una medida provisional, que por un acto definitivo, sufriendo el inculpado unas consecuencias más gravosas con la medida precautoria que a esperar a que la Administración los resuelva definitivamente con el acto o resolución final, de ahí que en la tramitación de los expedientes de extradición la Ley señale plazos cortos para su instrucción y se exija con el mayor escrúpulo y esmero que tanto en la primera fase administrativa como en la posterior fase judicial se cumplan los plazos y todas las condiciones para que el Gobierno acuerde haber lugar a continuar para que el Gobierno acuerda haber lugar a continuar el procedimiento por la vía judicial penal plazo fijado de 15 días contados desde el siguiente a la fecha de recepción de la propuesta motivada, que el Ministerio de Justicia elevará al Gobierno, computados en la forma que señala el artículo 12 de la Ley, recepción de la solicitud y de los justificantes por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado requirente, de no formularse la extradición por la vía diplomática, de suerte que el expediente de extradición es de carácter mixto, una primera fase gubernativa y otra segunda de procedimiento judicial penal, necesaria para salvaguardar las garantías jurídicas del reclamado así como los intereses del Estado reclamante, habiendo sido en el presente caso en aplicación del Decreto-Ley 1/1.977 de 4 de Enero, que creó la Audiencia Nacional, el Juzgado Central número Dos el componente para la tramitación del expediente de extradición en esa segunda fase judicial, correspondiendo, por tanto, a dicha Audiencia y Sala de lo Penal, ante la oposición del reclamado al Estado requirente, previa la vista que se celebrará con asistencia del Fiscal, del interesado y del Defensor, siendo en ese acto, en el que se podrán tener presentes todos los antecedentes, dictámenes y pruebas que se hayan aportado hasta ese momento posteriores al acuerdo del Gobierno ordenando dar por finalizada la etapa gubernativa para iniciarse la etapa judicial, por lo que para el enjuiciamiento de la decisión del Consejo de Ministros de continuar el procedimiento judicial y definir si con tal decisión se infringió alguno de los derechos constitucionales protegidos por la Ley 62 de 1.978, que es la única cuestión objeto del presente debate, hay que estar a la situación realmente existente en el momento en que se produjo tal acuerdo de Gobierno.

CONSIDERANDO: Que de los antecedentes y documentos incorporados a los autos y al expediente de su razón conviene consignar como hechos destacados los siguientes: 1º Que, el acuerdo del Consejo de Ministros acordando la continuación del procedimiento de extradición fue adoptado en la reunión del día 9 de Enero de 1.985. 2º Que, la solicitud de extradición se ha formulado por vía diplomática en Nota verbal de la Representación Diplomática de los Estados Unidos de América del Norte número 1250 de conformidad a lo establecido en el Tratado de Extradición entre España y dicho Estado requirente de 29 de Mayo de 1.970. Nota remitida por medio del Ministro de Asuntos Exteriores español con fecha 17 de Octubre de 1.984 y que el artículo 11-A del Tratado de Extradición prevé la posibilidad de solicitar la detención provisional, en casos de urgencia, antes de presentar la solicitud formal de extradición que fue éste el sistema adoptado por el Estado requirente. 3º Que, por la Dirección General de Asuntos Consulares se gestionó directamente de la Dirección General de la Seguridad del Estado, Servicio de Interpol de Madrid, la detención del súbdito extradicto señor R. O., posibilidad legal admitida por la normativa vigente por lo que todo lo referente a la detención gubernativa queda ajeno a los acuerdos adoptados en las propuestas del Ministerio de Justicia y del Consejo de Ministros sin que por esto deje de constituir un requisito indispensable para que pueda producirse la extradición por la jurisdicción penal, que es cuando se resuelve el expediente y para acceder a la extradición precisa del aseguramiento de la persona a entregar. 4º Que la Ley de Extradición no exige que la audiencia del interesado tenga lugar en un momento determinado del expediente, por lo que es válido en cualquier momento que se realice sea en la fase gubernativa o en la judicial, pues lo único que el artículo 91 prohíbe es la actuación mutu propio de la Administración, que en esta clase de expedientes por su naturaleza mixta no puede producirse y, en este caso, no se vislumbra la indefensión aducida, dado que el interesado conoció el motivo del acto, ejercitó los recursos que creyó pertinentes a su derecho ni se mermó su legítimo derecho de defensa, no existiendo en definitiva, la supuesta indefensión alegada.

CONSIDERANDO: Que por parte del Ministerio de Justicia y del Consejo de Ministros se han cumplido, por tanto, las formalidades y plazos de la legislación prevé, pues al día siguiente del acuerdo recurrido, el Consejo de Ministros remitió a la Audiencia Nacional el expediente de Extradición, cumpliendo así con la obligación que el Estado Español tiene adquirida por los Tratados de Extradición y por la Ley, de conceder la extradición y entregarse recíprocamente las partes signatarias a las personas a quienes las autoridades judiciales de la parte requirente persiguiesen por algún delito o buscaren para la ejecución de una pena o medida de seguridad, según las reglas y en las condiciones establecidas en dichos Tratados vigentes o Ley de Extradición.

CONSIDERANDO: Que el artículo 10 de la Ley de Extradición exige que a la solicitud de extradición se acompañe la sentencia condenatoria o el auto de procesamiento de prisión, o resolución análoga, según la legislación del país recurrente, en documentos originales o en copia auténtica, con relación a los hechos imputados a la persona reclamada con cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, lugar y fecha y copia de los textos legales aplicables y pena máxima y mínima que

podiera corresponderle, y, el recurrente basa fundamentalmente su pretensión de nulidad del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros acordando la continuación del procedimiento de extradición a la fase penal, en que los hechos contenidos en la documentación aportada por el Estado requirente, que constituyen, según dicha parte expresamente reconoce, la causa habilitante, legitimadora y fundamental de la extradición, interesada en vez de ser anteriores en el tiempo y antecedente inmediato de la solicitud de extradición, presupuesto de admisibilidad de la petición, en el caso de autos, a juicio del recurrente, ni el Ministerio de Justicia, ni el Consejo de Ministros advirtieron que la documentación presentada no cumplía tal requisito esencial de haber sido encausada o condenada la persona reclamada por hechos anteriores a la solicitud invirtiéndose de tal modo los términos, que primero se plantea por el Estado requirente la captura del reclamado y posteriormente al inicio de la extradición se le encausa como resulta de no haberse producido hasta el día 7 de Diciembre de 1.984 el Auto de Procesamiento del Tribunal de Nueva York, y la Nota verbal de la Embajada fue presentada el 17 de Octubre anterior a efectos y fines de la extradición, de cuyo examen comparativo de fechas, deduce el recurrente que cuando la Embajada interesó la detención, no existía aún en ningún Tribunal Norteamericano inculpación alguna contra el recurrente, por lo que alegando que se trata de un hábil enmascaramiento de la realidad y tratarse en realidad de una extradición formulada sin previa inculpación ni imputación delictiva contra el señor R. O. por Tribunal del Estado requirente, termina solicitando que se anule el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros y se declare inválida e ineficaz la continuación del expediente acordada por el Consejo de Ministros; pero, del examen de la documentación incorporada al expediente gubernativo de extradición del súbdito colombiano Gilberto R. O. para surtir efecto en el presente recurso contencioso-administrativo, resulta que en la fecha en que se produjo el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado el 9 de enero de 1.985, aún se mantenía vigente el procedimiento del Tribunal de Nueva York, contra Gilberto R. O. dictado en fecha 26 de Noviembre de 1.984 basado en una acusación de Gran Jurado imputándole los cargos de importar y distribuir cocaína y dirigir una empresa dedicada al tráfico de estupefacientes en asociación de otras cuatro o cinco personas más, respecto de las cuales el recurrente ocupaba un cargo de organizador, supervisor y director por cuyo cargo obtenía cuantiosos ingresos por lo que se había dado la orden de arresto en fecha 7 de Diciembre de 1.984, es decir, antes de la fecha en que se produjo el acuerdo aquí impugnado, actividades delictivas a las que venía dedicándose en asociación criminal, según reza el acta de acusación en el cargo n° 2, desde Septiembre de 1.978 hasta el 15 de Noviembre de 1.984 en el Distrito Oriental de Nueva York e importaron a los Estados Unidos desde Colombia cantidades superiores a un kilogramo de clorhidrato de cocaína pura, de lo que aparece manifiesto que cuando se presentó la Nota verbal de solicitud de extradición en 21 de Diciembre de 1.984 y cuando el 9 de Enero de 1.985 el Consejo de Ministros acordó que el procedimiento pasase a la fase judicial aún se mantenía la acusación del Gran Jurado y la Orden de arresto del Tribunal del Distrito Oriental de Nueva York contra el recurrente, lo que desvanece la alegación o imputación de que se trata de un hábil montaje de la Policía Neoyorkina para obtener la detención del inculpado con urgencia antes de que

existiera inculpación, ya que los cargos del Gran Jurado de Nueva York y del Tribunal del Distrito Oriental de dicha ciudad, con toda claridad precisan que desde Septiembre de 1.978 hasta aproximadamente el 15 de Noviembre de 1984 el inculpado y otros venían realizando una serie continua de infracciones con la aportación y comercio clandestino de cocaína, por lo que tras una computación de las fechas de solicitud de extradición y acuerdo de la resolución del Consejo de Ministros objeto de impugnación en este recurso es obligado reconocer que en el acto impugnado ha cumplido las formalidades y plazos que la normativa prevé para esta clase de expedientes y cumplimiento de la obligación adquirida por el Estado requerido por el Tratado suscrito sobre extradición con Estados Unidos.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el ámbito asignado por la propia Ley 62/78 al procedimiento sumario y urgente por ella establecido en aplicación del artículo 53-2 de la Constitución Española y en la Disposición Transitoria 2ª de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional el procedimiento judicial sumario establecido en la citada Ley 62/78, se extiende a la protección de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 de la Constitución Española, por lo que el artículo 13, que es el que establece la extensión y límites de la extradición pasiva, queda fuera del ámbito del procedimiento especial de la Ley 62/78 en cuanto no implique el enjuiciamiento de un acto o acuerdo de la Administración que, dentro de la tramitación de un expediente de extradición, no suponga la infracción de un derecho constitucionalmente protegido, por lo que de los temas, distintos al de la extradición, que fueron tratados por el demandante, como son los referentes al del control de las detenciones por el Ministerio de la Gobernación y aplicación improcedente de la Ley antiterrorista al recurrente, es un tema de naturaleza penal cuyo enjuiciamiento escapa de la esfera contencioso-administrativa, ajena al presente recurso, y, es evidente que el acuerdo del Consejo de Ministros recurrido no ha violado ni la presunción de inocencia, ni la aplicación arbitraria al recurrente de la Ley antiterrorista, como tampoco el acuerdo impugnado violó los artículos 17 y 24 de la Constitución, pues, es incuestionable que dicho acuerdo no tuvo más finalidad que la de posibilitar que en la segunda fase del expediente de extradición, la fase judicial, se pueda resolver por la jurisdicción penal si procede o no la extradición solicitada por el Gobierno de un tercer país por delitos de supuesto tráfico de cocaína cometidos dentro del territorio del Estado requirente por el súbdito colombiano recurrente, el acuerdo impugnado es un simple acto de auxilio y colaboración internacional para la persecución de determinados delitos.

CONSIDERANDO: Que por disposición legal del artículo 10-3 de la Ley 62/78, las costas deben ser impuestas a la parte recurrente.

(*RJA*, 1985, nº 3909, pag. 3282)

TÍTULOS EXTRANJEROS. Reconocimiento. Odontólogo. Convenio Cultural Hispano-argentino de 23 de marzo de 1971.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-Admº). SENTENCIA DE 29 DE JUNIO DE 1985. Ponente: D. José Garralda Valcárcer.

La Sección Segunda de la Audiencia Nacional dictó sentencia en 28 de julio de 1982 estimando el recurso interpuesto por D^a Francisca C. Ll. contra resolución del Ministerio de Universidades e Investigación de 10 de enero de 1980 por el que se desestima la reposición deducida contra Orden de 15 de diciembre de 1978 en virtud de la cual se le deniega la convalidación del título de Odontólogo obtenido en la Universidad de Buenos Aires por su equivalente español. El fallo de dicha Sala declara la nulidad de los actos impugnados y señala el derecho que ostenta la recurrente a que se convalide en España su título de Odontólogo.

Interpuesto recurso de apelación por el Abogado del Estado, el T. S. lo desestima.

CONSIDERANDO que se exponen en la Sentencia que se revisa, profusas y atinadas razones determinantes del Fallo dictado, estimativo de las peticiones del recurrente y entre las que destaca como argumento básico, el de que el Convenio de Cooperación Cultural concertado con la República Argentina de vintitrés de Marzo de mil novecientos setenta y uno, ratificado en diecisiete de Noviembre de mil novecientos setenta y dos publicado en el Boletín Oficial del Estado de tres de Abril de mil novecientos setenta y tres y que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico conforme a lo dispuesto en el art. 1º del Código Civil, establece el reconocimiento mutuo de los títulos académicos de todo orden y grado tal como los otorga o reconoce el otro país oficialmente y por tanto lo que se hace es extender a cada territorio nacional de las partes contratantes, la validez de los títulos académicos de la otra nación, sin ninguna clase de condicionamientos, requisitos o limitaciones, pues como ya se expuso en Sentencias de esta Sala de treinta de Junio y veintisiete de Octubre de mil novecientos ochenta y dos (R. 3670 y 5812), veinticuatro de Enero y diez de Marzo de mil novecientos ochenta y tres (R. 5556 y 5558) y tres de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro (R. 6306) en casos iguales, «si se hubiera querido que los títulos expedidos por una nación, para que valieran en la otra contratante, deberían ajustarse en cuanto a su obtención, a los requisitos y misma temática de sus homónimos en la otra, así se hubiera expresado gráficamente, no pudiendo olvidarse que admitir que el aludido Convenio impone esta exigencia, implicaría el dejar un vacío de contenido a la citada estipulación, que tiene fuerza de Ley en España a través del mecanismo de la ratificación antes aludida y, a mayor abundamiento, tampoco se puede olvidar el Reglamento de Odontólogos y Estomatólogos de España de trece de Noviembre de mil novecientos cincuenta, con arreglo al cual, además de recoger en su seno a los Odontólogos, concretamente en su art. 39 prescribe que pertenecerán obligatoriamente a él todos los Estomatólogos y Odontólogos españoles habilitados para ejercer la Estomatología y Odontología en territorio nacional, con lo que se razona que se está interpretando el título de Odontología y la habilitación para ejercer tal profesión en territorio nacional».

CONSIDERANDO que por todo ello procede desestimar el recurso de apelación y confirmar la Sentencia apelada, sin que a efectos de costas sea de apreciar la concurrencia de circunstancias determinantes de su imposición.

(RJA, 1985, nº 3292, pag. 2828)

EXTRANJEROS. ARRENDAMIENTOS URBANOS. Aplicación de los beneficios de la legislación. Reciprocidad.

Tribunal Supremo (Sala 1ª de lo Civil). SENTENCIA DE 11 DE JULIO DE 1985. Ponente: D. José Beltrán de Heredia y Castaño.

D. Peter W. Q. presentó, ante el Juzgado de Primera Instancia de Villajoyosa, demanda de juicio declarativo de mayor cuantía contra D. Ahmed T., sobre declaración de derechos y reclamación de la renta de un año y diferencias de renta de otros.

El demandado se opuso y el Juzgado, estimando en parte la demanda, declaró que el interpelado adeudaba al actor la cantidad de 125.000 pts. correspondientes a la renta de 1976, y le absolvió el resto de las pretensiones contra él deducidas, declarando que la renta a pagar por el arrendamiento del local es la de 125.000 pts. anuales, y que el contrato cuestionado está sometido y regulado por la Ley de Arrendamientos Urbanos; todo ello sin expresa imposición de costas; resolución que, también sin imposición de costas, fue confirmada por la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Valencia, que conoció del recurso de apelación interpuesto por el actor.

El demandante formalizó recurso de casación por infracción de ley.

El T. S. declara no haber lugar al recurso.

CONSIDERANDO: Que el origen de todo lo actuado, es un contrato, celebrado el 5 de diciembre de 1967, por el que el actual recurrente, en su condición de propietario, cedió en arrendamiento el local comercial número diez, de la planta baja del edificio «Ronda», sito en la Avenida Martínez Alejos siete, de la localidad de Benidorm; por término de diez años a partir del primero de enero de 1968 (pacto 2º) y precio anual de noventa y nueve mil pesetas el primer año, que en los sucesivos pasaría a ser de 180.000 también anuales, a pagar por años vencidos, en el local objeto del arrendamiento (pacto 3º); constando en autos que la primera anualidad fue satisfecha según lo pactado, momento en que se comenzó a pagar y continuó pagándose la cantidad de 125.000 pesetas que era la cifra que aparecía en los recibos pasados al cobro, hasta que surgieron las desavenencias entre las partes, motivando un juicio de desahucio, en 1976, ante el Juzgado comarcal, cuya resolución fue confirmada, al apelar ante el de primera instancia, en el sentido de ser inadecuado el procedimiento seguido para dilucidar la cuantía de la renta, que sólo podría decidirse por el cauce del declarativo ordinario; que fue el iniciado por el propietario-arrendador con la demanda de 21 de marzo de 1977 —del que trae causa el recurso que se examina— cuyos pedimentos se concretaban en dos puntos, referente el primero a la cuantía de la renta, que tendría que ser la figurada en el contrato, con la consiguiente entrega de las diferencias resultantes durante el tiempo transcurrido o alternativamente, si se estimase que hubo novación en este particular, que se pagase la cantidad correspondiente al año 1976; y relativo, el segundo, al tiempo o término del contrato, concertado por diez años según se dijo (que expiraba el 31 de diciembre de 1977) no susceptible de prórroga legal dada la nacionalidad del arrendatario, súbdito de un

país (Marruecos) donde no existe reciprocidad en esta materia; pretensión que fue acogida, sólo en parte, por las dos Sentencias de instancia, contextes en estimar la segunda alternativa del primer pedimento, rechazando el resto de lo solicitado.

CONSIDERANDO: Que a la primera de las cuestiones indicadas, es decir la relativa a la determinación de la renta, se dedican los dos primeros motivos, formulados por el cauce del número uno del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento, denunciando respectivamente aplicación indebida del 1253 y violación del 1204 ambos del Código Civil, primero de los cuales fue renunciado en el acto de la vista; ninguno de los cuales es susceptible de ser acogido, ante todo porque, como se ha dicho, lo decidido sobre este punto está de acuerdo con la segunda de las alternativas de la primera petición actora, que lo admitía «si se señala que hubo novación de la renta y se declara que la misma, es de 125.000 pesetas», que es justo lo que se hace, señalar que hubo novación; señalamiento que no es meramente presuntivo, pero que en todo caso se apoya en hechos probados —y no discutidos como tales en casación— como son el que en los recibos pagados a lo largo de ocho años, figuraba la cantidad de ciento veinticinco mil pesetas, sin objeción del arrendador, que no logró evidenciar que lo aceptase como parte de la renta, quedando en deber el resto, lo que lógica y jurídicamente no puede explicarse sino con la realidad de un acuerdo —sin duda verbal, ante la falta de constancia escrita— en el sentido de reducir la cantidad que implica una modificación de la convenida en el contrato de 1967; permitida por el número primero del artículo 1203 del Código, al establecer que las obligaciones podrán modificarse «variando su objeto o sus condiciones principales», sin que implique la consecuencia extintiva, típica de la novación estricta del artículo 1204, ni la exigencia de los requisitos que éste determina, justo porque no se trató de extinguir, sino simplemente de modificar uno de los elementos objetivos del contrato en cuestión; todo ello, de acuerdo con la uniforme y reiterada doctrina legal, cuya reiteración y uniformidad, exonera de la cita particularizada de las Sentencias en que se contiene.

CONSIDERANDO: Que la segunda cuestión de las antes enunciadas, referente a la prórroga forzosa del contrato, constituye el objeto del motivo tercero, que se formula a través del número siete del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento, donde se alega error de hecho en la apreciación de la prueba, que se dice resultar de documentos auténticos; alegato improsperable porque lejos de tratar de evidenciar el pretendido error con algún documento auténtico, como ordena el precepto, lo que hace es sostener que todos los documentos en que se apoya el Juzgador, carecen de valor, sin que puedan ser avalados por el dictamen presentado por el en su diádemando —ahora recurrido— que se afirma carece de autenticidad, «la cual entraña una verdadera responsabilidad en la persona u órgano que lo autoriza», ni tampoco por la documentación constante en autos, aportada como diligencia para mejor proveer ordenada por el Juzgado. Por otra parte y con independencia del efecto señalado, es de tener en cuenta que lo discutido fue la aplicación del beneficio de la prórroga forzosa del artículo 57 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en un contrato en el que el arrendatario es extranjero, para lo que no es suficiente la normativa genérica del artículo 27 del Código Civil que atribuye a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los españoles, porque añade «salvo lo dispuesto en las leyes espe-

ciales», como en este caso es la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuyo artículo siete concede a los extranjeros los beneficios en ella establecidos, «siempre que prueban la existencia del principio de reciprocidad en los países respectivos», que en el supuesto examinado, es Marruecos; reciprocidad, que puede ser diplomática (si existe Tratado, Convenio o simple Canje de notas) o legislativa si legalmente se establece la igualdad, sin discriminación, entre nacionales y extranjeros, bien en leyes de carácter general —al no existir legislación especial de arrendamiento inmobiliario— o bien en la ley especial caso de existir; pero siempre, sin necesidad de que comprenda la hipótesis concreta, que aquí sería el beneficio de la prórroga cuestionada, como proclamó la doctrina legal reiterada, recogida, entre otras en las Sentencias de 20 de Junio de 1959, 6 de diciembre de 1961, 31 de octubre de 1963, 4 de mayo de 1964, 28 de octubre de 1968, 29 de enero de 1969, y 22 de diciembre de 1979. Cuya prueba, corresponde al arrendatario que alega la reciprocidad, para lo que es válido cualquier medio admisible en Derecho, entre los que se han utilizado a veces el de la Certificación del Embajador o Cónsul españoles en el país de que se trate (a los que se refieren las Sentencias de 31 de octubre de 1963 y 28 de octubre de 1968) destacando entre todos ellos, como más adecuado, el del Dictámen de dos jurisconsultos del país respectivo, legalizado por el representante consular español (Sentencias de 19 de noviembre de 1904, 19 de diciembre de 1935 y 28 de octubre de 1968, entre otras), que fue el utilizado en el presente caso, completado con la detallada documentación aportada como resultado de la diligencia para mejor proveer, acreditativa, sin duda, de la existencia de la requerida reciprocidad, en la segunda modalidad de su forma legislativa.

CONSIDERANDO: Que la desestimación de los tres motivos formulados, en la forma que se acaba de exponer, supone la del recurso en su totalidad, con los consiguientes pronunciamientos del artículo 1748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativos a las costas causadas en este trámite y la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legal.

(RJA, 1985, nº 3970, pag. 3343)

20

PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS. Convenio de la Unión de París, para la Protección de la Propiedad Industrial.

Tribunal Supremo (Sala 3ª de lo Contencioso-Admº). SENTENCIA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1985. Ponente: D. Julio Fernández Santa-maría.

Es recurso de apelación interpuesto por A. G., contra sentencia dictada por la Sala de Madrid en 7 de diciembre de 1982, sobre marca.

El T. S. lo desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: que procede rechazar las alegaciones de la parte apelante y aceptar los considerandos de la sentencia de primera instancia por las siguientes razones: a) entre la marca número 777.169, denominada «INTEGROL», y la marca internacional 220.199 denominada «INTENSOL», ambas amparadoras de productos de la clase 5ª del Nomenclátor, existe diferencia en las letras terminales GROL y NSOL que son suficientes para que, en comparación global o de conjunto, no se produzca el riesgo de confusión, adquiriendo una estructura silábica con un potencial individualizador bastante, tanto en la visión como en la audición, que permite la convivencia pacífica de las marcas confrontadas, y que, por tanto, quedan fuera de la prohibición contenida en el artículo 124-1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; b) el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial no ha sido infringido ni desconocido, pues de lo expresado anteriormente se deduce que entre las marcas confrontadas no existe reproducción o imitación susceptible de crear confusión; y a falta de este requisito no puede entrar en juego los preceptos de aquel Convenio; c) tampoco se infringe la doctrina y criterio de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues la conclusión sentada en los apartados anteriores coincide con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues la conclusión sentada en los apartados anteriores coincide con la doctrina de esta Sala mantenida, entre las más recientes, en sentencias de 5 de noviembre de 1982 (R. 6968), 4 de febrero de 1983, 5 de febrero, 16 y 28 de marzo de 1985; d) el alegado error trascendente de la sentencia apelada refiriéndose a la denominación de una marca no registrada, consiste en un mero error mecanográfico de figurar «INTEGRAL» en lugar de «INTEGROL», sustituyendo la A por la O, sin más repercusión o importancia.

(RJA, 1985, nº 4251, pag. 3584)

21

EXTRANJEROS. TÍTULOS ACADÉMICOS. Convalidación y reconocimiento. Odontólogo. Convenio Cultural hispano-argentino de 23 de marzo de 1971.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-Admº). SENTENCIA DE 7 DE OCTUBRE DE 1985. Ponente: D. José Mª Ruiz-Jarabo Ferrán.

La Sala de Valencia dictó sentencia en 4 de junio de 1985 en recurso deducido al amparo de la Ley 62/78 estimando el interpuesto por D. Jorge Octavio C. M., contra resolución del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la III Región de 7 de diciembre de 1984, que le denegó la colegiación como tal odontólogo, fundamentando su petición en base al art. 14 de la Constitución Española. El fallo de dicha Sala declara el derecho del recurrente a obtener su colegiación.

Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal del Colegio Oficial mencionado, el T. S. lo desestima con imposición de costas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que esta Sala, en reiterados pronunciamientos —sentencias de 30 de Junio y 27 de Octubre de 1.982 y 31 de Octubre de 1.983—, ha venido estableciendo, en relación con el título de Odontólogo detenido por diferentes súbditos argentinos, y obtenido en la Universidad de Argentina, la obligación de concederles a aquéllos la convalidación de su título en nuestra nación, por aplicación de lo dispuesto en el Convenio Cultural España-Argentina, de 23 de Marzo de 1.971, ratificado en 1.972 —Boletín Oficial del Estado de 3 de Abril de 1.973—, convalidación que debe operar en el ejercicio profesional, colegiación, pago de impuestos, etc., todo ello por estimarse que, aunque desde el año 1.948 dejó de otorgarse en España el título de Odontólogo, exigiéndose el de Médico-Estomatólogo, para el que se exigía la licenciatura en Medicina, lo que no ocurría con el anterior título, al existir todavía en España Odontólogos en ejercicio profesional, es manifiesto que continúa siendo el título de Odontólogo oficialmente reconocido en nuestro país, titulación que, a mayor abundamiento, y según el propio Colegio Oficial ahora apelante reconoce en su escrito de demanda, cobrará nueva virtualidad desde el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, al ser necesario el establecimiento nuevamente de una carrera de Odontología, con la Licenciatura correspondiente, en cuya línea se ha producido ya un proyecto legislativo.

SEGUNDO.- Que en desarrollo de la doctrina jurisprudencial precedentemente aludida, esta Sala, en su Sentencia de 16 de Enero de 1.985 (R. 412), resolviendo en relación con un supuesto prácticamente idéntico al que ahora es objeto de estudio, ha establecido que la convalidación otorgada por el Ministerio de Educación y Ciencia en aplicación de la normativa contenida en el Decreto 1.676/1.969, de 24 de Julio y Orden Ministerial de 25 de Agosto del mismo año 1.969, convalidación en el presente caso concedida al ahora apelado el 26 de Octubre de 1.984, obliga al Colegio Profesional de Odontólogos y Estomatólogos a acceder a su solicitud de colegiación, pues lo contrario vulneraría el derecho fundamental a la igualdad, reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española, por cuanto permite el ejercicio profesional a los españoles que ostentan el antiguo título de la especialidad de Odontólogo, la misma posibilidad debe reconocerse a los Odontólogos argentinos, aunque no posean el título de Licenciados en Medicina, igual posibilidad que a los españoles que deviene obligado concederles en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la citada Primera Ley del Estado, al establecerse que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I en los términos que establezcan los tratados y la Ley, reconocimiento de derecho que, por lo que al presente supuesto interesa, surge del Convenio Cultural hispano-argentino anteriormente mencionado, que otorga derecho a colegiarse a los Odontólogos argentinos en idénticas condiciones que a los españoles.

TERCERO.- Que al haberlo así establecido la sentencia apelada, es por lo que procede su confirmación, con consiguiente desestimación de la presente apelación e imposición de las costas causadas en esta segunda instancia al Colegio Profesional apelante, por así disponerlo preceptivamente el artículo 10-3 de la Ley 62/78.

(*RJA*, 1985, n° 4546, pag. 3807)

EXTRANJEROS. PERMISOS DE TRABAJO.

Tribunal Supremo (Sala 6ª, de lo Social). SENTENCIA DE 30 DE OCTUBRE DE 1985. Ponente: D. José Lorca García.

El T. S. desestima el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Zahoor A. y otros contra la sentencia de la Mag. Trab., que desestimó las demandas promovidas por los recurrentes contra Nacional Adaro de Investigaciones Mineras, S. A., sobre despido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El contrato laboral de extranjeros se encuentra actualmente regulado por los Decretos 1870/68, de 27 de julio, y 1031/80, de 3 de mayo, a los que se remite el apartado c) del artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores; estableciendo el segundo de ellos que los extranjeros que pretendan realizar en España una actividad lucrativa por cuenta propia o ajena, solicitarán simultáneamente del Gobernador Civil de la provincia, por conducto de la Policía, el Permiso de Trabajo y la correspondiente autorización de residencia, a cuya pretensión accederá de no existir razones de orden público que se opongan, en cuyo supuesto pasará la solicitud junto a la documentación y el informe oportuno, al Delegado Provincial del Ministerio de Trabajo, hoy Director Provincial del referido Ministerio, quien si autoriza el Permiso de Trabajo, lo trasladará a la Policía con el fin de que expida la autorización de residencia; poseyendo ambos permisos igual período de validez. Permiso y autorización administrativas que al afectar a la capacidad para contratar del extranjero, constituyen requisitos esenciales en el contrato de trabajo, pues poseen la naturaleza de normas de derecho necesario por su carácter de derecho público; de forma que su incumplimiento determina la nulidad de pleno derecho del contrato celebrado, que sólo tendrá un apariencia de tal, así como la responsabilidad económica, y de cualquier otra índole, que sea de aplicación, al empresario infractor. De aquí que la doctrina de la Sala, expresada en las Sentencias de 23 de febrero, 10 de marzo y 21 de junio de 1983, entre otras, entienda que no debe considerarse que existe despido del no nacional, cuando el contrato temporal celebrado se ha extinguido por el cumplimiento del plazo concedido en el Permiso de Trabajo, y éste no se prorroga.

SEGUNDO.- La doctrina expuesta determina la procedencia de desestimar los tres motivos que el recurrente formula con igual amparo procesal del artículo 167.1 de la Ley de Procedimiento Laboral, por violación del artículo 7. c) del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 19 del Decreto 1870/68, de 27 de julio, el primero; por violación de igual precepto del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 17 del citado Decreto, el segundo; y por violación de idéntico precepto Estatutario en relación con el artículo 13 del mismo Decreto, el tercero. Dado que el artículo 7, apartado c), del Estatuto de los Trabajadores, establece que la capacidad para contratar de los extranjeros se

regula por la legislación específica sobre la materia, que no es otra que la contenida en el Decreto que en los referidos motivos se cita; y con respecto al artículo 19 que el recurrente invoca en el primer motivo como infringido, el mismo dispone que la precedencia de la prórroga del permiso de trabajo del trabajador extranjero que lleve trabajando en España más de cinco años consecutivos depende de que la situación nacional de empleo lo aconseje; cuestión esta que corresponde enjuiciar exclusivamente a la Autoridad laboral. El artículo 17 de referido Decreto que se cita como infringido en el segundo motivo, incide en lo expuesto en el precepto que acabamos de comentar, al disponer que con carácter general podrán ser renovados los Permisos de Trabajo al expirar el período para el que fueron concedidos, a menos que a consecuencia de un cambio en la situación de empleo producido después de la concesión del Permiso de Trabajo anterior, tal renovación suponga un perjuicio para los trabajadores nacionales; decisión que corresponde tomar a la Autoridad Laboral. Y, por último, el artículo 13 que también se denuncia como infringido en el tercer motivo, establece que cuando una empresa que tenga a su servicio personal español y extranjero, sea autorizada para realizar despido se efectuarán éstos dentro de cada categoría profesional, empezando por el personal extranjero; precepto, que como atinadamente advierte el Ministerio Fiscal, se refiere al despido debido a causas tecnológicas o económicas, objeto de un expediente de regulación de empleo, supuesto que no se contempla en el caso de autos, que se concreta al hecho de que a los demandantes no les fueron prorrogados los contratos de trabajo que tenían concertados como trabajadores extranjeros, porque en la Oficina de Empleo de Linares existían inscritos trabajadores españoles, que fueron contratados por la empresa demandada en sustitución de ellos. Ello demuestra que no fueron despedidos, sino que vieron extinguidos sus contratos temporales al cumplirse el plazo estipulado, y no ser les prorrogado el Permiso correspondiente; lo que conlleva a la desestimación del recurso, como interesa el Ministerio Fiscal en su preceptivo dictamen.

(RJA. 1985,nº 5246, pag. 4433)

23

TRÁFICO DE DROGAS. Sustancia incluída en la lista IV de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 30 de marzo de 1961.

Tribunal Supremo (Sala 2ª de lo Criminal), SENTENCIA DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1985. Ponente: D. Mariano Gómez de Liaño y Cobaleda.

El T. S. declara no haber lugar al recurso de casación, por infracción de ley, interpuesto por Arsenio R. J. y Hamed M. M., contra sentencia de la Audiencia en causa seguida a los mismos por delito contra salud pública.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Las leyes penales han incorporado a su listado de hechos típicos, por antijurídicos y antisociales, los que se vienen denominando «delitos contra la salud pública», en afán de impedir y poner freno al proceso corruptor, creciente y perseverante, de consumo de drogas y estupefacientes, que tantos estragos propicia no sólo en cuanto concierne a la salud individual, sino también, y principalmente, por su incidencia en la salud colectiva, en el desarrollo y bienestar de la sociedad. Y es que, en el primer orden, la drogodependencia afecta especialmente al equilibrio psíquico y físico de la persona, devaluando todas las instancias superiores del psiquismo, disminuyendo o perturbando la capacidad intelectual, llevando a la obnubilación de la conciencia, soliendo ser irrefrenable y progresivo el camino de la adicción, desembocándose, a la postre, en el consumo de las especies más peligrosas y perjudiciales de semejantes productos, con estados de difícil reversibilidad y aguda intoxicación. Consecuencia de ello es la pérdida o disminución del control y poderes de inhibición del sujeto, emanación o derivación del proceso patológico desarrollado y de la morbilidad que suele hacer acto de presencia, con eventual puesta en peligro de la seguridad de terceros ante los brotes criminogénéticos que la consumición de droga conlleva, valoración axiológica que la Ley acoge y la realidad confirma de continuo; siendo manifiesta la fuerza marginadora que la drogodependencia genera, preludio que abre paso a variadas formas de criminalidad.

SEGUNDO.- El delito tipificado en el artículo 344 del Código Penal se ofrece como una infracción de peligro abstracto o riesgo común, en cuanto que, potencialmente, puede provocar ese espectro de daños que se han enumerado, pero no se requiere la efectiva producción de alguno, ni siquiera de los más leves o iniciales, ofreciéndose como elementos configuradores: a) el objetivo, integrado por ese haz o enumeración de actividades encaminadas a promover, favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, siempre que semejante dedicación o propósito cristalice a través de actos de cultivo, fabricación o tráfico, o fueran poseídas tales sustancias con este último fin; b) ejecución ilegítima de los actos enumerados, al no encontrar los mismos justificación o refrendo legal, administrativo o reglamentario, lo que, excepcionalmente, puede darse con inspiración en fines industriales, terapéuticos, científicos y docentes, supuestos minuciosamente previstos y regulados en la Ley de 8 de Abril de 1.967 (R. 706 y N. Dicc. 12434) sobre estupefacientes, atribuyendo al Estado un absoluto control sobre el cultivo y producción, la fabricación y extracción, el almacenamiento, transporte y distribución, la importación, la exportación y el tránsito de primeras materias y de productos estupefacientes, así como su prescripción, posesión, uso y consumo; c) ánimo tendencial, como elemento subjetivo del injusto, integrado por la intención de destino, finalidad proselitista o de facilitación a terceros de tan nocivas sustancias, quedando fuera de la sanción legal, como supuesto atípico, el auto-consumo; exigencias a las que viene refiriéndose la jurisprudencia, sentencias, entre otras, de 22 de Marzo de 1.982 (R. 2007), 8 de Marzo y 21 de Diciembre de 1.983 y 18 de junio de 1.985. Viniendo concebido el tráfico, a cuya punición se provee, no sólo como

transmisión onerosa sino, también, como el acercamiento o puesta a disposición de terceros de la droga a título gratuito, merced a su donación u obsequio —sentencias de 8 de febrero, 24 de septiembre y 13 de noviembre de 1.984, 15 de marzo, 18 y 26 de junio de 1.985, entre otras muchas—.

TERCERO.- El producto ocupado a los procesados consistió en diez kilogramos de hachís, cuya naturaleza es sobradamente conocida, siendo su tráfico tantas veces sancionado en resoluciones de esta Sala, sustancia incluida en la lista IV de la Convención Unica sobre estupefacientes de 30 de marzo de 1.961, que fue ratificada por España mediante Instrumento de 3 de febrero de 1.966, Convención enmendada en el Protocolo de Ginebra de 25 de marzo de 1.972, entrando en vigor el 8 de agosto de 1.975, ratificado por España el 4 de enero de 1.977 y plasmada en la Convención Unica de 1.981, recogida en España en la orden de 11 de febrero de 1.981, estableciéndose en el artículo 2º que se consideran estupefacientes las sustancias incluidas en las listas I y II de los anexos al Convenio Unico y las demás que adquieran tal consideración, en el ámbito internacional, con arreglo a dicho convenio, y en el nacional por el procedimiento que reglamentariamente se establezca, añadiendo que también se reputan estupefacientes las sustancias incluidas en la lista IV del anexo mencionado; figurando en unas y otra la mención, en calidad de estupefaciente, de la planta «cannabis» así como su resina y los extractos y tinturas de la cannabis una de cuyas denominaciones es la de «hachís», y sus derivados, la que viene esti mándose jurisprudencialmente como de aquellas sustancias estupefacientes que no causan grave daño a la salud pública, no pudiendo dejar de reconocerse, no obstante, la serie de secuelas deteriorantes que en el orden físico y psíquico comporta, cuando no representa su consumo antesala o prolegómeno de una drogadicción de más alto alcance.

CUARTO.- Tras la modificación operada por la Ley 8/1.983 de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal, se produce acusada innovación en el texto del artículo 344, al distinguir en su párrafo primero entre sustancias —drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas— cuyo consumo pueda causar grave daño a la salud, y las restantes, sancionándose el tráfico ilícito en el primer supuesto con las penas de prisión menor y multa conjunta, y en el segundo con arresto mayor únicamente; siendo ambos supuestos susceptibles de agravación, imponiéndose las penas superiores en grado, si concurriese alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo segundo, entre ellas de la que la cantidad poseída para traficar fuere de notoria importancia. De lo que se colige que si bien al hachís ocupado a los procesados viene incluido entre las drogas blandas, no originadoras de grave daño a la salud, la cantidad de diez kilogramos manifiestamente puede considerarse como de «notoria» importancia, aun teniendo en cuenta que para tal aserto ha de considerarse no sólo la cantidad, sino también la calidad en relación con el ámbito que es susceptible de tener el tráfico a que está destinada —Sentencias de 7 y 10 de noviembre de 1.983—; excediendo aquella cantidad de hachís en mucho de lo que puede considerarse como normal para el consumo propio y esporádico tráfico, siendo susceptible de dañar con su reparto y venta a numerosos consumidores. Pudiendo citarse, ad exemplum, que esta Sala ha estimado como de notoria importancia la posesión de dos kilos de hachís —sentencia de 17 de

Octubre de 1.984, un kilo trescientos cincuenta gramos— sentencia de 20 de Febrero de 1.984, un kilo cuatrocientos gramos —sentencia de 22 de Febrero de 1.984—, un kilo cien gramos —sentencia de 1 de Febrero de 1.985— y cuatro kilos setecientos gramos —sentencia de 7 de febrero de 1.985 (R. 904)—. Procediendo, pues, la desestimación del motivo único articulado por los procesados por el cauce del número 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por supuesta infracción del artículo 344 del Código Penal, especialmente su párrafo segundo «in fine».

(RJA. 1985, nº 5387, pag. 4562)

24

CONVENIO HISPANO ALEMÁN DE 4 DE DICIEMBRE DE 1973 SOBRE SEGURIDAD SOCIAL. Prestaciones por invalidez permanente.

Tribunal Supremo (Sala 6ª, de lo Social). SENTENCIA DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1985. Ponente: D. Carlos Bueren y Pérez de la Serna.

El T. S. desestima el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Pablo M. J. contra la sentencia de la Mag. Trab., que desestimó la demanda promovida por el recurrente contra el INSS, sobre diferencia de base reguladora por incapacidad absoluta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Aplicada a la situación del demandante en autos la normativa del Convenio Hispano-Alemán sobre Seguridad Social de 4 de diciembre de 1.973, con vigencia en 1º de noviembre de 1.977 y declarado dicho trabajador afecto de una incapacidad permanente absoluta para todo trabajo por causa de enfermedad común, con derecho al percibo de una pensión de 11.801 pesetas mensuales, como resultado de aplicar el índice reductor del 36,26 por ciento al equivalente del 100 por 100 de una base reguladora de 32.545 pesetas se impugna por dicho demandante la sentencia que desestimó su pretensión de que la pensión referida fuese fijada en la suma de 93.743 pesetas mensuales, cantidad que, además debería ser le asignada íntegramente, al no ser aplicable a la misma ningún coeficiente reductor, pretensión esta que se mantiene en el recurso a través de cinco motivos de casación, de los cuales los cuatro primeros se formulan con amparo procesal en el número 1º del artículo 167 del Texto de Procedimiento Laboral y en los que denunciando haberse infringido, por los respectivos conceptos, que al efecto se señalan, los artículos 25-1 b), 22, 23 y 26 del citado Convenio Hispano-Alemán, así como la doctrina jurisprudencial sobre la materia y el contenido del artículo 14 de la Constitución Española, realmente persiguen igual finalidad de demostrar que para fijar la base reguladora determinante de la pensión correspondiente debió ser tenido en cuenta al salario que percibía el demandante en Alemania en las fechas inmedia-

tamente anteriores a la contingencia causante de su invalidez, en lugar del salario mínimo interprofesional establecido en España, que aplicó el juzgador de instancia y que, de otra parte, por estar acreditado que el actor tenía cubierto el período mínimo de cotización en nuestro país para causar derecho a la prestación por razón de invalidez permanente, es contrario a la normativa del Convenio aplicar el tanto por ciento de reducción sobre la base reguladora, como se hace en la sentencia. Sin embargo, la fundamentación legal que es base de los tres motivos que de esta forma se articulan impide que los mismos puedan prosperar al no tener en cuenta: a) que el artículo 22 del comentado Convenio Hispano-Alemán de 1.973, que según el siguiente artículo 26 es precepto de pertinente aplicación para determinar las prestaciones por invalidez de acuerdo con las disposiciones legales españolas, comienza estableciendo la exclusividad de las normas que en el mismo se contienen a fin de regular las pensiones de las personas aseguradas según lo convenido entre los dos Estados contratantes, llegando a precisar el artículo 25-1 b) del repetido acuerdo internacional que cuando todo o parte del período de cotización elegido por el solicitante para el cálculo de su base reguladora de prestaciones se hubiera cumplido en la República Federal, el Organismo competente español determinará dicha base reguladora sobre las bases de cotización vigentes en España durante dicho período o fracción para los trabajadores de la misma categoría profesional que la persona interesada, lo que es claro exponente de que para determinar la base reguladora de la pensión por razón de invalidez causada en España no ha de ser tenido en cuenta el salario que, en el momento de la contingencia, pudiera percibir el trabajador en territorio alemán, que sólo podrá ser computable en relación con las prestaciones causadas en dicho país, con arreglo a su propia legislación, y en la proporción resultante de los períodos de cotización en uno y otro Estado, siendo esta la tesis mantenida precisamente en la sentencia de esta Sala de 8 de mayo de 1970, única resolución que se da como infringida en el tercer motivo de casación que se ofrece por el recurrente y que aun estando referida al Convenio anterior entre España y Alemania de 1959, mantiene su validez a la luz de los preceptos del vigente sin que, por otra parte, en el supuesto en controversia la infracción del cuestionado artículo 25.1 b) del Convenio en vigor derive del hecho de haber sido aplicado como regulador de la pensión del demandante el salario mínimo interprofesional de los trabajadores de su misma categoría profesional, pues ello se hizo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 b) de la Orden de 15 de abril de 1969 (R. 869 y 1548 y N. Dicc. 27275), y como prevención establecida en favor de aquellos trabajadores en que según se da como indiscutido hecho probado en la sentencia, su salario real, en la fecha del hecho causante de la prestación resulta inferior a aquel salario mínimo, como acertadamente vino a ser reconocido en la resolución que se combate ratificando el sistema seguido por la Entidad gestora española para fijar la teórica pensión que había de percibir el trabajador declarado en situación de incapacidad permanente, si además, y en último extremo, la solución propugnada por el recurrente no implicase un trato desigual, prohibido por el artículo 14 de la Constitución Española, para aquellos trabajadores, no emigrantes, que por razón de su categoría profesional no habrían de alcanzar el salario superior que podrían percibir en Alemania para después constituirle como base para la graduación de su pensión de invalidez, en España, y

b) porque según lo dispuesto en los distintos apartados del artículo 22 del Convenio Hispano-Alemán y lo que, a iguales efectos, se previene en el artículo 41 del propio Texto, para la adquisición, mantenimiento y recuperación del derecho a prestaciones habrán de totalizarse los períodos de seguros cumplidos de conformidad con las disposiciones legales de los dos Estados, cuya cuantía se determinará con arreglo a la normativa interna de cada uno de ellos, y una vez conocido su importe operará sobre el mismo una reducción proporcional al período de seguro cumplido en cada Estado y el que totalizan todas sus cotizaciones, sin que la tesis defendida por el recurrente de no ser procedente aplicar ninguna reducción cuando el trabajador tenía cubierto el período de carencia necesario para causar derecho a la prestación correspondiente, encuentre apoyo doctrinal en la sentencia de esta Sala de 5 de junio de 1984 (R. 329), ni en las de fechas anteriores que se invocan en el motivo cuarto del recurso, que no guardan ninguna relación con el caso discutido y están solamente referidas a la determinación del Organismo que ha de resultar directamente obligado al pago de la pensión reconocida al trabajador que cotizó a la Seguridad Social de dos países diferentes.

SEGUNDO.- Lo expuesto conduce a la desestimación del recurso, de conformidad con el dictamen del Ministerio Fiscal, sin necesidad de examinar el quinto y último motivo de casación pues estando formulado por la vía del error de hecho del número 5 del artículo 167 de la Ley de Procedimiento Laboral resulta intrascendente, por estar referido a la determinación de la pensión que pudiera tener reconocida el demandante en Alemania y el importe de los salarios percibidos últimamente por el mismo en dicho país.

(RJA, 1985, n° 5756, pag. 4903)

25

EXTRANJEROS. PERMISOS DE TRABAJO. Empleados sin permiso de trabajo.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-Admº). SENTENCIA DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1985. Ponente: D. Fernando Roldán Martínez.

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional dictó sentencia en 29 de noviembre de 1982, desestimando el recurso interpuesto por la empresa Coordinación T. y F., contra acuerdo del Ministerio de Trabajo que desestimó las peticiones formuladas en el escrito de descargos realizados por la entidad recurrente e impuso a la misma sanciones por ocupación de trabajadores extranjeros sin el correspondiente permiso de trabajo, sanción que ascendía a la cantidad de 925.000 ptas.

Interpuesto recurso de apelación por la misma entidad, el T. S. lo desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los Considerandos de la Sentencia apelada y

PRIMERO.- Que las razones jurídicas en que se fundamenta la sentencia apelada, no han sido desvirtuadas por las alegaciones de la parte apelante, pues, independientemente de que la Empresa propietaria de la obra en la que trabajaban los obreros extranjeros fuese o no «H.I., S.A.», lo cierto y así resulta de los antecedentes aportados al expediente y a los autos es que la Razón Social que suscribió el contrato de colaboración para la instalación de la Fábrica de Cementos de Carboneras (Almería), fue la Empresa «Española de Coordinación Técnica y Financiera, S. A.», de esta Capital, en anagrama CENTUNION, con la Casa Alemana KHD, contrato de Asistencia Técnica en cumplimiento del cual KHD para la supervisión del montaje y puesta en marcha pondría a disposición de CENTUNION personal con experiencia, contrato que fue inscrito en el Registro de Contratos de Transferencia de Tecnología del Ministerio de Industria el 2 de Marzo de 1.978, siendo asimismo un hecho acreditado por el Acta de la Inspección de Trabajo número 389/80 levantada en fecha 19 de Abril de 1.980 (dos años después), que por orden y cuenta de la mencionada Empresa CENTUNION trabajaban 37 trabajadores extranjeros, sin que ninguno de ellos tuviera el correspondiente permiso de trabajo.

SEGUNDO.- Que la legislación de empleo —Decreto de 27 de Julio de 1.968— que regula el trabajo de los extranjeros, exige que los trabajadores extranjeros que realicen labores de montaje en nuestra Nación de maquinaria importada, en todo caso, tienen que estar provistos de contrato de trabajo visado por la Delegación de Trabajo de la provincia en que tenga su residencia la Empresa que los hubiese contratado, incurriendo en caso de incumplimiento la Empresa que les dio empleo en infracción que será sancionada con multa de 1.000 a 25.000 pesetas, por cada infracción en que se incurra, según la gravedad de la misma, por lo que comprobada en este caso la infracción y por el número de extranjeros que trabajaban en la instalación y montaje de la mencionada fábrica de cemento en Carboneras, sin tener permiso de trabajo, aleja la idea de que se trate de personal especializado, lo que unido al tiempo de permanencia que llevaban trabajando en España, según consta, sin contradicción, ni prueba en contrario, en el Acta de la Inspección de Trabajo, procede confirmar la sentencia apelada.

(R.J.A. 1985, n° 5364, pag. 4549)

26

EXTRANJEROS. EXPULSIÓN. Improcedencia de la expulsión de súbdita dominicana casada con español.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-Admº). SENTENCIA DE 25 DE NOVIEMBRE DE 1985. Ponente: D. José Pérez Fernández.

Es recurso de apelación interpuesto al amparo de la Ley 62/78 por el Letrado de la Administración, contra sentencia dictada por la Sala de Valencia en 4 de julio de 1985, que estimó el

recurso deducido por D^a Belkys A. E., contra resolución del Gobierno Civil de Valencia que acordaba la expulsión de la misma del territorio español.

El T. S. lo desestima, declarando en su consecuencia no ajustado a derecho el acto de expulsión impugnado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Que propuesta por la Jefatura Superior de Policía de Valencia y decretado por el Gobierno Civil la expulsión del territorio nacional de la recurrente, súbdita dominicana Belkys Amarilys E. R., entre otras circunstancias por supuesta implicación en un delito de trata de blancas, al haber contraído matrimonio con posterioridad con súbdito español, lo que aparece legal y suficientemente acreditado, crea una situación jurídica nueva y da vida a un estado civil, al que para darle efectividad y adecuado cumplimiento, se hace rigurosamente incompatible con las aludidas medidas policiales que dejarían sin el adecuado contenido a ese estado generador de derechos y de obligaciones de las cuales es la convivencia o vida en común la primera de ellas y se dejaría para que ésta tenga lugar, sin ejercicio inicial de un derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos; matrimonio al que por otra parte no sería correcto imputar en su voluntad de llevarlo a cabo, un posible fraude en cuanto concebido para evitar se produzcan situaciones en la recurrente derivadas de su propia conducta y antecedentes, por cuanto que estamos ante una situación inicial legal de la que habrán de deducirse los oportunos efectos.

(RJA. 1985, nº 5674, pag. 4842)

27

EXTRANJEROS. REFUGIADOS. Improcedencia de la denegación de la condición de refugiado por haber salido de su País con pasaporte. Convención de Ginebra de 1951.

Tribunal Supremo (Sala 4^a, de lo Contencioso-Adm^o). SENTENCIA DE 10 DE DICIEMBRE DE 1985. Ponente: D. Francisco González Navarro.

El Ministerio del Interior acordó en 16 de mayo de 1980 desestimar el recurso de reposición interpuesto por el súbdito argentino D. Miguel Oscar M. C. contra resolución de aquel Departamento Ministerial de 22 de febrero de 1980 por la que se denegó a dicho Sr. M. el reconocimiento de la condición de refugiado en España, por no reunir los requisitos exigidos en el artículo 1º de la Convención de Ginebra.

Interpuesto recurso contencioso-administrativo por D. Miguel Oscar M. C., la Sala de la Audiencia Nacional, en sentencia de 29 de octubre de 1983, lo estima, declarando nula la resolución impugnada por su no conformidad a Derecho establecido que debe serle concedida al recurrente la condición de refugiado en España.

Promovido recurso de apelación por el Abogado del Estado, el T. S., lo desestima, confirmando la sentencia apelada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La cuestión planteada en este pleito se reduce a examinar si es adecuada a Derecho la sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de octubre de 1.983 por la que se concede la condición de refugiado en España al súbdito argentino D. Miguel Oscar M. C., sentencia que a su vez revocó las resoluciones administrativas del Ministerio del Interior de 22 de febrero y 16 de mayo de 1.980 que denegaron a aquél esa misma condición.

SEGUNDO.- Para el más recto enjuiciamiento de la cuestión litigiosa debe tenerse presente que cuando el Ministerio del Interior deniega la petición de otorgamiento de la condición de refugiado, el solicitante no había probado la concurrencia en él de las circunstancias que permitirían acceder a su petición. Es posteriormente, durante el proceso ante la Audiencia Nacional cuando se prueba cumplidamente que los antecedentes políticos del peticionario y las actividades políticas a que venía dedicándose podían razonablemente valoradas justificar el «fundado temor de ser perseguido» que es el presupuesto de hecho invocado en este caso. Y comprobada la existencia de ese presupuesto la Sala revoca los autos administrativos denegatorios.

TERCERO.- Sin perjuicio de que el proceso de normalización constitucional de la Argentina a que alude la sentencia de instancia parece avanzar hacia una definitiva consolidación del sistema democrático y de que en este momento el Sr. M. C. no podría negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, por imperativo del artículo 1, Sección G de la Convención de Ginebra de 1.951 (Estatuto de los Refugiados), lo que a esta Sala corresponde valorar es la corrección jurídica de la sentencia de la Audiencia Nacional al pronunciarse sobre los hechos que se sometieron a su enjuiciamiento valorando la prueba de los mismos que fue aportada a la luz de la normativa aplicable, fundamentalmente contenida en la Convención citada. Y siendo esto así es evidente la absoluta corrección jurídica tanto del razonamiento que hace la dicha sentencia como del fallo que lo culmina. Porque la actividad profesional ejercida por el interesado en medios de comunicación opuestos al Gobierno, concretamente del Partido Comunista y su detención en un cierto momento son elementos bastantes para admitir que pudiera abrigar fundado temor de ser perseguido. Sin que el hecho de haber salido de su país en vuelo regular y con pasaporte baste a desvirtuar esos hechos, pues como se dice en el «Manual de Procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado», editado en Ginebra, septiembre de 1.979 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Manual que figura unido a los autos, «la mera posesión del pasaporte no siempre puede considerarse como prueba de la lealtad del titular ni como indicio de su falta de temor. Cabe incluso que se haya expedido el pasaporte a una persona que sea indeseable en su país de origen, con el solo fin de asegurar su salida, y también pueden darse casos en que el pasaporte haya sido obtenido subrepticamente. En conclusión, pues la mera posesión de un pasaporte nacional válido no es obstáculo para obtener el Estatuto de refugiado» (página 14). Por todo lo cual debe confirmarse la sentencia impugnada.

CUARTO.- No dándose ninguna de las circunstancias previstas en el

artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede hacer especial pronunciamiento sobre costas.

(RJA. 1985, nº 6348, pag. 5403)

28

EXTRANJEROS. COLEGIACIÓN PROFESIONAL. Igualdad ante la Ley. Odontólogo argentino.

Tribunal Supremo (Sala 3ª, de lo Contencioso-Admº). SENTENCIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 1985. Ponente: D. Manuel Pérez Tejedor.

La Sala Cuarta de Madrid dictó sentencia en procedimiento seguido al amparo de la Ley 62/78, en 30 de marzo de 1985, estimando el recurso interpuesto por D. Silvio A. J. contra acuerdo del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región de Madrid, que le denegó su colegiación. El fallo de dicha Sala declara la nulidad de la resolución impugnada por infringir el art. 14 de la Constitución Española.

Interpuesto recurso de apelación por el letrado de la Administración Pública y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región, el T. S., confirmando la sentencia apelada, lo desestima.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La Sentencia apelada declara la nulidad del acto administrativo impugnado, por haber violado el derecho fundamental de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución Española y el consiguiente derecho del recurrente a ser admitido en el Colegio Oficial de Odontólogos de la Primera Región. Frente a lo así declarado la representación del Colegio Oficial apelante alega sustancialmente que es procedente la excepción de inadmisibilidad del recurso por extemporáneo; que el procedimiento tramitado por su especialidad no permite introducir situaciones contrarias a Derecho; que los odontólogos extranjeros no se encuentran en situación de igualdad con los odontólogos españoles, por lo que no puede ser aplicado un principio de total y absoluta igualdad; que la solicitud de colegiación presentada por el recurrente no estaba acompañada de la documentación necesaria, a tenor del Estatuto-Reglamento para la reorganización de los Colegios Oficiales de Odontólogos, y que el examen previo de capacidad jurídico-sanitaria adoptado por Acuerdo del Consejo General de Colegios de Odontólogos y Estomatólogos de España número 25 de 23 de Septiembre de 1.983 está establecido respecto a los profesionales con títulos extranjeros convalidados, pero no establece discriminación alguna respecto a los extranjeros.

SEGUNDO.- La alegación de que el recurso fue interpuesto fuera del plazo señalado al efecto, ya fue rechazada en la Sentencia apelada, con base en consideraciones que no aparecen desvirtuadas en la apelación, por lo que han de ser ratificadas.

TERCERO.- Evidentemente este procedimiento especial no puede ser un medio para legitimar situaciones contrarias a Derecho; pero en forma alguna aparece que esa situación derive del contenido de la Sentencia apelada y, por el contrario, ésta pone de manifiesto que mediante el simple hecho de no admitir la presentación de documentos al recurrente se ha negado a su título de odontólogo, expedido por la Universidad de Buenos Aires, equiparación al título español de odontólogo, no obstante la convalidación obtenida por Acuerdo del Ministerio de Educación y Ciencia de 8 de Junio de 1.983; lo que constituye una actuación determinante de la discriminación en el derecho de igualdad ante la Ley, que el artículo 14 de la Constitución tutela.

CUARTO.- Si como se alega, la solicitud de colegiación presentada no estaba acompañada de la documentación necesaria, debió advertirse el hecho al presentador, para que pudiera subsanar la falta o faltas señaladas; y, rechazar la documentación presentada sin advertencia alguna al efecto determina la situación injustificada de discriminación.

QUINTO.- El Colegio Oficial de Odontólogos apelante carece de facultades para promulgar normas legales o reglamentarias reguladoras del ejercicio de la profesión, y mediante el Acuerdo que establece la exigencia de que la efectividad de los títulos profesionales extranjeros, convalidados legalmente, esté precedida por un examen de capacidad jurídico sanitaria practicado ante el mismo colegio, es una extralimitación de competencia que, en cuanto al recurrente se refiere, lesiona su derecho constitucional de igualdad ante la Ley, como la Sentencia apelada resuelve. Conforme ya puso de manifiesto esta Sala en Sentencia de 16 de Enero de 1.985, los profesionales odontólogos con título español no están obligados a superar la prueba de capacidad jurídico sanitaria y, si bien es cierto que los españoles no pueden colegiarse si no están en posesión del título de Licenciado o Doctor, está permitido el ejercicio profesional de quienes ostenten el antiguo título de odontólogo, y aplicando el principio de igualdad ante la Ley esa posibilidad no puede negarse a los odontólogos argentinos, con título convalidado en España, aunque no posean el título de médicos.

SEXTO.- Rechazadas las alegaciones de la parte apelante es consecuencia de ello la desestimación de todas sus pretensiones; y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 10-3 de la Ley 62/1.978 de 26 de Diciembre, aplicable a la tramitación del procedimiento, han de ser impuestas las costas de la apelación a dicha parte apelante.

(RJA, 1985, nº 6367, pag. 5386)

COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL DE LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES. INEXISTENCIA DE LITISPENDENCIA INTERNACIONAL. CONTRATOS. Lugar de cumplimiento de las obligaciones.

Tribunal Supremo (Sala 1ª, de lo Civil). SENTENCIA DE 19 DE DICIEMBRE DE 1985. Ponente: D. José Mª Gómez de la Bárcena López.

La entidad H. Tranding Co., domiciliada en el Líbano, presentó, ante el Juzgado nº 7 de Barcelona, demanda de juicio declarativo de mayor cuantía contra Motor I., S. A., sobre reclamación de cantidad por comisiones devengadas hasta determinada fecha, «sin perjuicio de cualquier rectificación necesaria durante el proceso como consecuencia de lo que resulte acreditado en período probatorio... o en ejecución de la sentencia, más intereses en la forma convenida».

La demanda se opuso por razones de fondo, e invocó además las excepciones de incompetencia de jurisdicción y litis pendencia.

El Juzgado estimó en parte la demanda y condenó a la interpelada a abonar a la actora la suma de ciento cuarenta millones treinta y cuatro mil doscientas ochenta y siete pesetas con noventa y cinco céntimos, y cuatrocientos veintidós mil ciento cuarenta y dos con cuarenta y cuatro dólares USA, o cantidad equivalente en pesetas, más intereses legales desde la interpelación judicial, por comisiones adeudadas por razón de exportaciones efectuadas a Siria desde septiembre de 1976 hasta el mes de mayo de 1980, con imposición a la demanda de las costas procesales.

La demandada interpuso recurso de apelación; la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona desestimó ese recurso, acogió el formulado por vía de adhesión por la actora, y confirmó la sentencia impugnada, y su auto aclaratorio, con la única modificación de fijar el importe de las comisiones correspondientes al período comprendido entre septiembre de 1976 y 30 de noviembre de 1981 en ciento sesenta y un millones doscientas treinta y cuatro mil seiscientos ocho pesetas y cuatro millones ciento dos mil doscientos siete con treinta y ocho dólares USA, quedando sujeta la liquidación de las comisiones posteriores a lo prevenido por el Juzgado, sin expreso pronunciamiento en cuanto a las costas de la alzada.

La demandada formalizó recurso de casación.

El T. S. declara haber lugar al recurso, casa y anula la sentencia de la Audiencia, revoca la del Juzgado y absuelve a la recurrente de la demanda contra ella deducida, sin expresa condena en costas en ninguna de las instancias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Con procesal amparo en el número primero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denuncia el primer motivo del recurso, «abuso en el ejercicio de la jurisdicción, por infracción de los artículos 51 y 70 del referido texto legal y de la doctrina jurisprudencial que se cita, al corresponder a los tribunales sirios el conocimiento de la reclamación formulada por Hajjar T. C.», infracción que, pese a su prolijo y minucioso desarrollo, puede sintetizarse en las siguientes afirmaciones de la impugnante; a) tal entidad libanesa dedujo demanda, ante los Tribunales sirios, postulando el abono de comisiones por ella devengadas en razón a venta de maquinaria de la actora, verificada en dicho país durante el período de tiempo comprendido entre el día uno de septiembre de mil novecientos setenta y dos y el día de la presentación de la tercera demanda, dos de septiembre de mil novecientos setenta y siete, pretensiones condonatorias que fueron estimadas, en la sentencia de apelación, y definitivamente en la de casación, la que obtuvo el exequator ante este Tribunal Supremo por auto de veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y tres, en las que se establecía la competencia internacional de los Tribunales sirios para conocer de tal litigio; b) el que nos ocupa, a la vista de lo anterior, «no se suscita» en España por primera vez, sino en Siria, por lo que no es aplicable el artículo cincuenta y uno, que se cita como infringido; c) tal aplicación competencial viene determinada por las siguientes circuns-

tancias, primera, el ejercicio ante dicho foro, de sus acciones por parte de la recurrida, segunda, que tales Tribunales se declararon competentes, y tercero, que la ley del contrato es la de Siria; d) al estar los servicios prestados en dicho país, en él radica la competencia para el conocimiento de la litis, precisamente por aplicación del artículo setenta de la Ley Adjetiva, cuya infracción también se acusa, precepto que remite a las reglas generales de competencia territorial establecidas en los artículos cincuenta y uno y siguientes de la misma, dándose, en el supuesto enjuiciado, una clara sumisión de la entidad actora a los Tribunales sirios; y e) de no aplicarse el criterio de elección habría que acudir al de los fueros, cual es el del lugar de cumplimiento de la obligación, que también radica en Siria, sea cualquiera la naturaleza jurídica del contrato que ligue a las partes, arrendamiento de servicios, comisión mercantil, o mandato, tal como proclama la reiterada doctrina jurisprudencial que cita; motivo cuyo rechazo se impone a la vista de los razonamientos siguientes: Primero, no puede admitirse que por el hecho de haberse planteado ante los órganos jurisdiccionales sirios unos determinados procesos derivados de las relaciones contractuales mediante entre las partes, antes del aquí deducido, haya mediado un sometimiento permanente para todas las consecuencias de la misma relación jurídica a los dichos Tribunales; segundo, tal razonamiento viene abonado por la circunstancia de que, contrariamente a lo sostenido por la impugnante, al apoyarse la reclamación de comisiones, y el abono de las mismas, en el acuerdo plasmado en la carta unida al folio ochenta y cuatro de los autos, aun admitiendo fueran devengadas en Siria, no resulta del contrato que allí debieran ser percibidas, sino más bien en Barcelona, lugar de la convención, de aquí que haya de rechazarse la constante alegación del recurrente, carente de apoyo probatorio bastante, de que fuera Siria el lugar de cumplimiento de la obligación, circunstancia negada por la Sala de Instancia en el auto de nueve de abril de mil novecientos ochenta, en su tercer considerando, dándose además la circunstancia de que en el indicado país no tienen su domicilio ni la recurrente ni la recurrida; tercero, tal afirmación de la Sala de instancia, de que en la carta suscrita en veintitrés de junio de mil novecientos setenta y dos, no se determina ni precisa el lugar del pago, aunque sí de devengo, se produce por vía interpretativa del documento que a las partes liga y con base al que se producen las reclamaciones, cuya labor hermenéutica permanece inalterable, en tanto no se impugne adecuadamente, habiendo dicho esta Sala que, para que pueda darse preferencia al lugar del cumplimiento de la obligación —en el caso examinado el pago de las comisiones—, es preciso que esté claramente determinado, sentencia de dos de junio de mil novecientos cincuenta y cuatro, dando lugar su indeterminación, a que, por aplicación de lo normado en el artículo sesenta y dos, regla primera, sea correcta la opción del demandante de deducir su demanda ante el Juez del lugar en que tiene su domicilio la empresa española demandada y aquí recurrente.

SEGUNDO.- Acudiendo a la vía del ordinal tercero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Rituaria, se acusa en el segundo motivo, «el quebrantamiento de las normas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por infracción de la doctrina jurisprudencial que se cita al no haberse tenido en cuenta la existencia de la *litis pendencia*», invocando en su desarrollo los artículos siete del Código Civil, en cuanto establece que toda pretensión procesal

debe ser atendida, y el artículo quinientos treinta y tres, número quinto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regulador de la excepción de litispendencia, que estima la impugnante se produce al darse entre el proceso aquí sustanciado y los seguidos ante los Tribunales sirios las identidades exigidas, cuando, además, en aquellos procesos se reclaman comisiones referidas a venta realizadas hasta el día dos de diciembre de mil novecientos setenta y siete, en tanto en la demanda iniciadora del procedimiento sustanciado en España se pide el abono de comisiones referidas a importaciones efectuadas desde el mes de septiembre de mil novecientos setenta y seis, como definitivamente se puntualiza en el escrito de réplica; motivo que también habrá de perecer, prescindiendo de que tales alegatos de la recurrente fueran esgrimidos tímidamente al formular la excepción de incompetencia de jurisdicción, como dilatoria, en tanto la que se examina fue aducida al contestar la demanda, con la finalidad de rebatir, utilizando tal ardid procesal, los argumentos dados por la Sala en el auto rechazando tal excepción, lo cierto es que los allí empleados, posteriormente robustecidos por la sentencia de primer grado, se obtienen en la instancia a través de la valoración de alegaciones de las partes y apreciaciones documentales, que concluyen no se producen las identidades precisas para estimar la situación de litispendencia, teniendo en cuenta las fechas a que se concretan los pedimentos en un proceso y otro, lo que implica que tales apreciaciones de orden fáctico determinantes de la falta de concurrencia de las identidades referidas, sólo pueden ser válidamente combatidas, acudiendo al cauce del ordinal séptimo, hoy, cuarto, del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Procesal, sentencia de esta Sala de veintisiete de abril de mil novecientos sesenta y cinco (R. 2371); además de que la situación de litispendencia, como su mismo nombre indica, exige que exista un proceso pendiente, situación inexistente desde el momento en que el sustanciado en Siria quedó definitivamente resuelto, e incluso ejecutado, a través del correspondiente exequator postulado ante este Tribunal Supremo, situación consumada ante la que no es posible el acogimiento de la excepción, como establecieron las sentencias de tres de noviembre de mil novecientos veintisiete y treinta de mayo de mil novecientos veinticinco.

TERCERO.- Ahora por el cauce del número quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia en el tercer motivo la infracción del artículo mil ciento cincuenta y seis del Código Civil, al condenar la sentencia al pago de las comisiones correspondientes a los tractores exportados entre el mes de septiembre de mil novecientos setenta y seis y el dos de septiembre de mil novecientos setenta y siete, teniendo en cuenta que cuando se dictó la sentencia recurrida, ya se había ejecutado en España la sentencia condenatoria dictada por los Tribunales sirios, habiendo percibido la demandante de la demandada la cantidad de doscientos cinco millones setecientas noventa y tres mil ciento setenta y ocho pesetas, en cumplimiento de auto dictado por este Tribunal en el «exequator», cantidad que la entidad actora percibiría dos veces; motivo que también ha de ser rechazado pues supone el planteamiento de una cuestión nueva no suscitada en la instancia, lo que lo hace inadmisibles y ahora desestimables, además de entrañar una cuestión de orden fáctico, en la que viene a involucrarse un problema de compensación.

CUARTO.- En el motivo cuarto, amparado en el ordinal tercero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se denuncia «el quebrantamiento de las formas esenciales del proceso por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, y, en concreto, por infracción del artículo trescientos cincuenta y nueve y de la doctrina jurisprudencial que se cita, al resolver sobre peticiones formuladas en momento procesal inoportuno en relación con los artículos quinientos sesenta y tres, quinientos sesenta y cuatro y seiscientos setenta de la Ley de Enjuiciamiento Civil», y ello en razón a que, en la demanda se pide la condena al pago de la suma que resulte adeudar la recurrente por «exportaciones efectuadas desde el mes de junio de mil novecientos setenta y seis y que inicialmente y por el período transcurrido hasta abril de mil novecientos setenta y siete, se fija en noventa y ocho millones cuatrocientas noventa y siete mil seiscientas pesetas, sin perjuicio de cualquier rectificación necesaria durante el proceso, como consecuencia de lo que resulte acreditado en período probatorio, en razón de las exportaciones realmente efectuadas, o en ejecución de sentencia, así como los intereses de todo ello»; en el escrito de réplica se postula la condena a pagar, concretándola a «la que resulte adeudar (la recurrente) por comisiones por razón de exportaciones efectuadas a Siria desde septiembre de mil novecientos setenta y seis y que, en concreto, por el período transcurrido desde dicha fecha hasta el mes de mayo de mil novecientos ochenta, importan la cantidad de ciento cuarenta millones treinta y cuatro mil doscientas ochenta y siete con noventa y cinco pesetas y cuatrocientos veintidós mil ciento cuarenta y dos con cincuenta y cinco dólares USA»; en el escrito de ampliación, formulado sobre la base de la aparición de nuevos documentos respecto de los cuales jura la parte ampliante no haber tenido conocimiento de su existencia anterior, se postula la condena al abono de «aquella suma que resulte adeudar por comisiones por razón de exportación» efectuadas a Siria desde septiembre de mil novecientos setenta y seis y que, en concreto, por el período transcurrido desde dicha fecha hasta el mes de mayo de mil novecientos ochenta, importan la cantidad de ciento cuarenta millones treinta y cuatro mil doscientas ochenta y siete con noventa y cinco pesetas y mil setecientos cincuenta y nueve millones quinientos cincuenta y un mil novecientos siete dólares USA»; y en escrito de conclusiones el período se concreta desde septiembre de mil novecientos setenta y seis a treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, y que importan la cantidad de ciento sesenta y un millones doscientas treinta y cuatro mil setecientos ocho con veinte pesetas y cuatro millones ciento dos mil doscientos siete con treinta y ocho dólares USA»; motivo que, como los que le anteceden, ha de perecer, dado que ya en el suplico de la demanda inicial, sin perjuicio de postular la condena a cantidad determinada referida a concreto período de tiempo, siempre la hace extensiva a «la que resulte acreditada en período probatorio, en razón a las exportaciones realmente efectuadas», de aquí que, como acertada y concluyentemente razona la Sala de instancia en su considerando sexto, la extensión dada al petitum en los escritos de réplica y ampliación se acomodó a la normativa prevista en los artículos quinientos cuarenta y ocho, quinientos sesenta y tres y quinientos sesenta y cuatro de la Ley procesal, siendo acogida la demanda a la vista del resultado probatorio, no por ninguna ampliación verificada por la entidad recurrida en su escrito de conclusiones, que sólo

matiza que el resultado de la prueba corrobora y deja puntualizado que la suma a pagar es la que en definitiva se estima y que se contrae a todas las reclamaciones derivadas del contrato que liga a las partes, con el tope de la fecha inicial, mes de septiembre de mil novecientos setenta y seis; razones que determinan que al haber sido acomodado el fallo impugnado a las pretensiones oportunamente deducidas, no se haya producido la incongruencia denunciada, lo que justifica el perecimiento del motivo; a lo que también ha de añadirse, que conforme el artículo mil seiscientos noventa y tres de la Ley procesal establece, sólo se produce indefensión cuando la parte que invoque la infracción de normas relativas a los actos y garantías procesales, haya pedido la subsanación de la falta o transgresión en la instancia en que se hubieren cometido, en el supuesto que se contempla en primera instancia, habiéndose limitado la parte aquí impugnante a evacuar los traslados de los escritos en los que dice haberse producido las infracciones que denuncia, sin haber pedido su subsanación.

QUINTO.- Con el mismo amparo procesal que el anterior, número tercero del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Rituaria, se acusa en el quinto motivo, «la infracción de las normas reguladoras de la sentencia y en concreto la infracción del artículo trescientos cincuenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con los artículos mil ciento trece, mil ciento catorce y mil ciento veinticinco del Código Civil»; motivo con el que lo que se trata de tacharse de incongruente es el pronunciamiento contenido en el auto de aclaración de la sentencia de primer grado en cuanto hace extensivo el pago «a las ulteriores liquidaciones que pueda efectuarse sin ejecución de... por razón de exportaciones efectuadas por Motor I., S. A. a Siria con posterioridad al mes de mayo de mil novecientos ochenta», lo que a su juicio entraña una condena de futuro, que infringe las normas de derecho material que cita; motivo cuya repulsa se impone, prescindiendo de las razones últimas referidas en el fundamento de derecho anterior, por lo siguiente: de una parte, habida cuenta de los términos de su formulación, pues aunque al recurso de casación se haya desprovisto en la nueva normativa procesal, del excesivo formalismo anterior, lo que no puede admitirse es que en un mismo motivo se aglutinen denuncias que se refieren a cuestiones que se contemplan en distintos ordinales del artículo mil seiscientos noventa y dos, cuales son, en el motivo contemplado el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, a que se refiere el ordinal tercero, y la infracción de normas en el ordenamiento jurídico, que es el cauce del quinto, aglutinación que la propia impugnante reconoce, no ya sólo en su formulación, sino en el último párrafo del desarrollo en el que dice «subsidiariamente y para el caso de que fuera estimada la infracción del artículo trescientos cincuenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Civil se formula, asimismo, al amparo del número quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos de dicha Ley, por infracción de los artículos mil ciento trece, mil ciento catorce y mil ciento veinticinco del Código Civil en función de las argumentaciones antes expuestas», subsidiariedad de articulación que pugna con la claridad que debe presidir la formulación y desarrollo de todo motivo; de otra, dado que, como antes se dejó dicho, tal pronunciamiento aclaratorio, no traspasa los límites de lo oportunamente pedido, ya que la fijación se remite a «todas las operaciones mediante entre las partes», incluso refiriéndolas a la fase de ejecución de sentencia, de aquí que el auto aclaratorio que

así lo acuerda no incide en la incongruencia denunciada; y, por último la aplicabilidad de los artículos que se dicen infringidos, presupone el planteamiento de una cuestión nueva no suscitada en la instancia, lo que hace inadmisibile el motivo, vista la regla segunda del artículo mil setecientos diez de la Ley citada, que en este trance deviene en desestimación.

SEXTO.- Acusa el motivo sexto, por vía del número cuarto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Adjetiva Civil, «el error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en los autos que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradictorios por otros elementos probatorios», error que la entidad impugnante no asienta, como el ordinal citado exige «en documentos que obren en los autos», sino que lo ampara tanto en alguno de los documentos incorporados a las actuaciones —sin tener en cuenta que la Sala aprecia la prueba de forma conjunta y que se detiene en el examen concreto de alguno de los citados, de cuya valoración que entraña exégesis interpretativa, cuyo combate ha de hacerse por otro cauce, como en pruebas de confesión y testificales, y tras realizar una valoración de las mismas—, con olvido de que la casación no es una tercera instancia, y sienta sus propias conclusiones, de las que deduce, contrariamente a lo que en la instancia se establece, que no haya prueba alguna que demuestre que la recurrida ha intervenido o participado en negociaciones o gestiones encaminadas a la firma del acuerdo con Siria y constitución de la Sociedad conjunta, «como afirma la sentencia recurrida», que hay pruebas concluyentes de su falta de participación, «lo que patentiza la equivocación en que incurre la sentencia recurrida», el Juzgador «afirma erróneamente que aquélla desplegó una actividad eficaz en las referidas negociaciones y que todo se debió a su labor y mediación», es decir lo contrario de lo que de la prueba practicada resulta: planteamiento y desarrollo totalmente inadmisibles, que abocan al perecimiento del motivo, pues lo cierto es que la recurrente, emprende un camino ya reprobado por esta Sala en su reciente sentencia de quince de septiembre del corriente año (R. 1985, 4261), en la que explicita que el error ha de resultar «únicamente de documentos» no de otro tipo de pruebas, debiendo resultar la equivocación del Juzgador del propio contexto del que se cite, precisando en que parte del mismo coñste la aseveración del error acusado, debiendo prevalecer la valoración de la instancia siempre que se realice de forma conjunta, como aquí acaece.

SÉPTIMO.- Constituye doctrina reiterada de esta Sala —sentencias de veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y tres y nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro—, que la censura de la calificación del negocio jurídico que ligue a las partes, llevada a cabo por la Sala sentenciadora en la instancia, al entrañar un problema de interpretación, es revisable en casación, siempre que se invoque en alguno de los motivos integrados a tal recurso extraordinario, la infracción de las normas de hermenéutica contractual contenidas en los artículos mil doscientos ochenta y uno al mil doscientos ochenta y nueve de la Ley Procesal, vía utilizada por la entidad aquí impugnante, al formalizar el octavo de los motivos, circunstancia que permite a esta Sala, a la vista de la denotada doctrina abordar tal problema, e íntimamente ligado con el mismo el de la validez del desistimiento unilateral de la recurrente, producida en el año mil novecientos setenta y cinco, al

negarse a satisfacer las comisiones de contrario pretendidas, poniendo así fin a un contrato de duración ilimitada.

OCTAVO.- Que el contrato que a las partes liga ha de calificarse, a la vista del contenido documental aportado, como atípico, de naturaleza «sui generis» y complejo, el que refleja el derecho de la entidad recurrida al recibir unas determinadas percepciones sobre las exportaciones verificadas por la interpelada a Siria, pero sin que en modo alguno pueda entenderse, de su contexto, consecuencias indefinidas en orden a su duración, y en lo que se refiere a la percepción de tales percepciones, indeterminación temporal, que no puede en forma alguna devenir perpetua, como la sociedad demandante, ahora recurrida, pretende, y sin posibilidad, lo mismo para ella que para su oponente, de revocación unilateral, en un momento determinado; posibilidad de revocación, que ya ésta misma Sala admitió en sus sentencias de veintinueve de mayo de mil novecientos setenta y dos, catorce de febrero de mil novecientos setenta y tres, veintiuno de abril de mil novecientos setenta y nueve y once de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, las que proclaman que el contrato puede ser denunciado unilateralmente por una de las partes, en aquellos supuestos de duración ilimitada, en los que se establezcan pactos de exclusividad, en defecto de expresa estipulación, no puede admitirse se concierten por tiempo ilimitado, de aquí sea dable su revocación unilateral, que, como se dice en la última de las resoluciones citadas, podrá determinar, si el tal desistimiento es abusivo, las pertinentes consecuencias de orden indemnizatorio, razonamiento que lleva a la conclusión de que, si la denuncia verificada del contrato por la entidad aquí impugnante se llevó a efecto en el año mil novecientos setenta y cinco, como expresamente se dice en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, aquélla es válida, y la consecuencia ha de ser que la relación obligatoria mediante entre las partes quedó válidamente extinguida, sin perjuicio de las secuelas indemnizatorias que fueron procedentes, desapareciendo así la obligación del pago de percepciones reclamadas por la actora, en sus escritos de alegaciones, de cuyos pedidos declarativos y de condena debe ser absuelta su oponente, por acogida de los motivos octavo, noveno y undécimo, respectivamente denunciados, con amparo procesal todos ellos en el número quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley Adjetiva Civil, que respectivamente acusan la infracción de los artículos mil doscientos ochenta y uno y mil doscientos cincuenta y seis, mil setecientos treinta y dos y mil setecientos treinta y tres del mismo Cuerpo legal y doscientos setenta y nueve del Código de Comercio y la de los artículos mil doscientos veinticinco y mil doscientos cincuenta y ocho del Código sustantivo.

NOVENO.- Lo expuesto en el precedente fundamento, tiene además su amparo, porque en definitiva, la actividad mediadora de la demandante, en que justifica su pretensión, vino encaminada al logro de la obtención por la entidad demandada en Siria, de la exclusiva de tractores por ella fabricados, cuyo logro es lo que podía dar base, en su caso, a indemnización por causa de relación jurídica de corretaje, que no es procedente decidir en la presente litis al no haberse sometido a debate tal cuestión, que viene limitada a concretos y determinados porcentajes en venta, y más en cuanto que el corretaje requiere precisión inmediata, a contemplar, al ser logrados los efectos de la mediación, que como

queda dicho, en el caso en cuestión, era la obtención de la aludida concesión en exclusiva, pero no las consecuencias de futuro vinculantes, que pudieran resultar, respecto al alcance de la misma, que aun habiendo sido considerada en el contrato, no posibilita que lo sea de forma indeterminada en el «quantum» e indefinida en el tiempo, ya que entender lo contrario, pugna con la naturaleza propia del corretaje.

DECIMO.- A mayor abundamiento, concluida la relación de corretaje de H. Trading Co., tendente al logro de aproximación de la entidad demandada, ahora recurrente, con los correspondientes organismos en Siria para la obtención en exclusiva en esta nación de la venta de tractores, lo que pretende es establecer el derecho al abono de la retribución correspondiente con estricto sometimiento a la actividad aproximadora a tal fin, que de no quedar adecuadamente fijada en el correspondiente contrato habrá de fijarse con arreglo al uso y práctica mercantil en la plaza de cumplimiento, en aplicación analógica de lo normado en el artículo doscientos setenta y siete, párrafo segundo del Código de Comercio, pero no el proyectar los efectos del corretaje a posteriores secuencias contractuales derivadas de dicha concesión en exclusiva obtenida, como pretende la demandante, ahora recurrida, ya que siendo la esencia básica del corretaje en consideración y contemplación de un contrato definitivo, como se deduce del contenido de la sentencia de esta Sala de dos de diciembre de mil novecientos dos, que estableció la dependencia de la remuneración al cumplimiento de la comisión cuyo desempeño se hubiera confiado, o con más precisión, como proclaman las de cinco de julio de mil novecientos cuarenta y seis, dieciséis de abril de mil novecientos cincuenta y dos y veintiocho de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis, cuando el contrato quede perfeccionado, como ha sucedido con la obtención de concesión exclusiva, que era la finalidad de la mediación de corretaje, de tal manera que las compraventas desarrolladas posteriormente a dicha mediación de corretaje, a las que se estableció contractualmente participación a la demandante, en el contrato atípico y complejo contemplado, no venían afectadas por el referido corretaje, dado que la demandante no intervino en las compraventas afectadas por la reclamación formulada en la litis con concreto y específico concierto en él, dado que faltaba actuación mediadora directa entre Motor I., S. A. y los organismos sirios, sino desligada de éste, aunque tuviera su causa generante por su derivación, y en consecuencia jurídicamente conduce a un convenio directo de H. Trading Co. no mediadora ya, con los correspondientes organismos del citado país para la venta en exclusiva de los tractores en cuestión, sino directamente desarrollada por la recurrida por y para la recurrente, en una relación fáctico jurídica «intuite personae», es decir con eficacia vinculante en el ámbito estrictamente personal, la que en razón a su índole y características, puede ser dejada sin efecto mediante la correspondiente denuncia del convenio por cualquiera de las partes, posibilidad de denuncia y extinción que viene basada en el módulo fundamentador de confianza que representa y que no cabe entender permanezca indefinidamente cuando la misma cese.

UNDECIMO.- Como se deja dicho la compleja relación jurídica que une a los contendientes permite poner fin a la misma mediante la denuncia unilateral del vínculo obligatorio, cuando no se ha pactado tiempo de duración y más cuando éste se establece con carácter indefi-

nido, como tiene reconocido esta Sala en sentencia de catorce de junio de mil novecientos setenta y tres (R. 2536), como facultad que si no es contemplada con carácter general en nuestro Código Civil, si tiene específica consideración en algunos casos, como en el artículo mil quinientos noventa y cuatro, referente al contrato de arrendamiento de obra, los mil setecientos cuatro y mil setecientos cinco, sobre sociedad y el mil setecientos treinta y dos, primero y segundo, en orden al mandato, dado que, como dijo la sentencia de veintinueve de mayo de mil novecientos setenta y dos (R. 2020), esa facultad de desistimiento no significa dejar el cumplimiento y la validez de un contrato al arbitrio de uno de los contratantes, sino autorizarlo para poner fin a una determinada situación jurídica, que en el caso de concesión mercantil en exclusiva no procede reconocer se mantenga por tiempo indefinido, porque siguiendo la orientación ya marcada en las sentencias de veintitrés de marzo de mil novecientos veintiuno, veintinueve de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, dieciocho de marzo y veintiocho de mayo de mil novecientos sesenta y seis, catorce de febrero de mil novecientos setenta y tres, veintiuno de abril de mil novecientos setenta y nueve y once de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, no es posible asignar al pacto de exclusiva mediante entre las partes, el carácter de perpetuidad que la entidad demandante pretende, dado que su alcance ha de entenderse en el sentido de evitar la concurrencia en el mercado de otros en la actividad indicada de promoción de ventas y apertura del mercado de tractores de la interpelada, entrañando una restricción a la libertad comercial de los contratantes, que como tal no admite una interpretación amplia, sino limitada, de tal forma que cualquier circunstancia determinante de falta de confianza, viabilice la posibilidad de denuncia unilateral, sin más que dar preaviso en el término pactado o en su defecto en el determinado por los usos, y a falta de ambas circunstancias, concediendo un término prudencial atendida la naturaleza de la obligación, como admite la sentencia de catorce de febrero de mil novecientos setenta y tres, y que es el remedio al que acudió Motor I., S. A. con su carta de dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y cinco, dirigida a su contraparte, haciéndole saber que «suspendemos todas nuestras relaciones comerciales con su firma» y «cancelamos su designación como nuestro tratante de los productos que estaban autorizados a vender en Siria»; todo lo cual es consecuencia de que aunque en nuestro derecho no exista normativa específica, la realidad es que la perpetuidad es, salvo casos excepcionales, entre los que no se encuentra el contemplado, opuesta a la naturaleza misma de la relación obligatoria, al constituir una limitación a la libertad que debe presidir la contratación, que merece ser calificada como atentatoria al orden jurídico; sin que a esa facultad resolutoria se oponga a la solución acogida por los tribunales sirios en orden a reclamaciones ante ellos formulada, ya que afectan a devengos producidos antes de la denuncia contractual referida; y sin que tampoco sea de examinar en esta «litis», como ya antes se apuntó, la problemática referida a las consecuencias o secuelas indemnizatorias que pudieran derivarse de la tan repetida denuncia, al no ser cuestión sometida a debate; y ello por cuanto todo proceso ha de estar presidido por los principios de audiencia y contradicción, cuyo incumplimiento haría incidir esta resolución en incongruencia, cuando lo realmente debatido en el que se examina, queda reducido a determinar si Motor I., S. A. está o no obligada a satisfacer de manera indefinida en el tiempo

comisiones a H. Trading Co. en la forma postulada en la demanda.

DUODÉCIMO.- La acogida de los motivos de casación a que se hizo referencia en el fundamento de derecho octavo, hace superfluo o innecesario el examen de los restantes, determinando la casación de la sentencia recurrida y la consiguiente revocación de la sentencia dictada, en trece de mayo de mil novecientos ochenta y tres, por el Juzgado de Primera Instancia número siete, de los de Barcelona, absolviendo a la parte demandada y aquí recurrente de los pedimentos suplicados en los escritos de alegaciones de su contraparte, sin que proceda hacer expresa condena de costas en ninguna de las instancias, ni en las producidas en el presente recurso, debiendo cada parte satisfacer las suyas, en cumplimiento de lo normado en el artículo mil setecientos quince, inciso cuarto de la Ley Procesal Civil.

(RJA, 1985, nº 6600, 5635)

30

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. Responsabilidad del porteador. Convenio de 19 de mayo de 1956. Pérdida de la mercancía

Tribunal Supremo (Sala 1ª de lo Civil). SENTENCIA DE 20 DE DICIEMBRE DE 1985. Ponente: D. Rafael Pérez Gimeno.

La entidad «Victoria F.-V.-A.-G.» presentó, ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de San Sebastián, demanda de juicio declarativo de mayor cuantía contra «Transportes E.. S. L.» sobre reclamación de treinta y tres mil setecientos cinco dólares o su valor en moneda española al tiempo de realizarse el pago, más sus intereses legales, como indemnización por el importe de mercancías perdidas durante la realización de un transporte internacional por carretera por parte de la interpelada, importe que la actora había tenido que abonar al cargador en virtud de contrato de seguro con él concertado.

La demandada se opuso, y el Juzgado estimó la demanda sin especial imposición de costas.

Interpuesto recurso de apelación por la demandada, la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Pamplona estimó el recurso, y con revocación de la sentencia impugnada, desestimó la demanda, absolviendo de ella a la interpelada, sin expresa condena en costas en ninguna de las instancias.

La sociedad demandante interpuso recurso de casación.

El T. S. declara no haber lugar al recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La entidad aseguradora actora, Victoria F.-V.-G., subrogada por pago en lugar del consignatario de la mercancía cargada en camión en San Ciprián (España) y que no llegó a su destino en Bias-

sondo, Milán (Italia), por haber sido sustraída en esta última nación, reclama del porteador, en el proceso del que este recurso dimana, el importe de dicha mercancía, habiéndose dictado por la Audiencia de Pamplona la sentencia aquí recurrida —revocatoria de la de primera instancia— en cuyo tercer considerando afirma «...que el camión propiedad de la empresa demandada fue sustraído por personas desconocidas sobre las 21,30 horas del día 9 de marzo de 1.982 en las proximidades de Milán, mientras el conductor cenaba en un restaurante, habiendo aparecido el vehículo días después sin la carga...» y respecto a si el conductor dependiente de la empresa porteadora, tomó o no las precauciones normales o cumplió la diligencia necesaria para evitar el suceso destaca «...que la sustracción del camión tuvo lugar en horas poco propicias, lugar habitado, y supuestamente vigilado por la proximidad de fuerzas policiales, sin que de otro lado el conductor permaneciera fuera de vista del vehículo mas que durante la cena, tras haber cerrado la puerta de acceso...» de donde deduce que «...se cumplieron las diligencias normales y que no se ha probado de contrario por la actora que el robo o sustracción ocurriera por negligencia del conductor...» antes al contrario, como declara anteriormente, el hecho fue consecuencia «...de una actuación fuera del círculo del obligado, porteador, y que viene a suponer una «vis maior» plenamente probada por el mismo, conforme al artículo 361 del Código de Comercio».

SEGUNDO.- A los efectos del presente recurso es necesario sentar como presupuesto jurídico, en primer lugar, que la normativa aplicable para decidir las contradictorias pretensiones de las partes está constituida por el Convenio de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera de 19 de Mayo de 1.956, al que se adhirió España y que entró en vigor el día 19 de Mayo de 1.974, (B. O. E. de 7 de Mayo de 1974), en cuanto su artículo 1º, con independencia del domicilio y nacionalidad de las partes contratantes someta a su regulación, con las excepciones que establece en su párrafo 4º, los transportes de mercancías por carretera siempre que concurren los siguientes requisitos: que el contrato sea oneroso, que el transporte se efectúe por automóviles, vehículos articulados, remolques y semirremolques, y, finalmente, que los puntos de origen o toma de la mercancía y el lugar de destino estén situados en dos países diferentes, uno de los cuales, al menos, sea contratante, requisitos todos ellos que se dan en el transporte que se describe en el anterior fundamento; y, en segundo término, que el artículo 17 del referido Convenio atribuye al transportista la responsabilidad por la pérdida total o parcial de la mercancía entre el momento de la recepción y el de la entrega, a no ser que la pérdida haya sido ocasionada, entre otros supuestos, por circunstancias que el transportista no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir, es decir, por causa de fuerza mayor cuya prueba le impone el artículo 18; quedando, por tanto centrado el tema aquí debatido, a la vista del primer motivo deducido al amparo del número 5º del artículo 1.692 de la Ley procesal civil y en el que se denuncia la infracción del citado artículo 17, en si la sustracción del vehículo con su carga, que determinó el incumplimiento contractual por no entrega de la mercancía, puede o no subsumirse en el supuesto de fuerza mayor excluyente de la responsabilidad del porteador que contempla el párrafo 2º del indicado precepto; y, a tal efecto, si la sentencia recurrida afirma, como se ha consignado anteriormente «que la sustracción del camión tuvo lugar en horas poco propicias, lugar

habitado, y supuestamente vigilado por la proximidad de fuerzas policiales, sin que el otro lado el conductor permaneciera fuera de vista del vehículo más que durante la cena, tras haber cerrado la puerta de acceso...», es claro que nos encontramos ante un supuesto de exoneración de la responsabilidad del porteador contemplado en el expresado artículo, pues si la posibilidad de prever eventos dañosos o perjudiciales depende de las circunstancias de cada caso concreto, sin que, en términos generales, sea exigible una previsión que exceda de la que pueda esperarse de una persona prudente respecto a los riesgos del normal desarrollo de la vida, y si la evitabilidad o inevitabilidad del resultado, o posibilidad o imposibilidad de impedir las consecuencias del suceso dañoso debe ponerse en relación con el grado de diligencia que deba prestarse según el tenor de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, ningún reproche puede hacerse al conductor del camión, atendidos los expuestos antecedentes y, por tanto, debe afirmarse que la sustracción temporal del camión y definitiva de la mercancía se debió a circunstancias que el conductor no pudo evitar, puesto que nadie discute en la litis que el lugar de aparcamiento del vehículo durante la cena del conductor no fuera el adecuado por existir otro más idóneo, ni que fuera descuidado por haber dejado el camión abierto, y, en consecuencia, ha de entenderse, igualmente, que no pudo impedir las consecuencias que tal sustracción ocasionó en orden al cumplimiento de la obligación de entrega de la mercancía en el lugar de destino; concluyendo, por todo ello, que tal incumplimiento se debió a fuerza mayor excluyente de la responsabilidad del porteador lo que lleva aparejado el rechazo del indicado motivo.

TERCERO.- Los motivos segundo y tercero deducidos, igualmente, al amparo del mismo ordinal 5º, acusan respectivamente la infracción del artículo 1.105 del Código Civil en relación con el artículo 631-2 del Código de Comercio, y la infracción del artículo 1.104, y 3º, 1 del Código Civil, el primero de ellos en relación con el artículo 362 del Código de Comercio; motivos que deben decaer, en primer lugar, porque la normativa aplicable al caso de litis, como se ha dicho anteriormente, es la contenida en el indicado Convenio Internacional de Transporte por Carretera, y no la del derecho interno español; en segundo término; porque en cualquier supuesto son sustancialmente coincidentes las respectivas regulaciones, en cuanto una y otra excluyen de la responsabilidad del porteador los casos de fuerza mayor, en tercer lugar, porque la sentencia recurrida afirma que el conductor cumplió con la diligencia que le era exigible y, por tanto, excluye su negligencia y niega que dejaran de tomarse las precauciones procedentes, y, finalmente, porque ninguna declaración contiene la sentencia recurrida relativa a si el conductor activó o no el dispositivo antirrobo, y por consiguiente, argumentar sobre su no activación es hacer supuesto de la cuestión, inadmisibles en casación.

CUARTO.- Por lo expuesto procede desestimar el recurso, todo ello con expresa imposición de las costas del recurso a la parte recurrente por imperativo del artículo 1.715 de la Ley procesal, y sin hacer declaración sobre depósito por no haberse constituido al ser discordantes las sentencias de instancia.

TRANSPORTE AÉREO. Fletes de carga. Porte aéreo o conocimiento aéreo. Convenio de Varsovia de 12 de octubre de 1929.

Tribunal supremo (Sala 1ª, de lo Civil). SENTENCIA DE 31 DE DICIEMBRE DE 1985. Ponente: D. Jaime Santos Briz.

La representación de «Iberia, Líneas Aéreas de España S. A.» formuló ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de los de Madrid, autos de juicio declarativo de mayor cuantía, contra «Airpack, S. A.», sobre reclamación de cantidad.

El Juez de Primera Instancia dictó sentencia, por la que, estimando la demanda interpuesta por la representación de «Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A.», contra «Airpack S. A.», condenó a la parte demandada a que pague a la actora la cantidad de 7.249.606 pts. con sus intereses legales desde la interposición de la demanda, imponiendo a la demandada las costas de juicio. Apelada la sentencia a la Audiencia por la parte demandada, desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia dictada por el Juez de Primera Instancia en todas sus partes, sin hacer a ninguno de los litigantes expresa imposición de las costas causadas en el recurso.

La representación de la demandada, formalizó recurso de casación por infracción de ley.

El T. S. declaró no haber lugar al recurso interpuesto, condenando a la parte recurrente al pago de las costas y a la pérdida del depósito constituido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Renunciados en el acto de la vista de casación los dos primeros motivos, queda por examinar únicamente el tercero, donde se alega la «infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones que fueren objeto de debate, al amparo del párrafo quinto del artículo mil seiscientos noventa y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil». La acción de reclamación de cantidades devengadas por fletes, con previa deducción de las comisiones correspondientes a la recurrente, que actuaba como agente o gestor de fletes de carga entre entidades expedidoras y empresas dedicadas al transporte, fue estimada en ambas instancias al considerar probada la suma debida, previa apreciación de la prueba pericial practicada para mejor proveer. Siendo de resaltar que la recurrente no actuaba en las sucesivas relaciones jurídicas continuadas de agencia de gestión de portes como cargadora, ni como porteadora y menos como consignataria o destinataria de las mercancías objeto en cada caso del transporte, sino como mero agente comisionista intermediario, y de ahí que no pueda serle aplicable el artículo novecientos cincuenta y uno del Código de Comercio, que se refiere a la prescripción de acciones relativas al cobro de fletes y gastos a ellos inherentes, cuyo plazo de seis meses empieza a contarse desde «la entrega de los efectos que los adeudaron», frase esta última que ninguna relación tiene con el comisionista encargado de percibir de los destinatarios de las mercancías los fletes correspondientes y de entregar su importe al porteador, previa deducción del premio de comisión. Por ello, el supuesto de

hecho debatido encaja más precisamente en el artículo doscientos sesenta y tres del mismo Código, referido a la obligación de rendir cuentas específicas y justificadas que tiene el comisionista, reteniendo el importe de la comisión y reintegrando al comitente (en este caso el porteador o empresa recurrida), en el plazo y forma que éste prescriba, el sobrante que resulta a su favor. Y siendo así es preciso también observar que el mismo Código sustantivo citado no contiene un plazo específico o expreso de prescripción referido al contrato de comisión mercantil, ni tampoco se refiere a dicha prescripción la Ley de navegación aérea cuarenta y ocho mil novecientos sesenta, de veintiuno de julio, ni el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el doce de octubre de mil novecientos veintinueve y en vigor para España desde mil novecientos sesenta y seis. Estas normas internacionales y la Ley de navegación aérea regulan únicamente una prescripción de las acciones de responsabilidad en caso de accidentes por daños en las personas o en las cosas (artículos ciento quince a ciento veinticinco de esta última Ley y diecisiete a treinta del Convenio citado), cuestión distinta de la acción cuyo ejercicio se plasmó en la demanda inicial de esta litis.

SEGUNDO.- No es procedente tampoco la aplicación analógica del artículo novecientos cincuenta y uno del Código de Comercio al supuesto de esta litis: a) porque como ya se ha expuesto no se trata en el debatido de un caso de entrega de mercancías por transporte, ni, por tanto, desde la misma entrega puede contarse el plazo prescriptivo, sino de liquidación de cuentas de agente comisionista respecto del comitente; b) por consiguiente, no concurre el supuesto de hecho aludido en el artículo cuarto, apartado uno, del Código Civil para la aplicación analógica en cuanto los dichos supuestos no son semejantes ni se aprecia entre ellos identidad de razón; c) en último término, la aplicación del plazo prescriptivo propuesto exigiría una fecha de inicio o arranque del mismo, que es cuestión de hecho sometida a la libre apreciación del Tribunal de instancia, el cual no fija ninguna en este sentido, por lo que mal podría hacerse efectiva la prescripción alegada, salvo, lo que es improcedente, que esta Sala actuando como una tercera instancia revisase toda la prueba practicada para determinar aquella fecha de arranque.

TERCERO.- En defecto de disposición expresa sobre prescripción de acciones derivadas de contratos de comisión o agencia, tanto en el Código de Comercio como en leyes mercantiles especiales, se aplicará el precepto del artículo cuatro, apartado tres, del Código Civil, a cuyo tenor «Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otra leyes». Ya que cuando no existe una remisión explícita a un determinado cuerpo legal como Derecho supletorio se aplicará las disposiciones del Código Civil. Y así reconducida la cuestión, ha de estimarse equivocada la posición que adopta a este respecto la sentencia recurrida, al aplicar al caso en cuestión la prescripción de cinco años que prevé el artículo mil novecientos sesenta y seis del Código Civil en su número tercero para pagos «que deban hacerse por daños o en plazos más breves», en cuanto que se trata del pago de principal que carece de la nota de periodicidad, como es la liquidación de comisiones, dependiente lógicamente de que proceda, con independencia de toda periodicidad, que no resulta acreditada en autos. La regla

tercera del artículo mil novecientos sesenta y seis, como se deduce de lo declarado por esta Sala —Sentencia de dieciséis de mayo de mil novecientos cuarenta y dos, no es de aplicación al caso en que se trata de hacer efectivo el total importe de pagos independientes, pues esta prescripción se regula por el artículo mil novecientos sesenta y cuatro; aparte de que el mismo artículo mil novecientos sesenta y seis fue dictado para aquellas obligaciones en que el pago de lo principal es periódico, nota de la que, como se ha dicho, carece el pago de fletes recibidos de otras personas y la retención de comisiones a favor del agente. Consideraciones que no trascienden sin embargo el fallo recurrido, que ha de ser el mismo, al proceder la desestimación del recurso, aunque admitiendo que el plazo de prescripción no es el aceptado por la Sala de instancia, sino el general de las obligaciones personales que no tienen plazo especial. En definitiva, es procedente también el rechazo de este motivo y con él la desestimación de la totalidad del recurso.

CUARTO.- Por disposición del párrafo último del artículo mil setecientos quince de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la recurrente pagará las costas del recurso desestimado, y se acordará la pérdida del depósito, al que se dará el destino legal.

(*RJA*, 1985, n.º 6625, pag. 5677)

DOCUMENTACIÓN

